

CONFLUENCIA

revolucionaria por la patria socialista

Año 1 - Nº 4 - Junio 1974

\$ 3,50

16 DE JUNIO DE 1955



**Pasó mucho tiempo;
corrió mucha sangre**

**PACTO PARA LA DEPENDENCIA O
ALIANZA PARA LA LIBERACION**

**INFORME
ESPECIAL**

El Topo Blindado



Sumario

La unidad del pueblo	4
Las dos tácticas de la derecha .	6
Lucha sindical y lucha política	9
Portuarios: La ley de la selva .	12
Contrato de Trabajo: mucho para la dictadura, poco para un gobierno popular	15
Un negocio embrujado	18
¿Pacto para la dependencia o alianza para la liberación? ...	19
Quieren proscribir a Montoneros	35
Universidad: No docentes y estudiantes contra la ofensiva vandorista	37
La Memoria del Pueblo:	
—El Cordobazo es de todo el pueblo	40
—Emilio Jáuregui: La búsqueda de un revolucionario	43
—Aramburazo: el mandato del pueblo peronista	45
Prensa Popular:	
¿Gobierno peronista = dictadura militar?	47
Contra todas las fuerzas populares	49

Editor: CONFLUENCIA SRL. (e. f.).
Director: **Eduardo Y. Jozami.** Registro de la Prop. Intelectual número 1.236.855. Correspondencia a: **Revista Confluencia, Poste Restante, Sucursal 13.** Impreso en Rotog. Arg., Perú 1755, Capital. Distribuidor en Capital: **Machi y Cía SRL.,** Carlos Calvo 2426, Cap. Distribuidor en Interior: **Cóndor SRL.,** Independencia N° 2744, Cap. Las notas de **CONFLUENCIA** son de libre reproducción citando su fuente.

Al Cierre

la convocatoria de Perón

Perón convocó al pueblo. Todo fue tan rápido que muchos no pudieron llegar a la plaza. Fue un "operativo relámpago", en el que se prescindió deliberadamente de las organizaciones más combativas que han ido forjando los trabajadores y el pueblo peronista.

Muchos respondieron al llamado. Perón volvía a hablar de liberación nacional, atacaba otra vez a los "diarios oligarcas", criticaba a "algunos empresarios, funcionarios y sindicalistas", denunciaba a los que han desatado una campaña contra la estatización de la T.V. y el gobierno de la Universidad. A pesar de cierta ambigüedad, el pueblo sintió por primera vez que se lo llamaba a defender el gobierno que había elegido, a enfrentar a la derecha. Claro que un proceso de desmovilización no se revierte en cinco horas, máxime cuando se ha sembrado la confusión atacando a los sectores más consecuentes del movimiento peronista.

Perón tuvo que apelar a la movilización porque hay un cuestionamiento a la política del gobierno. Por eso hay que distinguir entre el sabotaje de los monopolios y los terratenientes con el desabastecimiento, y el cuestionamiento de los trabajadores a un Pacto para el que no han sido consultados y que no responde a sus intereses. Porque aunque en la OIT se cuenten maravillas, aquí está claro que el Pacto Social no funciona.

Para enfrentar realmente a la derecha hay que apoyarse en las organizaciones del pueblo. En las que no alcanzaron a mostrar su presencia organizada en la plaza —pese a su decisión de concurrir— porque así se había preparado la cosa. Además, es necesario satisfacer los legítimos reclamos de los trabajadores. Porque muchos de los que fueron a la plaza, y los muchos más que están dispuestos a defender al gobierno contra la derecha y los monopolios, son los que reclamando por sus salarios y sus reivindicaciones cuestionan a diario el Pacto Social.

El segundo discurso fue más ambiguo. Ya no se mencionó a los oligarcas, sólo genéricas referencias contra la izquierda y la derecha. Por eso, hay que advertir contra la posibilidad de su instrumentación para reforzar el poder de la burocracia, para desarrollar la represión o negar los reclamos de los trabajadores.

Lo que las masas defienden es el proceso abierto el 11 de Marzo cada vez que aparece una mínima posibilidad de corregir el rumbo. Por eso el 1° de Mayo la mayoría del pueblo no fue a decir "conforme". Por eso los sectores más combativos y organizados se fueron de la plaza ese día. Por eso cuando se trata de enfrentar a la derecha, el pueblo está dispuesto a salir.

El Topo Blindado
Con la conducción de los trabajadores se construye

LA UNIDAD DEL PUEBLO

El 11 de marzo la derecha perdió una batalla. La avalancha de votos peronistas rompió las sutiles previsiones de Lanusse y de Mor Roig. No había segunda vuelta, nada para negociar con el peronismo. No faltaron los ultragorilas que se opusieron a la entrega del gobierno, pero los agentes del imperialismo comprendieron que frente a un pueblo movilizado eso podía tener imprevisibles consecuencias.

Ya que era imposible evitar que el peronismo volviera a ser gobierno, había que impedir que cumpliera su programa electoral. Sabiendo de las vacilaciones con las que podía manejarse todo proyecto conducido por los grandes empresarios, los monopolios imperialistas maniobraron para tratar de perder lo menos posible. Para ello había que imponer la desmovilización del pueblo y golpear a los sectores del movimiento peronista que reclamaban consecuentemente el cumplimiento del programa electoral. La burocracia vanderista será el instrumento principal de esta política, la avanzada de todas las fuerzas interesadas en obstruir el cumplimiento del mandato popular.

Mientras los personajes más comprometidos con la dictadura pasaban discretamente a segundo plano, los monopolios iniciaron una política de acercamiento al gobierno y la UIA terminó integrándose en la CGE. Después del 13 de julio, la prensa de la oligarquía no disimuló sus simpatías por la política oficial. "La Nación" llegó a defender la verticalidad, frente a quienes cuestionaban el liderazgo de Perón.

Muchos creyeron entonces que la derecha

se identificaba con el gobierno. Subestimaron las contradicciones entre los grandes capitalistas de la CGE y sus colegas de los monopolios imperialistas y además —y mucho más importante— olvidaron que por muy incorrecta que sea su política nunca será un gobierno peronista el mejor instrumento para negar las reivindicaciones de los trabajadores.

Pero para la derecha lo primero y principal era desmovilizar al pueblo, golpear a los sectores del peronismo que reclamaban el cumplimiento del programa del 11 de marzo. Después de conjurado este peligro, debilitado el gobierno por la falta de apoyo popular, la derecha pensaría en su propio proyecto. Volvería a desempolvar a los Lanusse y los Krieger Vasena. "La Nación" retomaría su lenguaje tradicional.

En las últimas semanas, son muchos los síntomas que muestran que los representantes de la oligarquía y el imperialismo comienzan a mostrar la cara con independencia del gobierno.

La política agropecuaria o el proyecto de estatizar la televisión provocan críticas violentas. Un agente de los monopolios como Alemann reclama abiertamente el golpe a la chilena. Por ahora es sólo una voz aislada, pero está marcando un camino.

El imperialismo ya no está a la defensiva. Ahora avanza para recuperar lo perdido, que no fue tanto como creyó hace un año. El proceso popular abierto el 11 de marzo ha sido distorsionado en sus aspectos esenciales. La burocracia vanderista se ha fortalecido en el aparato de los sindicatos. Los funcionarios de la dictadura como Cáceres, Villar y Margaride

El Topo Blindado

están otra vez al frente de la represión. La política del Pacto Social no contempla las reivindicaciones de los trabajadores ni favorece a los demás sectores sociales del campo popular. La unidad de todas las fuerzas antimperialistas que confluyeron el 11 de marzo hoy está quebrada, y amplios sectores del pueblo confundidos ante una política que no responde a sus legítimas expectativas.

Pese a esto, la oligarquía y el imperialismo siguen golpeando porque no están totalmente satisfechos. Aunque ellos también hagan negocios con los países de Europa Oriental, a los monopolios yanquis les preocupa que se desarrollen las inversiones del área socialista en el Cono Sur. Pese a las reiteradas concesiones del gobierno, a los terratenientes no les gusta la política de carnes. La orientación internacional argentina representa hoy un obstáculo para la ofensiva imperialista desatada en toda América latina. Para nuestros vecinos gorilas, el gobierno peronista sigue siendo un enemigo, aunque Perón haya tenido la "buena voluntad" de recibir a Pinochet.

Para desarrollar esa ofensiva, la derecha actúa dentro y fuera del gobierno. Impulsando la represión oficial contra los trabajadores y alentando a las bandas armadas de la burocracia, pero cometiendo además crímenes como los asesinatos recientes de 4 militantes que revelan la inspiración directa del imperialismo. Apoyando muchos aspectos del Pacto Social, pero saboteando la economía con un desabastecimiento cada más activo.

Para avanzar por este camino hay que seguir golpeando a los sectores del peronismo que impulsan consecuentemente la lucha por las reivindicaciones populares. Ante el fracaso evidente de todos los intentos por debilitar a las organizaciones de masas de la Juventud Peronista, se instrumenta un nuevo tipo de provocaciones que como el asesinato de Mujica tiende a aislar a las fuerzas revolucionarias del peronismo, a confundir y dividir a los sectores populares. Hoy se pretende avanzar más y se amenaza con ilegalizar a los Montoneros, que es como decir ilegalizar a los amplios sectores del pueblo que se identifican con su trayectoria y su proyecto político.

Enfrentar esta ofensiva creciente de la derecha implica promover la unidad más amplia de las fuerzas del pueblo, en torno al programa votado el 11 de marzo. Requiere también formular un plan de medidas concretas que contemplen las reivindicaciones que hoy inte-

resan a los trabajadores y a los demás sectores perjudicados por la aplicación del Pacto Social, y promover en torno a este programa de reivindicaciones por los salarios, por el control de precios, contra el desabastecimiento, la más amplia organización popular.

Además, esto supone afirmar claramente la hegemonía de los trabajadores, y esto se hace impulsando sus luchas contra la política del Pacto Social y desarrollando el enfrentamiento a la burocracia que es hoy el sostén de esa política.

Porque enfrentar la ofensiva de derecha no supone como creen algunos hacer concesiones a una política oficial que es contradictoria con los reclamos mayoritarios. Por el contrario, se trata de explicar que la derecha se fortalece gracias a la acción del gobierno que golpea a los sectores en los que debería apoyarse un gobierno popular; que la retracción política evidenciada por amplios sectores del pueblo se explica por su rechazo a la política del gobierno, porque, como lo muestran los conflictos recientes, cuando se trata de pelear por las reivindicaciones los trabajadores lo hacen con la misma consecuencia con que lo hicieron en los últimos 18 años.

Cuando se alerta respecto a las consecuencias de esta acción del gobierno, algunos se asombran de que las organizaciones revolucionarias del peronismo formadas en el enfrentamiento activo a la dictadura hoy se inquietan ante el peligro de una guerra civil. Son los que olvidan que los pueblos nunca eligen el camino más difícil, sino cuando los otros se han cerrado. Lo que preocupa con razón a las fuerzas revolucionarias del peronismo no es el enfrentamiento activo con los sectores proimperialistas, sino que este enfrentamiento no encuentre sólidamente unido y movilizado al pueblo. Que la perspectiva sea la de un nuevo 1955. Pero como hoy no está en nuestras manos evitar lo que en medida fundamental depende de la política de Perón, también hay que prepararse para eso. Sabemos que todo lo que se avance en esta etapa en la organización para enfrentar la ofensiva imperialista, será lo que permitirá evitar el aislamiento y seguir avanzando siempre junto con amplios sectores del pueblo, para librar la lucha por la liberación nacional y social en cualquier terreno que el enemigo la plantee. ♦

Las tácticas de la derecha

El alevoso asesinato de tres militantes sindicales del Partido Socialista de los Trabajadores fue seguido de la agresión que costó la vida a un integrante de la Juventud Comunista pocos días antes de que el presidente recibiera a los delegados de todo el mundo que participaban en el Congreso de esa organización. Ambos hechos muestran que se entra en una nueva etapa de la ofensiva de los sectores proimperialistas dirigida ahora contra todas las fuerzas del campo popular. Por otra parte, la prolongada detención que sufrieron los trabajadores de Matarazzo, el secuestro y clausura del semanario "El Peronista" y la represión indiscriminada desatada con motivo del operativo antiguerrillero de Tucumán muestran el aspecto institucional de la escalada represiva que ha dado un nuevo paso con la reciente creación del Consejo de Seguridad. Este organismo a cuyo frente estará el general Cáceres, último jefe de la policía de la dictadura militar, permitirá a las Fuerzas Armadas participar más directamente en las actividades de represión.

CADA UNO ELIGE SU ANIVERSARIO

En los últimos días de mayo abundaron los aniversarios. El 25, no sólo se cumplía uno más de la gesta de 1810, sino el primer año de la instalación del gobierno peronista, y, paradójicamente, el 29, día del Ejército, coincide con las celebraciones del Cordobazo y el Aramburazo. Es decir, de la movilización de masas que puso en crisis la política de la dictadura militar y de un acto de reparación histórica del pueblo peronista que impulsó la organización de sus fuerzas revolucionarias. Dos hechos que tienen bastante que ver con la instalación del actual gobierno, aunque no lo haya recordado el presidente, que asistió a la ceremonia del Día del Ejército y a la bravata del general Anaya, quien señaló que "el Ejército no olvida a sus muertos" en inequívoca referencia a Aramburu.

Para las organizaciones populares este 25 de mayo tuvo poca similitud con el del año anterior. Esta vez también la Juventud Peronista convocó a Devoto a reclamar la libertad de los presos. Claro, que éstos eran presos del gobierno peronista, que esta vez no se obtuvo la libertad de nadie y que la represión en toda la ciudad dejó más de 200 detenidos. En cuanto a la asunción del gobierno del compañero Cámpora no hubo ninguna recordación oficial. "La Nación", sin duda el más lúcido de los voceros de la derecha, señaló el sentido que debía darse a este "olvido": para el presidente el ciclo del gobierno peronista cese hace cargo personalmente del poder. El diario de la oligarquía no disimula su regocijo, porque sabe lo que significó en la historia reciente de las luchas del pueblo el 25 de mayo, como el 11 de marzo, que tampoco el gobierno recordó. Claro que no hay motivos para sorprenderse, si hasta la Marcha Peronista se ha dejado de cantar en los actos oficiales.

EL TIEMPO Y LA SANGRE

En las últimas semanas el general Perón pronunció varias ex-

posiciones de tono doctrinario, la más importante de ellas ante el Congreso del Partido Justicialista. Allí Perón reiteró que primero debe abordarse la reconstrucción para recién después encarar la liberación, tareas ambas "que pueden realizarse con buena voluntad y en paz, si se sabe proceder inteligentemente". En este y otros recientes discursos el presidente vuelve a considerar un acierto su decisión de 1955, cuando abandonó el gobierno "renunciando a provocar una guerra civil que hubiera costado muchas víctimas". Sin embargo, hace menos de dos años, en la "Actualización Doctrinaria", Perón se autocriticaba por no haber comprendido que eran mucho mayores los daños y las víctimas que habría de ocasionar la dominación oligárquico-imperialista. Y si hoy se ha elegido el tiempo y no la sangre y no se considera necesario "hacer las cosas a la tremenda", el presidente no explica por qué han caído tantos compañeros desde el 25 de mayo ni la ola de violencia desatada desde entonces contra las organizaciones del pueblo.

En la reorganización del Partido

La policía celebró así la asunción del gobierno popular.



El Topo Blindado

Justicialista, que muestra cierto desplazamiento de la influencia de la burocracia vandorista, se destacan dos elementos: el Partido se superpone al Movimiento y se disuelve la rama Juventud. Teniendo en cuenta que esta última era la única en la que se encuadraban importantes contingentes populares, queda claro que la nueva organización está lejos de ser el instrumento apto para canalizar la movillización del pueblo y se transforma en un aparato burocrático, en un partido más. Después de lo ocurrido el 1º en la Plaza, las decisiones del Congreso Justicialista a nadie pueden extrañar. Aplicando una política que rechazan los trabajadores y el pueblo peronista no pueden ofrecerse canales que garanticen la movillización popular; respaldando a la burocracia no puede hacerse funcionar el Movimiento sobre la base de la representatividad.

Lo más significativo es que la disolución de la rama juvenil implica el reconocimiento de que los organismos fantasmales creados por López Rega y las 62, como la J Perra o la Juventud Sindical, no pueden competir con las organizaciones de JP reconocidas por las masas peronistas. Es el reconocimiento del fracaso de una política que hizo de la liquidación de "la JP de las Regionales" un objetivo fundamental.

La gira de la delegación encabezada por el ministro Gelbard por los países del campo socialista ha tenido importantes consecuencias. Los convenios suscriptos no sólo importan la ampliación de mercados para nuestras exportaciones,



Victoria obrera en Matarazzo.

sino la realización de inversiones en infraestructura que tienden a cubrir las metas fijadas en el Plan Trienal. Es cierto que los más interesados en toda ampliación de los mercados son las empresas monopolistas, que son los principales exportadores, pero, a diferencia del convenio con Cuba, no son en este caso las únicas beneficiarias. Esta política no afecta directamente a los intereses imperialistas radicados en el país, pero las inversiones en infraestructuras significan un límite a sus posibilidades de expansión futura. Además implica un cuestionamiento de la dependencia en materia tecnológica y de comercio exterior que no dejará de crear contradicciones con el imperialismo yanqui, quien no subestima el significado político de esta apertura hacia el campo socialista.

Pero estos avances en materia de relaciones económicas internacionales no bastan para compensar las contradicciones que en el plano interno enfrenta la política del Pacto Social. El conjunto de los sectores empresarios, que no se ve favorecido por el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, ha desatado una nueva ofensiva contra la política de precios del gobierno, pese a que ante los requerimientos patronales se ha demostrado una mayor permeabilidad. Por su parte, los terratenientes han manifestado abiertamente su oposición al proyectado impuesto de emergencia y al conjunto de la política agropecuaria, y reclaman un aumento del precio de la carne que el gobierno ha resistido hasta ahora por el efecto que tendría sobre el costo de la vida.

OFICIALISTAS U OPOSITORES

Como señala el diario "Noticias" en su columna económica del 2 de junio pasado, se manifiestan dos tácticas diferentes por parte de los sectores vinculados a los monopolios imperialistas en su relación con el gobierno. Por una parte, algunos como los empresarios de la UIA trabajan desde dentro de la política oficial, tratando de acentuar sus aspectos conciliadores para con el capital extranjero, de flexibilizar la política de precios. Otros, cuyo caso más extremo es el del ex ministro Alemann, que desde las páginas del "Argentinisches Tagblatt", señala la necesidad de un golpe a la chilena—, se definen como opositores y cuestionan globalmente la política económica.

En los últimos días, la derecha mostró de diversas maneras su inquietud ante algunas medidas del gobierno. La anunciada estatización de los canales de televisión o la insistencia del presidente en concretar formas de representación política de los distintos sectores de la producción, motivaron reacciones de alarma entre los radicales y otros sectores políticos, y muy especialmente en la prensa que responde a los grandes monopolios. Estas críticas no pueden entenderse sino relacionándolas con la oposición contra la política económica que antes hemos señalado. La más importante de las manifestaciones de este ataque a la política económica es sin duda el desabastecimiento, que se hace cada día más manifiesto en importantes sectores de la producción. Frente a ello, el gobierno ha co-





Un compañero de la Comisión Interna de Propulsora, de la J.T.P.

menzado a denunciar la acción de sabotaje de los intereses perjudicados por la aplicación de algunas medidas económicas, pero se cuida mucho de hacer las dos cosas que serían necesarias para enfrentarlos: llamar a las cosas por su nombre identificando claramente a los responsables del desabastecimiento e implantar formas de control y participación popular.

BUROCRACIA Y REPRESION

Pero el principal de los cuestionamientos a la política del Pacto Social proviene como es lógico de aquellos cuyos intereses no han sido tenidos en cuenta: las movilizaciones y conflictos obreros han alcanzado en las últimas semanas un nuevo punto de alza, y en muchos casos —como el de las empresas periodísticas— los aumentos obtenidos son un estímulo para generalizar los reclamos salariales a un nivel que cuestionan las previsiones de la conducción económica.

El gobierno no tuvo frente a los reclamos obreros la tolerancia que muestra frente al desabastecimiento o a las maniobras de los terratenientes y los sectores monopolistas. Seis compañeros de Matarazzo estuvieron presos y amenazados con penas de hasta 10 años de cárcel por aplicación de las reformas al Código Penal y también

fueron detenidos 32 trabajadores de Gatic. La policía desalojó por la fuerza a los obreros que ocupaban Propulsora Siderúrgica, reclamando no sólo 100.000 pesos de aumento, sino también el reconocimiento de la Comisión Interna antiburocrática elegida por el personal.

La ola de ocupaciones preocupó a la burocracia, como lo evidencia la respuesta del Ministerio de Trabajo, que anunció que se tomarían medidas "ante el recrudecimiento de actos reñidos con la ley", en lenguaje que nada tiene que enviarle al de cualquier ministro de Trabajo de la dictadura militar. Donde Otero tuvo que batirse en retirada fue en el conflicto con el personal no docente de la Universidad. La combativa respuesta del personal de APUBA obligó a dejar sin efecto la resolución que otorgaba a ATE la representación sindical de esos trabajadores. En torno a la conformación definitiva de los gremios estatales se han desatado además las rivalidades interburocráticas, ante la posibilidad de la creación de una única entidad que agrupe a todos los agentes del Estado, que reuniría a más de un millón de afiliados en todo el país.

En el velatorio de los tres trabajadores socialistas, el diputado radical Leopoldo Suárez expresó su condena por "el primer hecho que marca agresión a fuerzas políticas populares", señalando que el PST

no estaba en la violencia, sino en la labor sindical. Lo menos que podría decirse es que no es exacto señalar a éste como el primer hecho, cuando desde la masacre de Ezeiza ha sido constante la violencia y represión contra los militantes populares; pero lo significativo es que las declaraciones del diputado radical muestran que la alarma por la ofensiva burocrática llega a sectores más amplios. La represión que ha tenido como blanco principal a las organizaciones de masas de la Juventud Peronista ya no puede ser considerada por nadie como un problema interno del movimiento. Hoy se advierte que la ofensiva de la burocracia vandorista llegará a todas las fuerzas que levanten reivindicaciones de carácter democrático o popular. Es importante tener en cuenta que en este caso —como en el posterior asesinato del militante del P.C.—, las víctimas son activistas de un partido que asiste periódicamente a reuniones con el presidente de la República y que no habría "sacado los pies del plato", según la conocida definición del general Perón. En este marco se promueven a través de la agencia oficial de noticias las versiones sobre la ilegalización de la organización Montoneros, lo que significaría un paso más serio de los que se han dado hasta ahora para impedir todas las formas de organización y expresión popular y seguir avanzando por el camino que conduce a la guerra civil, como lo denunciaron reiteradamente en los últimos días las fuerzas revolucionarias del movimiento peronista.

Pero es en torno a la combatividad obrera evidenciada en Matarazzo, en Propulsora, en Ivisa, entre los docentes y los no docentes de la universidad, en las decenas de conflictos que se plantearon en los últimos días, como habrá de desarrollarse la organización del pueblo. Haciendo de los trabajadores la columna vertebral del frente que nuclea a todas las fuerzas sociales y políticas que reclaman el cumplimiento del programa votado por el pueblo.

Por ello es necesario, como lo expresa la J.T.P. en su declaración del 31 de mayo, "redoblar fábrica por fábrica los esfuerzos por impulsar la lucha y organización de los trabajadores para terminar con las lacras de nuestra patria, la oligarquía y el vandorismo, aliados del imperialismo, y construir definitivamente el proceso de liberación". ♦



Triunfo antiburocrático en S.M.A.T.A.

Lucha sindical y lucha política

La concluyente victoria de la lista Marrón en las elecciones de la seccional Córdoba de Smata es una ratificación de la conciencia antiburocrática de los trabajadores mecánicos de la provincia, y también una nueva muestra de las peculiaridades del movimiento obrero cordobés en cuanto a la presencia de sectores de la llamada "izquierda clasista" en puestos de dirección de varias organizaciones sindicales.

Entre las muchas particularidades que presentó esta vez la conformación de las listas, vale la pena destacar el apoyo que prestó la Juventud Trabajadora Peronista a la Marrón encabezada por Salamanca, considerando que "representaba los intereses gremiales del conjunto de los trabajadores y que tenía

un contenido antiburocrático y de democracia sindical". El apoyo es más significativo si recordamos las muy importantes diferencias que separan a la JTP de los grupos políticos con los que se identifica Salamanca. La decisión adoptada por los trabajadores peronistas muestra que se priorizó con claridad el enfrentamiento a la burocracia por sobre toda otra diferencia e implica un reconocimiento no sectario de las direcciones sindicales representativas de sus bases.

Estos criterios fueron olvidados por otros sectores que, dividiendo fuerzas frente a los candidatos burocráticos, promovieron una tercera lista, la Naranja. Esta, pese a contar con el apoyo del sindicalismo "legalista", del PB 17, del Peronismo Descamisado, del Partido

Comunista y de los trabajadores radicales, sólo recogió un pequeño porcentaje de los votos.

La elección mecánica replantea la discusión acerca del significado político de la victoria de Salamanca. ¿Cómo se explica que un dirigente no peronista gane la dirección de un sindicato de la importancia del Smata Regional? ¿Implica un distanciamiento del peronismo por parte de las bases obreras? ¿Una adhesión a las posiciones con las que se identifica políticamente Salamanca?

UNA LECCION A DOS PUNTAS

Recordar lo ocurrido en ocasión de las elecciones presidenciales del 11 de marzo puede servirnos para aclarar estas cuestiones. Mientras el conjunto del pueblo se iden-



Salamanca, reelecto secretario general.

tificaba con la fórmula encabezada por Cámpora y repudiaba a la dictadura militar, la "izquierda clasista" llamaba a pronunciarse "por el Cordobazo y contra el acuerdo entre Lanusse y Perón", votando en blanco. Entre los promotores del voto en blanco había varios dirigentes gremiales cordobeses, entre los cuales el más importante era Salamanca. Pese a ello, las bases peronistas del gremio votaron por la Liberación y contra la Dependencia junto con la mayoría del pueblo y desoyeron los llamados de quienes los convocaban a marginarse del pronunciamiento antidictatorial.

La burocracia nacional de los mecánicos, encabezada entonces por Kloosterman, no desaprovechó la ocasión que se le brindaba ante la desairada situación en la que había quedado Salamanca. Olvidando que hasta último momento habían negociado con Lanusse para impedir que se presentara la fórmula electoral, los burócratas de Smata, encendidos de fervor peronista, denunciaron a quien no se había sumado al pronunciamiento del pueblo y enviaron un veedor a Córdoba para preparar la intervención de la seccional. Entonces, los mismos trabajadores que habían desoído días antes el llamamiento votoblanquista se movilizaron activamente en defensa de la dirección combativa de su sindicato.

De este modo, en una semana los mecánicos de Córdoba habían dado una doble lección de conciencia sindical y política, actuando en ambos casos con plena conciencia de sus intereses de clase. En el gremio, en defensa de la dirección que —independientemente de su definición ideológica— garantizaba

la democracia sindical e impulsaba consecuentemente la lucha reivindicativa. En el país, como peronistas, votando por el retorno del pueblo al poder luego de 18 años de lucha, por la derrota de la dictadura militar.

Sin embargo, la lección no parece haber sido aprendida por sus destinatarios. La "izquierda clasista" sigue pensando ante cualquier triunfo sindical que se asiste a la desperonización de los trabajadores y, por su parte, la burocracia está incapacitada para entender que para los trabajadores, que identifican al peronismo con la lucha en defensa de sus intereses y tienen buena memoria, los traidores siguen siendo traidores aunque se vistan con la camiseta de la ortodoxia peronista.

SINDICALISMO Y POLITICA

Si por clasismo se entiende la concepción según la cual los trabajadores deben organizarse en función de sus intereses propios como clase, con conciencia de las contradicciones que oponen a la clase obrera con todo sector explotador, está claro que toda política revolucionaria es en última instancia clasista en el terreno sindical. Sin embargo no es tan limitado el sentido que se otorga al término en nuestro vocabulario político. Partiendo de definir la ideología de la clase obrera como contrapuesta a la "ideología nacionalista burguesa del peronismo", se pasa de allí al campo político y se hace del clasismo una definición antagónica con la pertenencia al movimiento peronista.

Una doble incomprensión deriva de estos planteos. Por una parte,

se contraponen clasismo y nacionalismo, olvidando que los intereses propios de la clase obrera la convierten en el único sector consecuentemente nacionalista en los países dependientes. Por la otra parte, frente a quienes sostienen la necesidad de nuclear a todas las fuerzas sociales que enfrentan la política de los monopolios, la izquierda se reivindica "clasista", confundiendo hegemonía obrera con la exclusión de toda alianza con otros sectores de la sociedad. Merced a las dificultades que han encontrado muchas veces los sectores del peronismo revolucionario para superar el agitativismo y definir una propuesta para la lucha reivindicativa, los grupos clasistas ganaron la adhesión de militantes antiburocráticos. Pero al concebir al clasismo como una propuesta política, esos grupos ven limitada su acción a los marcos del movimiento sindical, y cuando quieren hacer política caen necesariamente en el ideologismo. Porque para el clasismo así entendido, el único programa posible es el socialismo sin transiciones, el objetivo final de los trabajadores como clase social. Lo que no puede hacer es encontrar las consignas que permitan unificar las luchas del conjunto de los trabajadores, reconociendo la existencia de distintos niveles de conciencia; ligar las reivindicaciones económicas con las políticas; ubicar a la clase trabajadora en la vanguardia de la lucha por propuestas que interesan a más amplios sectores populares. Porque todo esto no puede plantearse sólo a partir de un análisis en términos de relaciones de clase, es necesario abordar el nivel de lo político, tomar en cuenta la experiencia de lucha de las masas, y en la Argentina eso significa encontrarse con el peronismo.

Esta generalización de las posiciones de la izquierda clasista puede parecer injusta, pues no todos los grupos niegan la importancia de las reivindicaciones antiimperialistas ni descartan las alianzas con otros sectores sociales. Pero lo importante es como esas definiciones se transforman en propuestas políticas, y para quienes no comprenden que es en el movimiento peronista donde tienen expresión las reivindicaciones nacionalistas, populares y democráticas de los más amplios sectores sociales, esa posibilidad les está negada. Por eso esa oscilación entre el sindicalismo y el ultraizquierdismo característica de la izquierda no peronis-

El Topo Blindado

ta y que constituye la más clara expresión de su incapacidad para darse una política de masas.

EL MOVIMIENTO OBRERO EN CORDOBA

El surgimiento del clasismo en Córdoba, tiene que ver con la crisis de las estructuras tradicionales del sindicalismo evidenciada a partir del golpe de 1966. La burocratización de las organizaciones sindicales, consolidada con la hegemonía vandorista, la falta de participación de las bases en las decisiones y la abierta colaboración de los dirigentes con las patronales y con la dictadura militar provocaron en 1968 el surgimiento de la CGT de los Argentinos, y a partir de allí la proliferación de agrupaciones sindicales antiburocráticas. Después del Cordobazo y de varios importantes conflictos en el gremio mecánico surgió la experiencia de Sitrac-Sitram, cuando los trabajadores de Fiat Concord y Materfer ocupan las plantas y expulsan a las direcciones burocráticas de sus sindicatos. La activa participación en las movilizaciones del Viborazo y las reiteradas luchas contra la patronal evidenciaron el grado de combatividad y organización y el avance en la conciencia de los trabajadores de Fiat.

Pero el peso que adquirieron en su dirección los grupos ideologistas —pese al carácter mayoritariamente peronista de las bases obreras— determinó la adopción de una política en muchos casos sectaria que facilitó su aislamiento y la posterior represión. Recordemos que Sitrac y Sitram definieron un programa socialista, polemizaron duramente con los gremios legalistas e independientes que dirigían la CGT de Córdoba, que era el único sector con el que hubieran podido establecer alianzas, y que se trató de hacer de los sindicatos de Fiat la avanzada de un movimiento clasista a nivel nacional, adoptando definiciones que no respondían al nivel del conjunto de los sectores combativos y antiburocráticos del movimiento obrero.

Esta influencia de la "izquierda clasista" que no guarda relación con su peso real en las bases obreras, se explica por el desprestigio de las direcciones burocráticas que integraban las 62 organizaciones peronistas y por la debilidad que entonces tenía la tarea de las organizaciones revolucionarias que luchaban por expresar el peronismo de las bases obreras en nuevas



En Córdoba, la democracia sindical no pudo ser burlada.

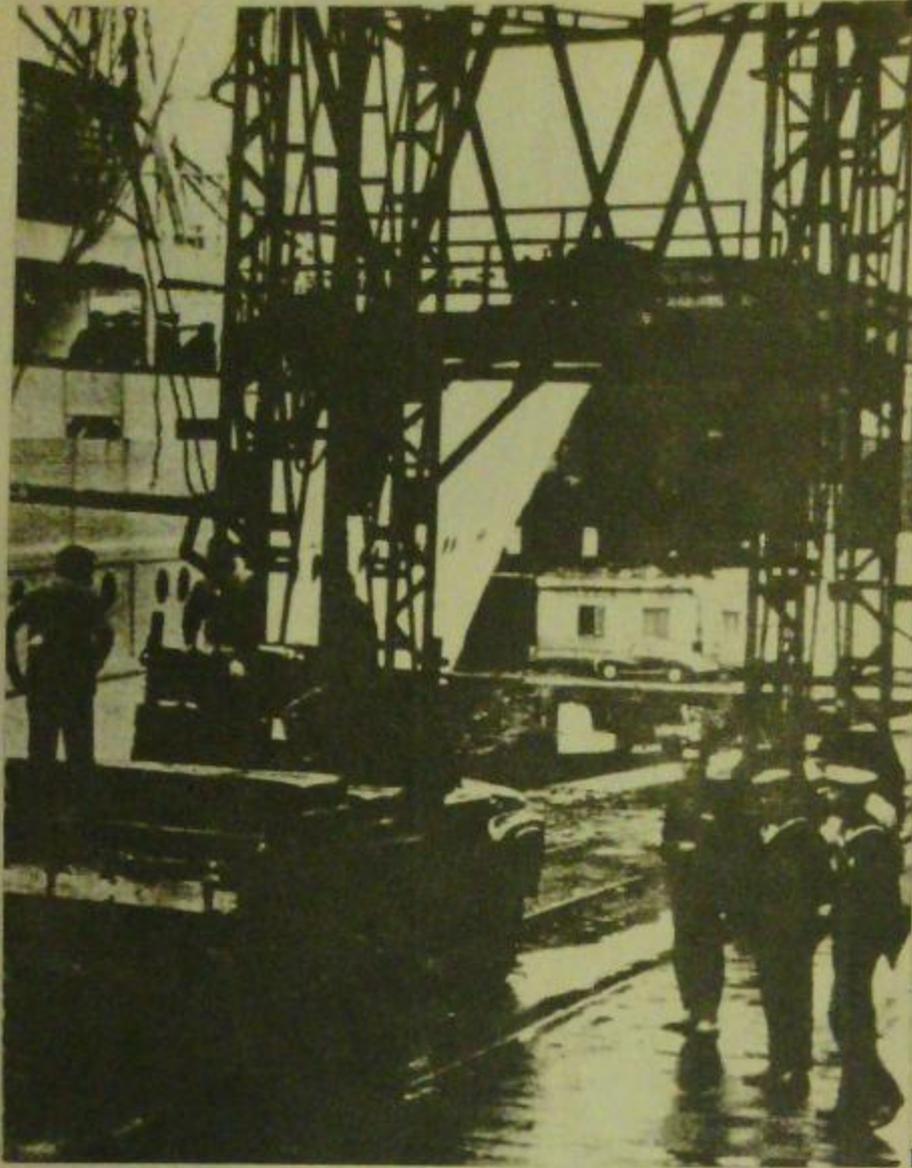
estructuras de conducción del movimiento peronista. Recordemos que luego de que las tropas de López Aufranc desalojaron las plantas de Fiat y encarcelaron a decenas de compañeros, en una acción de solidaridad con los trabajadores cayeron Olmedo, Baffi, Peressini y Villagra, combatientes revolucionarios peronistas.

Lo que hemos dicho nos permite ver más claramente el carácter contradictorio del fenómeno clasista, expresión de un avance en las luchas y la conciencia de sectores del movimiento obrero cordobés, pero también de una desviación vanguardista que desconoce el carácter mayoritariamente peronista de la clase trabajadora y renuncia a darse una política para el conjunto del movimiento obrero.

Toda política auténticamente antiburocrática debe partir del respeto por la opinión de los trabajadores, y por ello implica el reconocimiento de los dirigentes representativos como Tosco y Salamanca, más allá de las diferencias políticas. Por eso y porque representa un aporte a la conformación de un frente antiburocrático en Córdoba, es muy significativa la decisión de la JTP de apoyar a la Lista Marrón, pese a la actitud sectaria de esta última. Pero es también la manifestación de la carencia de una expresión revolucionaria del peronismo

conformada en una lista que retomando la trayectoria antiburocrática de las bases mecánicas levante el programa político que permita ligar sus luchas con las del conjunto de los trabajadores y el pueblo.

Porque el enemigo fundamental de los mecánicos de Córdoba, la burocracia vandorista que hoy pretende desconocer la elección e intervenir la seccional, es la avanzada reaccionaria en contra de todos los sectores populares. Y la lucha contra ese enemigo tiene en la contradicción que hoy se plantea en el seno del movimiento peronista su expresión principal. Derrotar a la burocracia supone hoy impulsar la recuperación de las organizaciones obreras por los trabajadores, profundizar la lucha antiburocrática en las bases, pero no para aislar a los trabajadores en nombre del "clasismo", sino para convertirlos en la vanguardia de la lucha por el cumplimiento del programa votado por el conjunto del pueblo. Garantizar la hegemonía obrera y establecer las alianzas con todas las fuerzas interesadas en librar la lucha contra la dominación del capital monopolista, es hoy la forma de avanzar en la acumulación de fuerzas para hacer posible esa sociedad sin explotadores ni explotados que es el fin último de toda política orientada en función de los intereses de los trabajadores. ♦



Portuarios

La ley de la selva

En la mayor parte de los casos en que se quiera ejemplificar acerca de la superexplotación en el trabajo, la inestabilidad, el arbitrario proceder de la patronal, la desprotección legal, generalmente pensamos en los trabajadores de zonas alejadas del país. Sin embargo, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, a unos trescientos metros de la Casa Rosada, intentan trabajar diariamente quince mil estibadores sometidos a todo tipo de injusticias y arbitrariedades.

Así, los estibadores deben presentarse diariamente en los turnos establecidos: 6.45, 9.45, 12.45, 14.45 y demás horas correspondientes, para intentar trabajar. Que esta aspiración se vea o no satisfecha dependerá de la voluntad de un capataz, quien desde una tarima contrata a quien se le antoje, con total arbitrariedad, sin ningún tipo de reglamentación o de criterio establecido por ley. Mejor dicho: la elección no será tan arbitraria, ya que obviamente será elegido preferentemente aquel que menos proteste por las condiciones de trabajo, o quien se avenga a brindarle prestaciones adicionales (trabajos

en la propia casa del capataz, por ejemplo), y muchas veces también aquel que le ofrece un porcentaje de su salario.

Semejante cadena de arbitrariedades está condicionada por una realidad ineludible: hay que elegir dentro de un pequeño destacamento del ejército de desocupados. Porque de los 15.000 postulantes, sólo 7.000 u 8.000 serán contratados. Los restantes volverán a sus casas sin un solo peso, luego de haber peregrinado durante todo un día.

Legalmente, todo esto está perfectamente tolerado. Para ello, los estibadores son considerados changarines, es decir, que no tienen estabilidad en su empleo. Luego de más de treinta años de trabajo, incluso, de haber trabajado para una empresa, ésta no tendrá obligación alguna para con él. Y como para entonces ha perdido, debido a su edad, su fuerza para el trabajo, tendrá que resignar su lugar a los más jóvenes y esperar la superabundancia de trabajo para "picar" algún jornal.

Este es el triste relato de la actividad cotidiana de un estibador.

Basta observar el panorama para verificarlo en los entes de contratación.

LA BUROCRACIA Y SUS MATONES

¿Qué hace el sindicato ante esta situación? En principio, la actividad sindical es prácticamente nula por parte de la burocracia. Y no porque esta actividad no sea necesaria, sino por motivos que hacen a su propia subsistencia como capa privilegiada. Porque cuando el estibador, luego de la odisea que vimos más arriba, resulta finalmente contratado, el ciclo de opresiones recomienza. Y lo hace bajo la forma de las violaciones al cumplimiento del Reglamento de Trabajo. Este es una entelequia, una aspiración permanente, que no tiene aprobación oficial y que en realidad es el resultado de la imposición diaria de los estibadores. Así, los trabajadores en las bodegas exigen que se establezcan los turnos para las mercaderías insalubres, o para el trabajo peligroso. Para obtener una de esas reivindicaciones debe entonces intervenir la Capitanía de Puertos, organismo que hace las veces de policía del trabajo. Antes

El Topo Blindado



*La dictadura lo tuvo preso.
Tolosa lo usó para promocionarse.*

estaba controlado por los "milicos", ahora por los "representantes" del sindicato —es decir, los matones de Tolosa—. La diferencia no se siente en exceso: casi siempre dictaminan a favor de la patronal. A pesar de haber cambiado época y gobierno, en el puerto la situación permanece invariable. Las reivindicaciones sólo se obtienen, por eso, con la lucha férrea de los trabajadores; y a regañadientes cuando los milicos —ahora los representantes sindicales— dictaminan en algunos casos en favor de los trabajadores, lo hacen siempre con una frase conocida: "a ustedes se les está yendo la mano; si siguen así vamos a tener que enfrentarnos con la patronal, no se abusen".

Pero, ¿quién es "la" patronal? Por un lado está la empresa estatal ELMA. Las restantes pertenecen a monopolios internacionales del transporte que, además del negocio que les es propio (los fletes), en donde compiten con la empresa del Estado, obtienen mayores dividendos con la estiba. Estas son precisamente las empresas que más teme enfrentar el sindicato. Además, para completar el cuadro, existe una cooperativa que maneja

el sindicato. Y como todo el mundo sabe, para que "el negocio rinda más" es menester que las reivindicaciones obreras estén reducidas al mínimo. Superexplotación, que le llaman. Por ese motivo, precisamente, Tolosa ni siquiera ha petitionado para que los trabajadores estén amparados por la nueva ley de contrato de trabajo. El resto del negocio lo cubren pequeñas empresas que picotean un pequeño porcentaje de la estiba. Pero, sea quien fuere el patrón, la condición básica de inestabilidad y explotación es vivida cotidianamente por los obreros portuarios.

Esta situación de desprotección cuenta, como se ve, con la complicidad del sindicato, que además de no representar en absoluto los intereses de los estibadores, impide otras formas de representación. No hay delegados del personal, por ejemplo, porque el sindicato se niega a que se designen compañeros elegidos democráticamente por las bases. De ese modo, los dirigentes naturales, aquellos que diariamente pelean por las reivindicaciones y son reconocidos por sus compañeros, carecen de todo respaldo legal aunque cuenten con el

más importante de los respaldos: el apoyo de sus propios compañeros.

Además de estos delegados elegidos a partir de la misma presión de las bases, existe una sola agrupación sindical que funciona orgánicamente: la Agrupación Portuaria 21 de Diciembre. En las últimas elecciones obtuvo el tercer lugar, y desde entonces no ha cesado en su lucha por el Reglamento de Trabajo, por la bolsa rotativa de trabajo, por la centralización en el pago del aguinaldo. Esta última reivindicación muestra un ejemplo más de la situación del trabajador portuario: un trabajador a lo largo de seis meses o un año puede trabajar para decenas de compañías. Entonces, para cobrar la parte de su aguinaldo y vacaciones deberá recorrerlas a todas ellas, las que por supuesto establecen horarios limitados de pago, de manera tal que muchas veces conviene más no cobrar cuando se trabajó uno o dos jornales que realizar los dificultosos trámites para obtener lo debido. Otras reivindicaciones de los estibadores levantadas consecuentemente por la 21 de Diciembre son el pago por enfermedad, la designación de delegados amparados por la ley de asociaciones profesionales y actualmente la inclusión de los estibadores en la ley de contrato de trabajo, lo que implicaría la estabilidad y la garantía de que presentándose a trabajar percibirán los veinticinco jornales mensuales que corresponde al resto de los trabajadores del país.

LAS PERSPECTIVAS DE LOS ESTIBADORES

Claro que este desamparo gremial no parece tal si contemplamos el panorama en un período preelectoral en el gremio. Porque entonces surgen numerosas listas y frentes electorales. Y como un objetivo sentido por todos los trabajadores es la derrota de la dirección burocrática, que no solamente no defiende sus intereses sino que reprime e incluso asesina a quienes se destacan por su práctica sindical combativa, no es casual que la situación se preste para el establecimiento de alianzas que, tras ese objetivo de derrotar a la actual conducción burocrática, subestiman a veces la importancia de los acuerdos y lineamientos a seguir. Es sobre esta situación que se ha ido gestando una lista única de oposición, de la cual participan un conjunto de compañeros honestos junto con "los otros", los que sólo as-

El Topo Blindado

dirigidos a ellos, a un precio, "pluchones de burócratas" que en nada se diferencian de los actuales. Para ellos cualquier apoyo es válido: CGT, 62, Ministerio de Trabajo o de Bienestar Social.

Empero, para el conjunto de los estibadores esta unidad ofrece una cierta perspectiva de salida, especialmente frente al evidente déficit organizativo, sindical y político existente. Déficit compartido incluso por la Agrupación 21 de Diciembre, que no ha sabido oponer, a las prácticas superestructurales de algunos de aquellos caudillos menores, una explicación coherente para el conjunto de los compañeros acerca de cuál es su encuadre político general, por qué no se debe buscar el apoyo de la CGT, de las 62 o de los ministerios hoy copados por la derecha, que por eso mismo resulta menester cuestionar la práctica de un gobierno que no está basado en los intereses de los trabajadores. Además, tratando de ganar a aquellos sectores para que no solamente peleen por sus reivindicaciones, sino mostrando cómo deben enmarcarse en un contexto político correcto, es decir, participando y actuando dentro de la J. T. P. para a partir de allí cuestionar al pacto social en la medida en que éste no favorece a los intereses de los trabajadores. Planteando, por fin, como programa la lucha por la liberación nacional y social de nuestra patria, teniendo claro que la lucha antiimperialista se expresa concretamente en nuestro puerto tras las tareas de expulsar del país a las empresas de estibaje emparentadas con los monopolios, lo que implica el fortalecimiento de ELMA, de su flota, de su estibaje, mediante la nacionalización total del transporte y de la estiba.

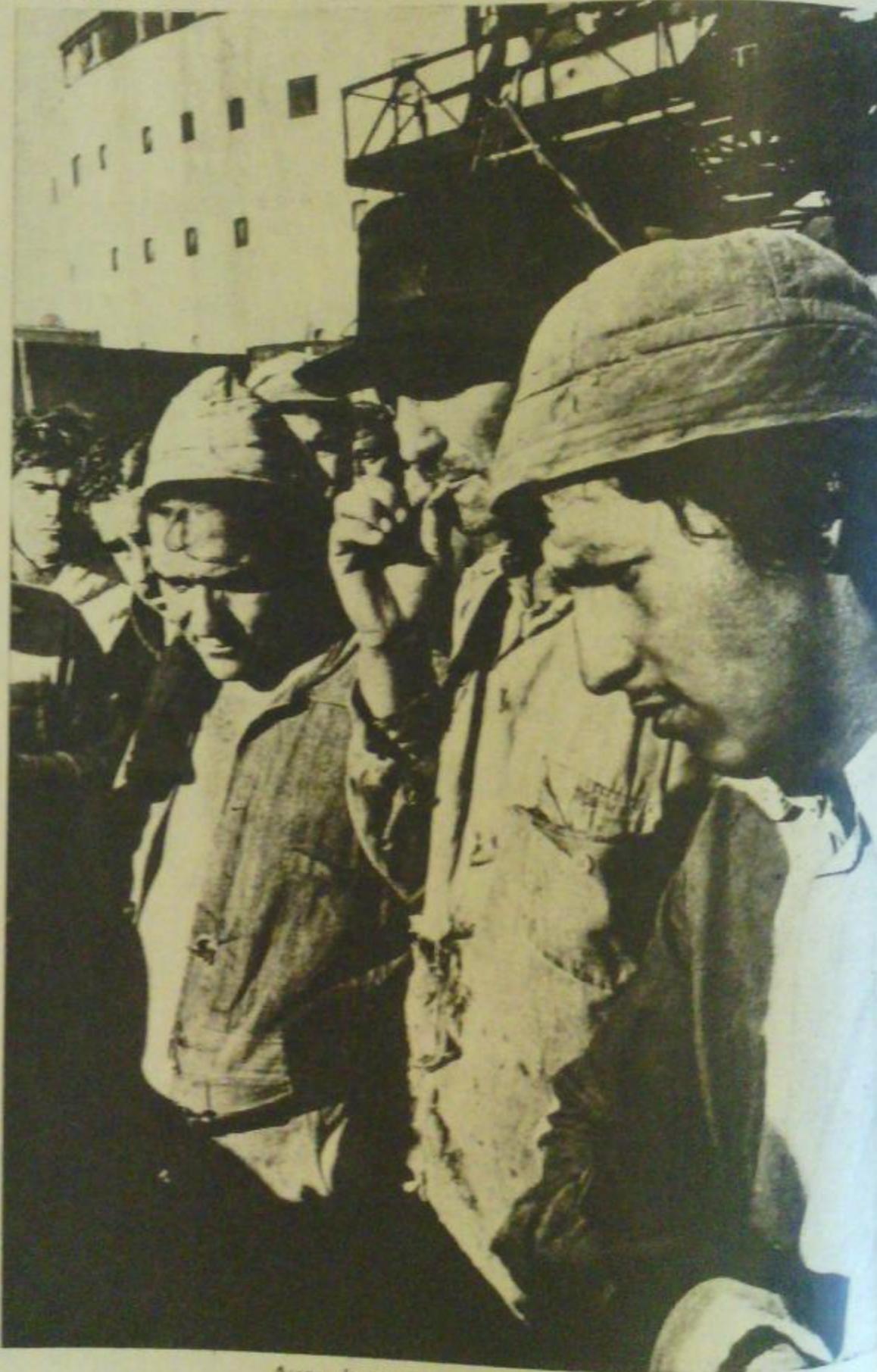
Esta debilidad señalada de la Agrupación, empero, la lleva a este entendimiento electoral, pero con posiciones claras en lo programático y con la exigencia de que los candidatos sean elegidos en pública asamblea con participación de activistas —objetivo que aún no se ha logrado—, ya que las demás listas confían en la trenza para desalojar a Tolosa, sin comprender que el sindicato no es un mero edificio, sino que se construye con la movilización y organización de las bases, o se construye mal.

Sea como fuere, y sin otorgarle una importancia extrema al proceso electoral, la Agrupación 21 de Diciembre hoy entiende que su tarea permanente debe ser proseguida y profundizada. Pero además que es-

to debe hacerse con un sentido que desborde el marco organizativo y le otorgue un sentido político definido, no para olvidarse de lo reivindicativo, sino para hacerlo incluso más eficaz. Por eso, con el convencimiento de que el pequeño trabajo aislado no fructifica, que no es tiempo de "pequeñas patrullas aisladas perdidas en el espacio de la lucha de clases", la Agrupación entiende que estas tareas deben ser integradas en el marco de las estructuras nacionales que mejor respondan a los intereses de la clase

obrera, en su lucha por la liberación. Estas estructuras son las que en la actualidad brinda la Juventud Trabajadora Peronista (J. T. P.).

Pasada la hojarasca electoral, cuando los buscadores de puestitos y sillones se retiren nuevamente lejos del trabajo extenuante de los estibadores, el sentimiento de unidad antiburocrático que hoy manifiestan las bases portuarias podrá ser orientado políticamente hacia quienes en la lucha cotidiana mejor hayan expresado los intereses de los trabajadores. ♦



Ayer, los milicos; hoy, los burócratas. En el puerto todo sigue igual.

El proyecto de ley de contrato de trabajo

Mucho para la dictadura poco para un gobierno popular

LAS CONTRADICCIONES ENTRE LA BUROCRACIA SINDICAL Y LA CUPULA DE LA C.G.E.

A partir de la hegemonía que los grandes empresarios argentinos comenzaron a detentar en la política económica, a través del Pacto Social y del control del Ministerio de Economía, fue quedando claro que dicho pacto no podía responder a los intereses de los trabajadores. Esa conciencia se ha traducido en la serie continuada de conflictos que se desencadenan casi diariamente, a pesar del freno permanente de la burocracia sindical.

Sin embargo, se equivocan quienes deducen rápidamente de esta situación una identidad en la política económica del actual gobierno peronista y de la dictadura en lo que a los trabajadores se refiere. Una simple comparación entre el deterioro galopante que experimentó el salario real durante los últimos años y cierta estabilidad del valor adquisitivo en la actualidad

así lo revela. Pero sin duda que también vuelven a equivocarse los que cometen el error simétricamente opuesto, concluyendo que la orientación económica del gobierno satisface las exigencias de los asalariados en la misma medida que durante el primer gobierno peronista o, mejor aún, en la que se mide con relación a las expectativas de un pueblo que luchó duramente durante casi dos décadas con el fin de retornar al gobierno.

El proyecto de ley de contrato de trabajo, tal como ha sido remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo, es una nueva muestra ejemplar de lo dicho. Porque si bien importa un avance cuantitativo respecto de la legislación del trabajo vigente, no se ataca ni se reforma en lo esencial el régimen bajo el cual se desenvuelve la relación laboral en la actualidad. El tratamiento que en él se hace de un problema crucial para los trabajadores —el del **despido**— lo muestra a las claras. La propuesta del P.E. mantiene lo fundamental

del sistema actual, modificando solamente el cuántum indemnizatorio. O sea, que no existe una protección del **derecho de trabajar**, sino una protección económica que da por supuesta la eventualidad del despido injustificado. Se permanece fiel así al principio fundamental del capitalismo: la consideración de la fuerza de trabajo como una mercancía, a pesar de lo que se dice en los fundamentos del proyecto.

Dentro de los límites del sistema, sin embargo, el proyecto de la C.G.T —redactado por el doctor Centeno— incorporaba el principio más avanzado al propender a la "garantía de permanencia en el empleo". Esta disparidad de criterios entre el proyecto del P.E. y el de la C.G.T. no se refiere solamente a este punto, sino que ha campeado a lo largo de toda la elaboración del proyecto. Y en general, la propuesta del P.E. desmejora de manera notoria el proyecto elevado por la central obrera.

Esto merece una aclaración. No





La burocracia discutió las reformas sin informar a los trabajadores.

es que los burócratas hayan de pronto descubierto la justicia de los reclamos obreros, sino que en última instancia su misma subsistencia como capa privilegiada implica que de tanto en tanto se culden de hacer buena letra ante las bases, especialmente en momentos en que éstas cuestionan cotidianamente el Pacto Social. Pero además porque dentro del gobierno se viene librando una sorda pero no menos dura lucha entre el sector vanguardista de la burocracia y la conducción económica. Uno de los modos que aquél utiliza para jaquear al equipo Gelbard es precisamente amagar con medidas que pondrían en peligro el Pacto Social y el mismo proyecto de los monopolios na-

cionales. De ahí que del primitivo dictamen de contratos de trabajo elaborado por la C.G.T. se hayan quitado aquellos principios que, justamente, tendían a modificar el esquema vigente de modo más profundo, y que dicho veto haya provenido del equipo económico. Que lo dicho no es una mera fantasía lo certifica el señalamiento de algunos ejemplos concretos.

Así, el proyecto de la C.G.T. implicaba un avance importante con respecto a los controles del personal, ya que partía del principio de que no se podía poner ningún tipo de control por parte de la empresa que no fuera indispensable para la conservación de los bienes, y que todo control que rebasara ese lí-

mite debía contar con la previa aprobación de la entidad sindical y del Ministerio de Trabajo. Este postulado fue vetado por los funcionarios del P.E. y remplazado por el principio inverso. Dicha facultad está así libre de todo tipo de control por parte de las entidades sindicales y de los trabajadores o sus representantes (comisiones internas, delegados). Asimismo, en los artículos 69 al 71, se entregan plenas facultades al empleador para introducir cambios relativos a las formas y modalidades de la prestación del trabajo.

También el proyecto del P.E. eliminó una norma específica sobre feriados nacionales y días no laborables que introducía el proyecto cegetista. Pero lo realmente novedoso y positivo era la propuesta del artículo 293 del proyecto de la central obrera, referida a despidos socialmente injustos, por el cual el trabajador despedido tenía derecho a "solicitar del juez declare la nulidad del despido" y su reinstalación en el empleo si el juez comprobare "un manifiesto abuso del derecho". Todas estas normas fueron vetadas por la conducción económica.

EL PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

Expurgado de esos elementos, el actual proyecto se divide en quince títulos, que tratan acerca del contrato de trabajo en general, incorporando normas precisas sobre el contrato a plazo fijo y el de temporada; reglando además la remuneración; las vacaciones pagas y otras licencias; feriados obligatorios y días no laborables; trabajo de los menores; duración del trabajo y descanso semanal; de la suspensión de ciertos efectos del contrato; y otros puntos que, como se ve, configuran una amplia reglamentación de aspectos centrales de la vida laboral de los trabajadores. Frente a la importancia de la misma, aflora como contrapartida la absoluta falta de participación de los asalariados en la elaboración del proyecto y en el tratamiento del mismo. Por cierto que el inefable ministro de Trabajo diría que los trabajadores han sido consultados a través de sus "representantes", digno título que, sin embargo, las bases hace tiempo han dejado de reconocerle a los burócratas sindicales.

Sea como fuere, uno de los elementos positivos que aporta el pro-

ya que el P.E. establece principios que permiten determinar con menores exigencias la existencia de contrato de trabajo, con importantes presunciones a favor del trabajador, como asimismo la existencia de un libro especial que individualice al empleador, al trabajador, la fecha de ingreso y egreso, remuneraciones, con exigencias precisas para su confección.

Con respecto a la remuneración, mantiene la legislación vigente, pero se tutela la percepción de la misma por el trabajador, ya que se establecen una serie de normas para acreditar la validez de los recibos.

Estas y otras medidas —algunas de las más importantes figuran en el recuadro que damos aparte—, establecen mejoras en favor del trabajador, siendo el sistema global beneficioso para el mismo.

Pero por otra parte, el artículo 2º mantiene la exclusión del régimen de los trabajadores del Estado y de los del servicio doméstico, configurando una de las limitaciones más claras del proyecto. Máxime porque el problema no queda reducido sólo a éstos, sino que se extiende a otros sectores de asalariados, merced al carácter contradictorio de la norma. Con la redacción actual, quedarían excluidos del mismo también los trabajadores de la construcción; trabajadores changarines, como los portuarios, etcétera.

Otra norma ambigua es la que se refiere a la "buena fe", ya que obliga a las partes a ajustar su conducta a lo que es propio de un "buen empleador" y de un "buen trabajador". Por cierto que, en esta caracterización, nada impediría considerar "mal trabajador", para la patronal, a aquel que defienda con consecuencia sus intereses y exija mejores condiciones de trabajo.

El artículo 93 regula la mayor productividad, de modo que el asalariado pueda "lograr la mayor eficiencia y rendimiento en el trabajo". Sin embargo, ningún tipo de control se da a los trabajadores sobre la actividad del empresario ni de sus ganancias. Nada se dice tampoco sobre lo regulado expresamente por el artículo 14 bis de la Constitución cuando sostiene la "participación en las ganancias de las empresas, con control de producción y colaboración en la dirección...". Igual vacío es notorio con relación a la duración de la

OTRAS NORMAS IMPORTANTES

Contratistas y subcontratistas: como medida positiva, se introduce el principio de que los trabajadores contratados por contratistas o subcontratistas, podrán reclamar por las obligaciones resultantes del contrato de trabajo contra el empresario principal.

Licencias: se amplía su régimen.

Feriatos: se determinan precisamente, y su forma de pago cuando sean trabajados.

Trabajo de mujeres: se lo reglamenta, con la prohibición de trato discriminatorio. Su jornada no podrá ser mayor de 8 horas diarias o 48 semanales. Y se establecen las normas de protección para la maternidad.

Menores: se reglamenta su trabajo.

Enfermedad: se permite al trabajador elegir su médico y se reglamenta su forma de co-

municación. Otras normas positivas referidas al caso de despido durante la enfermedad.

Servicio militar: obligatoriedad de guardar el empleo durante su transcurso, con otorgamiento de todos los beneficios que se obtengan durante ese período.

Indemnización: se aumentan los topes máximos indemnizatorios, elevándolos a tres veces el importe del salario mínimo vital y móvil, aumentando el mínimo a dos meses de sueldo. Se establecen asimismo otros beneficios, así como una indemnización por muerte del empleador.

Jornada nocturna: se repite el temperamento vigente: 7 horas de trabajo.

Trabajo insalubre o peligroso: igual a la actual: 36 horas semanales, con prohibición de exceder las 6 horas diarias.

jornada de trabajo. Por el contrario, un artículo realmente positivo es el 243, que se refiere a los alcances y efectos de la huelga y otras medidas de acción directa, donde se incorporan conquistas reclamadas largamente por los trabajadores. Por fin, el artículo 276 encierra un peligro potencial, en cuanto frente a un estado de "receso de la empresa", ésta podrá optar por la "suspensión de las actividades empresarias" y consiguiente extinción, suspensión o modificación de los contratos de trabajo.

Por lo visto, se puede concluir que la propuesta del Ejecutivo incorpora importantes conquistas, pero que las mismas permanecen en los límites cualitativos de la legislación vigente. Nada casualmente, medidas más avanzadas planteadas por la C.G.T. fueron vetadas por Gelbard y Cia. Y nada casualmente tampoco, la C.G.T. no alzó en momento alguno su voz de protesta ante estos vetos, temerosa sin duda de tener que acudir a una movilización de los trabajadores a la que teme mucho más que a la misma patronal.

Pero ninguno de los dos proyectos plantea ni la reducción de la

jornada de trabajo, ni reglamenta precisamente las tareas peligrosas o insalubres, ni las condiciones de higiene y seguridad del trabajo, que tantos accidentes y deterioro de la salud provocan permanentemente a los obreros. Igualmente, como vimos, se excluye a ciertas ramas de trabajadores de los beneficios de esta ley, a la sombra de la ambigua redacción del artículo segundo.

De todos modos, el proyecto debe ser aún tratado por las Cámaras. Hacia ahí sin duda se desplazará la contradicción entre la burocracia y la cúpula empresarial, puesto que allí la burocracia tiene una sólida estructura montada sobre el copamiento de las bancas legislativas que hoy detenta. Sin ir más lejos, el Senado ya ha introducido algunas reformas al proyecto del P.E. que en términos generales son de signo positivo.

Con todas las limitaciones señaladas, la nueva ley introduce algunas reformas importantes, pero su cumplimiento y la transformación de las condiciones de trabajo dependerá menos de las decisiones oficiales que de la organización y la lucha de los trabajadores. ♦

Un negocio embrujado

La adquisición de petróleo en Libia fue presentada por los círculos allegados a López Rega como un acto de soberanía que marcaba el comienzo de relaciones comerciales de "nuevo tipo" entre los países del Tercer Mundo. Sin embargo, nuestro país pagó los precios más altos del mercado mundial y la parte del león en el negocio se la lleva el pulpo Rockefeller.

Cuando el ministro de Bienestar Social fue designado para encabezar la delegación comercial argentina que viajó a Trípoli, para negociar la compra de petróleo de Libia y establecer los primeros contactos con el gobierno del coronel Muammar Al Kaddafi, la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación se sintió en la necesidad de justificar este nombramiento, para lo cual alegó que López Rega era el representante ideal que necesitaba el gobierno argentino, "debido a los lazos de profunda amistad que lo ligaban con el jefe del gobierno libio".

La Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia dio esta explicación, tratando de adelantarse a las críticas que, lógicamente, podía promover la designación de un hombre de gobierno en tareas que no le correspondían a él sino a otro ministerio y, sobre todo, dar razones del porqué habría de viajar en una misión supuestamente tan delicada, como era la de "abrir un frente político dentro del mundo árabe", una persona de las características personales de José López Rega, quien nunca se ha distinguido por sus dotes de fino diplomático.

Cuando la delegación argentina retornó de Libia, el mismo López Rega se encargó de informar que su misión se había visto "entorpecida por la presencia de funcionarios de apellido judío en el gabinete argentino", situación que se tornaba conflictiva porque "no hay que olvidar que Libia es un país en guerra". El ministro de Bienestar Social agregó que a estas circunstancias se sumaba "el desconocimiento que tiene el gobierno del coronel Kaddafi acerca de cómo es en realidad la República Argentina".

Por ese motivo y también, quizás,



porque el Jefe de Estado Libio había olvidado "los profundos lazos de amistad que lo ligaban con López Rega", ya que ni siquiera sabía cómo era la Argentina, se tuvo que pagar la primer partida de petróleo libio a un precio cercano a los 19 dólares cif (costo, seguro y flete, es decir, en puerto argentino), precio que supone un verdadero récord mundial en la materia.

Estas cifras son, en realidad, estimativas, ya que el ministro de Bienestar Social nunca se refirió a ellas, bajo el pretexto de que él no era un hombre de empresa, "sino un filósofo que pone corazón en los negocios".

El precio del petróleo hubo, pues, que deducirlo de una negativa de la ANCAP (empresa estatal uruguaya de combustible) a comprarlo, ya que 19 dólares el barril era un costo que estaba muy por encima de lo que estaba pagando Uruguay y que era en torno a los 10 dólares.

Posteriormente, el precio bajó a 17 dólares el barril —según siendo récord— y, más tarde, se informó que Libia había decidido dar a la Argentina "tratamiento de país amigo", llevando el barril de crudo a 13,28 dólares. Si se tiene en cuenta que Uruguay acaba de adquirir petróleo en Arabia Saudita a 9 dólares y que Kuwait llamó, en marzo, a licitación para vender a 10,75 dólares el barril y no pudo hacerlo, se podrá calibrar qué significa este tratamiento de "país amigo".

Otra de las explicaciones dadas por el ministro de Bienestar Social consistió en señalar que el pago del petróleo libio "era nominal ya que se realizaría mediante trueque por productos argentinos". Al margen de que, por una resolución de los países miembros del OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), todas las compras de crudo deben

efectuarse al contado, cabe señalar que Libia —un país de unos 2 millones de habitantes— difícilmente pueda adquirir productos argentinos por un valor cercano a los 500 millones de dólares anuales, tal como supone su venta de petróleo a la Argentina, sobre todo si se tiene en cuenta que también el gobierno de Kaddafi ha firmado acuerdos similares con Francia, Italia, Rumania, Brasil y España.

En los últimos tiempos se ha ido aclarando el panorama en torno a los convenios con Libia, al mismo tiempo que se ha oscurecido la figura de López Rega, a quien parece estarle descendiendo el "cometa" de su destino.

Hace aproximadamente un mes, se informó oficialmente que el Chase Manhattan Bank, el banco de los Rockefeller, familia ligada a la Standard Oil, empresa multinacional petrolera, financiará las compras argentinas a Libia. Esto significa que Rockefeller embolsa los intereses de la transacción, que asciende en un monto de 500 millones de dólares, a cerca de 50 millones por año. El mismo anuncio señalaba que el transporte del petróleo "sería realizado por barcos de cualquier bandera, estando prohibido su trasbordo".

El Chase desplazó a banqueros italianos, de los cuales se decía que iban a actuar como financistas, y se utilizarán barcos de cualquier bandera porque, tanto Argentina como Libia, carecen de flota petrolera. Aquí la flota de Standard Oil también obtendrá su parte.

El contrato con Libia para la compra de petróleo se ha ido configurando como "un negocio más", dentro de lo que está realizando la Argentina en el exterior. Desde este punto de vista, se puede afirmar que no ha sido, precisamente, un negocio brillante para nosotros y sí bastante bueno para el monopolio Rockefeller.

Tanto es así que, con el fin de obtener mejores condiciones de pago y precios, han comenzado a trabajar funcionarios del Ministerio de Economía, ese organismo con directivos de apellido judío, a la esfera del cual pasarán las tratativas.

Mientras tanto, la primer compra de petróleo libio se debió hacer a precios récord, y, tal vez porque Kaddafi no demostró reconocer la capacidad diplomática de López Rega, el ministro de Bienestar Social ha comprado una estancia en las orillas del Salado, en la Pcia. de Bs. Aires, donde la hectárea se cotiza a un millón de pesos, para tener un retiro donde meditar acerca de la filosofía y ver cómo puede "poner más corazón en los negocios". ♦

¿Pacto para la dependencia o alianza para la liberación?

Análisis del plan económico del gobierno



El material que publicamos como informe especial fue elaborado para contribuir a una discusión central dentro del campo popular. En tal carácter ha circulado ya entre numerosos activistas sindicales. Considerándolo como un aporte importante, CONFLUENCIA lo publica para que llegue a sectores más amplios.

En momentos en que la derecha y el imperialismo arman cada vez más su proyecto represivo, resulta fundamental para los sectores populares definir claramente el campo de sus aliados para enfrentar mejor a sus enemigos. Este informe, "¿Pacto para la dependencia o alianza para la liberación?", pretende contribuir a esa tarea de esclarecimiento.

El Topo Blindado

La caída de Perón significó el fin de un período hegemónico sobre el Estado por parte del capital monopolista extranjero. Tras el intento fugaz de Levingston, que cobijó las aspiraciones de grandeza de la burguesía nacional sin el menor sustento político, las FFAA a través de Lanusse ensayan otra alternativa de poder con todos los grupos monopolistas, en el marco de una nueva alianza, de un gran acuerdo profundamente reestructurado. Coincidentemente, a nivel mundial, el imperialismo yanqui se veía obligado por su propia crisis a conceder una posición más negociadora con las potencias europeas y Japón.

Según se desprende de la política llevada a cabo por el gobierno de Lanusse —acuerdos con las grandes empresas multinacionales, represión, artimañas electorales— y a pesar de las concesiones hechas a las distintas fracciones pro-

—sintetizada por el general Perón— implicaba no solo una formidable avalancha popular y democrática, sino también un cambio radical en el control hegemónico del Estado. Podría decirse que cuando Perón desplazó a Paladino y se puso a conducir personalmente el proceso político, había decidido que la estrategia del GAN constituía un instrumento válido a condición de reapropiárselo para el campo nacional. Así fue como el Gral. Perón expresó a la amplia mayoría de toda la gama de fuerzas económicas, políticas y sociales que tienen algo que disputarle al imperialismo. Aunque en condiciones históricas sustancialmente distintas, volvió a ser el hombre que sintetizaba la hegemonía nacional en los asuntos de Estado.

Para completar el contexto histórico, debemos añadir que hoy se asiste a la continuación de un pro-

Congreso de la productividad:

El pacto que no fue

La crisis económica de los años 51 y 52 expresa la quiebra de un modelo de acumulación del capital basado en la ampliación del mercado interno, en el alza consecutiva de los salarios reales y la ocupación de los trabajadores, el apoyo crediticio y fiscal a las pequeñas y medianas empresas nacionales, la nacionalización de los servicios públicos, etc. Ella produjo la ruptura del frente de clases que tenía su expresión política en el peronismo como movimiento de liberación nacional, y fue el fin de la experiencia de nacionalismo antiimperialista protagonizada por los trabajadores y las masas en general. A partir de allí —y en las condiciones políticas de entonces— la reconstrucción del frente de clases se volvió un objetivo cada vez más utópico, y su fracaso definitivo lo atestiguó el Congreso de la Productividad.

Reunido en el último año del gobierno peronista, no pudo llenar el objetivo básico que pretendió adjudicarle la fracción de la burguesía nacional más conciliadora con el imperialismo: el de conducir a los trabajadores peronistas a la aceptación de un proyecto basado en el incremento de la productividad en las fábricas. Los otros dos pilares sobre los que se apoyaba la reestructuración económica —la traslación momentánea de ingresos a favor de la oligarquía terrateniente y la apertura de negociaciones con el capital internacional— habían comenzado a consolidarse. Si esta especie de Pacto Social adelantado en el tiempo fracasó, fue porque, a diferencia del actual, no contó con la firma de las direcciones gremiales.

En 1973 la historia recomienda en un punto básicamente similar, pero con el capital monopolístico extranjero tan afincado en la estructura económica que resulta ilusorio referirse al imperialismo como si



Las dos políticas de los monopolios.

pietarias en cuanto a conducción económica, es claro que el capital monopolista extranjero no estaba dispuesto a ceder su papel rector. Seguía siendo el sector de la sociedad que conducía la construcción de un nuevo equilibrio, el que más tenía que ver con las reglas de juego a fijar.

Por eso, al establecer hoy analogías entre el proyecto puesto en marcha por Gelbard y el GAN de Lanusse, resulta crucial no minimizar las victorias obtenidas en el terreno político. La propuesta del ejército representaba una cautelosa apertura de las compuertas políticas por parte de los voceros del imperialismo. La otra

ceso que se interrumpió abruptamente en el 55. Por eso, para entender la conducta actual del conjunto de fuerzas de distinto signo que se aglutinan en torno a Perón como único y provisorio término de unidad, es necesario analizar cómo se ubicaron en aquel momento crítico, cuáles fueron sus actitudes frente a la Libertadora, y qué correcciones han impreso al rumbo de sus propuestas estratégicas al cabo de estos 18 años durante los cuales, mientras la clase trabajadora peronista experimentaba su antagonismo irreconciliable con el enemigo imperialista, otros sectores económicos apostaban su subsistencia a la conciliación.

¿Pacto para la dependencia o alianza para la liberación?



fuera solo un enemigo externo. De todas maneras, la coyuntura que atravesamos puede ser comparada mucho más con 1952 que con 1946. Como en aquella oportunidad, resulta imposible disimular la existencia en el seno del Movimiento Peronista de dos proyectos contradictorios: el del capitalismo de Estado con control popular —prolongación del 46— y el modelo de la dependencia negociada. El primero es una premisa para la profundización del antimperialismo hacia el socialismo nacional. El segundo significa detener el proceso de liberación y estancarlo en un campo de negociación con el imperialismo. Ahora es la fracción más concentrada de la burguesía nacional, la más ligada al circuito productivo y tecnológico del imperialismo, la que intenta proponer, bajo su comando, nuevas reglas de juego a las empresas multinacionales, a la oligarquía terrateniente y a la dirección sindical. La gran

diferencia consiste en que esta última se ha pasado con armas y bagajes —aportando incluso el precioso candado que intenta colocar a la movilización de los trabajadores— al bando de quienes buscan consolidar un modelo neodependiente capitalista y estable, o sea, el modelo de dependencia negociada.

En este marco se pueden comprender mejor las estrategias económicas y sociales que se despliegan actualmente. Toda la intensa lucha política que vivió la Argentina en los últimos años, las movilizaciones populares que han ido creciendo desde 1969, la acción de las organizaciones revolucionarias del peronismo y el aliento político del propio líder del Movimiento, han servido para que la batalla entre Lanusse y Perón, entre la dictadura y la legalidad, entre la hegemonía imperialista y la hegemonía nacional se definiera, al menos parcialmente, en términos favora-

bles. Pero a partir de allí ha comenzado una segunda fase de la guerra, no menos feroz que la primera. Porque los dos proyectos del Movimiento Peronista son tan antagónicos como para que el triunfo de uno suponga necesariamente el aniquilamiento del otro. Porque el propio imperialismo ha abandonado transitoriamente su proyecto hegemónico para dar la batalla principal en la mesa de negociaciones. Aunque esto no significa que abandone todas las armas de que dispone para sabotear al gobierno popular: desabastecimiento, mermas en la producción, etc. Para que el proyecto de dependencia negociada tenga éxito, la burguesía nacional monopólica y la burocracia sindical deben neutralizar toda movilización de las masas que se consolide en formas de doble poder, deben desterrar todo vestigio de transición al socialismo nacional, aun aquel que lo exprese de la manera más embrionaria.



Perón, durante su primera presidencia, hablando en la CGT.



El imperialismo está adentro

A partir de 1955, en nuestro país se ha ido intensificando el predominio de las formas capitalistas de producción integradas al sistema mundial como un apéndice subordinado y dependiente. Las dos características de nuestro desarrollo en ese período han sido la dependencia de la nación respecto del imperialismo y la cada vez más brutal explotación del capital sobre el trabajo. Estos dos aspectos están indisolublemente ligados, pues el imperialismo además de actuar como factor externo apropiándose del excedente económico a través de los clásicos mecanismos comerciales y financieros, terminó por convertirse en el principal agente productivo interno, con la consecuente remisión masiva de dividendos, utilidades, regalías, etc. Decenas de miles de obreros trabajan en las fábricas del capital monopolista extranjero, y fuertes contingentes de la llamada burguesía nacional se integraron a su circuito productivo, sea como proveedores (caso de las fábricas de piezas para la industria automotriz), sea como compradores (caso de la industria textil respecto de los hilados sintéticos), sea como simples gerentes.

Los rasgos específicos de este modelo dependiente del imperialismo han sido:

1) Participación creciente de las ramas monopólicas de la industria en la composición del Producto Nacional. Mientras la agricultura y la ganadería mantenían niveles muy bajos de crecimiento (1% anual), y en el marco de un estancamiento relativo de la economía, la fracción de la industria más concentrada avanzó un promedio del 8 % anual, veinte veces más que los productores débiles. Se comprueba así que los monopolistas progresaron no para beneficio de la Nación, sino a expensas de los peces chicos.

2) Redistribución del ingreso a favor de los no-asalariados; y dentro de los asalariados, a favor de los sectores de la clase media y clase obrera vinculados al nuevo eje de desarrollo: el capital industrial monopolista. La caída de la participación de los trabajadores en el ingreso a partir del 55 no es un hecho fortuito sino la consecuencia necesaria del modelo imperialista de acumulación del capital, descrito en el punto anterior: los sectores más concentrados, que son los que más crecieron, fabrican bienes cuya demanda depende de los sectores, que perciben altos ingresos (automóviles, hilados sintéticos, lámparas y artículos eléctricos, derivados del petróleo); en cambio los que han quedado estancados unen su destino a los ingresos y capacidad de consumo de los trabajadores, a los niveles de salario y ocupación (pan, productos lácteos, fideos, producción de frutas y legumbres, artículos de punto de lana y algodón, etc.).

3) Tendencia a la desocupación estructural. Las técnicas y maquinarias importadas de los centros imperialistas tienden a ahorrar mano de obra, y no a ocupar la que está libre. Por otro lado, la lógica monopolista implicó la ruina de miles de pequeños y medianos industriales dejando en la calle núcleos cada vez mayores de la clase trabajadora y marginando económicamente zonas enteras del país. Estas son las causas del millón y medio de desocupados que había el 25 de mayo del 73.

4) Concentración de la propiedad, con participación creciente del capital extranjero. Entre 1955 y 1973, mientras las ramas menos concentradas de la industria pasaron del 40 % al 23 % del total, el gran capital creció del 32 al 43 por ciento. Sólo durante la dictadura militar quebraron, según cálculos moderados, 15.000 industriales. En cuanto al capital extranjero, dos datos reflejan su ofensiva: a) con una mínima inversión lograron participar del 20 % del aumento del producto bruto entre 1959 y 1968; b) dentro del sector foráneo, las empresas norteamericanas crecieron en ese lapso a una tasa del 17 %.

5) Crisis periódicas caracterizadas por el estrangulamiento del sector externo en el contexto de un endeudamiento creciente. Una de las notas básicas de la economía argentina es que la industria necesita comprar maquinarias y materias primas en el exterior que no se fabrican en el país. Como paralelamente vende muy poco en el mercado mundial, los dólares necesarios para esas importaciones provienen de las exportaciones agropecuarias. Allí es donde sufre su primer tropezón; pues por un lado, se encuentra con que la producción agropecuaria no crece al ritmo de la industria; y por otro los trabajadores —ante la expansión y el auge de la actividad industrial— ganan más y por lo tanto consumen buena parte de lo que el país podría exportar. Visto desde la perspectiva de los capitalistas, es como si los obreros comieran dólares.

Cuando la oligarquía terrateniente tenía más poder, la solución tradicional era la devaluación. Esta permitía equilibrar la balanza comercial, pues provocaba un encarecimiento de lo que la industria adquiría en el exterior, abultando las deudas que los empresarios habían comprometido en dólares; lo que provocaba una crisis: la producción caía, los obreros perdían su trabajo o disminuía su salario de modo que en los hechos se los obligaba a consumir

¿Pacto para la dependencia o alianza para la liberación?



menos. Al mismo tiempo, la oligarquía se beneficiaba pues los dólares que recibía por sus productos valían más pesos. El efecto global era una traslación de ingresos de la ciudad al campo y de los asalariados a los no asalariados.

En los últimos tiempos, el mecanismo de la devaluación ha caído en desuso en parte porque los precios internacionales de nuestras exportaciones han crecido mucho, y en parte porque la dictadura apeló a otras armas para reprimir el consumo de los asalariados: la veda y el deterioro del poder adquisitivo de sus ingresos a través de congelar los salarios y suspender paritarias.

En síntesis, el modelo imperialista de acumulación del capital se enfrentó con serios obstáculos. El deterioro de los términos de intercambio —proceso que ahora parece revertirse transitoriamente— restó posibilidades de desarrollo por la vía comercial; la

dependencia tecnológica respecto a insumos y maquinarias importadas obligó a los industriales a negociar permanentemente con la oligarquía, fuente de sus dólares; el endeudamiento creciente limitó el campo de las decisiones, cualquiera fuera la autoridad del Estado; la resistencia de los trabajadores peronistas imposibilitó el descenso más acentuado de los salarios reales, y finalmente las contradicciones entre las clases propietarias dificultaron la institucionalización de un proyecto de desarrollo estable. Estas son las condiciones estructurales en las que el Gral. Perón asume el gobierno, sustancialmente distintas a las de 1946. A su vez, en esta situación estructural se expresan políticamente los componentes antagónicos del Movimiento Peronista: los que aspiran al modelo de dependencia negociada y los que intentan construir el modelo de transición hacia el socialismo nacional.

Pacto Social: la tercera posición

En toda la fase preelectoral era prácticamente unánime la idea de que sólo había dos proyectos viables: la hegemonía del capital monopólico extranjero —fuera en su variante parlamentaria y negociada (Lanusse), fuera a través de un endurecimiento dictatorial—, o una alianza anti-GAN a la que solía identificarse con una alianza de clases antimperialista. No resultó así, sino que hubo una tercera alternativa, todavía sumamente inestable, que es la que se intenta desarrollar ahora y cuyo destino final depende de un conjunto muy complejo de factores. De cumplirse los objetivos que se explicitan (articulados en el Pacto Social), se revertiría el proceso descrito en el punto anterior. El fortalecimiento del mercado interno a través de una redistribución progresiva del ingreso y de un aumento de los salarios reales, el apoyo crediticio y tecnológico a la pequeña y mediana empresa, la estabilidad de los precios, la lucha contra la desocupación, la descentralización económica y la eliminación de la marginalidad social constituyen metas opuestas a las pautas de acumulación vigentes hasta el 25 de mayo de 1973.

Pero si decimos que se trata de una tercera variante intermedia entre la hegemonía monopólica extranjera y la alianza antimperialista, es porque la política económica que se viene implementando va por otro rumbo precisamente intermedio, tendiendo a favorecer a la gran burguesía nacional monopó-

parte con ella el poder sobre el Estado. Naturalmente, este bloque de clases y sectores no tiene nada que ver con una alianza antimperialista, pero tampoco es un simple comisionado del imperialismo. Esto puede verificarse a través de varios indicadores: la política fiscal o el débil y vacilante control sobre prácticas monopólicas, la vigilancia estatal más estricta de los mecanismos financieros del capital monopolista, y el privilegio de la burguesía monopólica nacional frente a los monopolios extranjeros en lo que se refiere a proyectos industriales. Si el contrato de Aluar fue un regalo de Lanusse a Gelbard, esto hoy se ha convertido en la estrategia dominante. Por último, el intento de dar cabida a capitales externos no tradicionales como en el caso de las inversiones de los países socialistas, japonesas y árabes.

Para estudiar más a fondo las relaciones internas del bloque y las que establece con otras fuerzas económicas y sociales intentaremos diagramar la posición actual de cada grupo. En una primera línea aparecen la gran burguesía industrial nacional, la burguesía agraria más capitalista, el gran capital bancario nacional y la burocracia sindical. Más atrás, en una segunda línea, y como interlocutor inmediato, el capital monopolista extranjero. El sector comercial-financiero tradicional y el agro-oligárquico terrateniente participan del Pacto Social como sectores subordinados. Los terratenientes, sin embargo, han mostrado una mayor capacidad de ne-

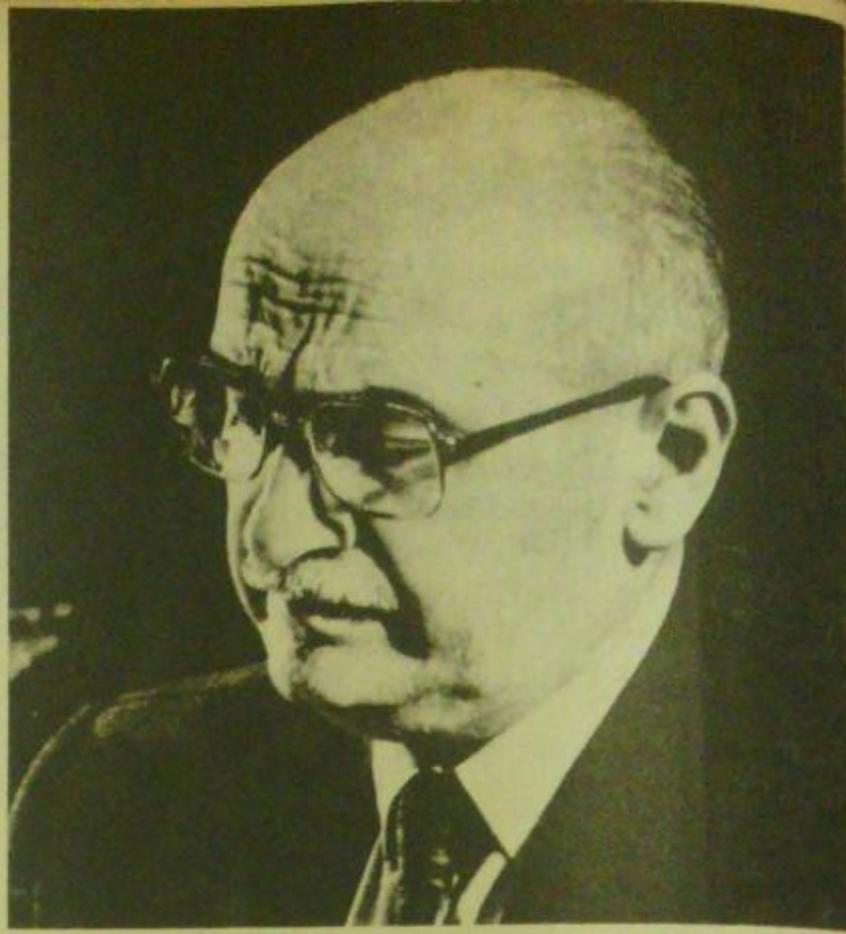
El Topo Blindado

gociación, expresada en el Acta de Compromiso Agropecuario y en la obtención de algunos puestos gubernamentales.

En cuanto a la clase trabajadora y la pequeña y media burguesía nacional, ocupan posiciones muy difíciles de definir por el momento. La primera no ha sido totalmente desplazada gracias a su combatividad indeclinable. Sin embargo, no solo no está representada institucionalmente sino que, incluso, la misma mecánica del Pacto Social supone una postergación de las metas redistributivas: si los salarios se incrementarán solo cuando suban los precios de los bienes de consumo, no puede esperarse entonces una mejora en los ingresos de los asalariados por lo menos en 1974 o hasta que se modifique la norma. Finalmente la pequeña y mediana burguesía, abandonadas por una conducción económica que dice representarlas (CGE), también han visto defraudadas sus expectativas. El aumento de salarios de junio del 73 las perjudicó, ya que su carácter masivo —20.000 pesos para todas las categorías— golpea más fuertemente a las empresas chicas, que pagan sueldos menores. Además, la política crediticia no se modificó sustancialmente después del 25 de mayo. Los depósitos se nacionalizaron, pero los bancos siguen prestando según sus propios criterios, fundamentalmente el de otorgar créditos a quienes ya los tienen: las grandes empresas. Esto evita cualquier riesgo a los bancos, pero impide que el sector financiero juegue un rol promocional como tuvo entre 1946 y 1955.

La situación actual es demasiado inestable como para que este diagrama agote el tema. Por ejemplo, la actitud del bloque hegemónico ante la oligarquía terrateniente puede endurecerse si —como es previsible— los planes de incremento de la producción agropecuaria fracasan. En cuanto al sector de la burguesía industrial del bloque, ha oscilado entre su carácter nacional (que lo llevaría a agruparse con pequeños y medianos empresarios, base social de la CGE) y su estructura monopólica (que lo impulsa a consolidar sus acuerdos con el capital extranjero, aún cuando esto supone la ruina de muchos de sus supuestos representados). La tendencia indudable hasta ahora le da preponderancia a lo segundo, usando a los pequeños y medianos industriales y comerciantes como masa de maniobras e instrumento de presión, pero tratando de disminuir en parte los efectos concentracionistas de la política llevada a cabo desde el Estado. A esto se debe el impulso al crédito cooperativo, que abastece a los empresarios menores.

Pero, ¿qué es lo que cada miembro del bloque puede ganar con su pertenencia a él? ¿De qué manera se ha visto beneficiado cada uno por la política económica del actual gobierno? Para responder esto debemos analizar detenidamente el proyecto estratégico del bloque hegemónico depositado en la propuesta de Reconstrucción Nacional. Inspirados en la posguerra europea, el término alude mucho más —según la interpretación de estos sectores— a la necesidad de organizar una "élite" dirigente nativa apta para hacer del país una potencia capitalista apoyada sobre clases propietarias fuertes, que a la idea de agrupar y consolidar las fuerzas dispuestas a combatir el imperialismo. Para este bloque el sistema ca-



Gelbard y Broner. ¿A quién representa hoy la CGE?

pitalista mundial es un dato incambiable, y la mejor política consiste en integrarse a él con el máximo grado de independencia compatible con la estabilidad del régimen. Por ello resulta imprescindible reemplazar la lucha por la negociación.

El objetivo es alcanzar rápidamente un poder de regateo aceptable, como hicieron los países europeos respecto a EE.UU. en el marco de la Comunidad Económica. ¿Qué hace falta para lograrlo? Simplemente, apoderarse del aparato del Estado, y con esa palanca formidable afianzarse en la estructura productiva tanto frente al imperialismo como frente a las clases populares. Estas son las metas de los sectores propietarios —grandes industriales, banqueros, capitalistas agrarios— en el actual bloque hegemónico. En cuanto a la burocracia sindical, ha asumido la tarea de desca-

¿Pacto para la dependencia o alianza para la liberación?



bezar cualquier intento de movilización popular.

Dentro de este proyecto de dependencia negociada, las dos consignas centrales de la etapa de Reconstrucción Nacional adquieren un sentido distinto al que le asignaría una alianza de clases verdaderamente antimperialista: a) Fortalecer el Estado —prioridad número uno según todos los documentos oficiales— significa apropiarse de él; b) redistribuir los ingresos —la otra consigna— implica usar el poder obtenido para renegociar el reparto del excedente con el imperialismo y la oligarquía tradicional. El primer paso es una condición necesaria del segundo, pues la gran burguesía nacional necesita controlar los mecanismos de fijación de precios, orientar el crédito, redefinir la política fiscal y sobre todo capitalizar a su favor la enorme capacidad de consumo e inversión del Estado, si quiere transferir para sí una buena tajada de las superganancias del capital monopolista extranjero y de la renta terrateniente.

Naturalmente, toda alianza de clases, y mucho más si no es dominante en la estructura productiva, procurará acumular fuerzas velozmente en el aparato estatal para garantizar su meta de redistribución de ingresos. El proceso abierto el 25

de mayo no es una excepción, pero, a diferencia de lo que pudo pensarse al comienzo, el poder sobre el Estado no pasó de un bloque proimperialista a un Frente de Liberación Nacional y social, sino que fue absorbido en su mayor parte por la burguesía monopólica nacional, con la consecuente postergación de los intereses de los trabajadores. Así, la redistribución de ingresos de Gelbard y Cía. consiste en una transferencia del gran capital extranjero al gran capital nacional; de la oligarquía terrateniente especulativa y parasitaria al capitalismo agrario, y de la banca extranjera a la banca nacional más concentrada. Esto no excluye una cierta redistribución sectorial, tanto del campo a la ciudad —reduciendo los precios agropecuarios— como de las finanzas a la producción industrial y agraria —bajando las tasas de interés. Así, los tres rasgos definitivos del proceso son: el dominio del Estado por parte de la burguesía nacional concentrada, las consecuentes transferencias intramonopólicas recién descritas y, finalmente, el congelamiento que parece amenazar la redistribución de ingresos a favor de los asalariados, luego de la mejoría experimentada como resultado de los aumentos de junio.

¿Para qué sirve el Estado?

Veamos ahora los mecanismos de política económica implementados por el bloque hegemónico para cumplir sus fines. Ya hemos hablado de la importancia que tiene para la multiplicación de los negocios de la gran burguesía nacional el objetivo de copar el aparato estatal. En este terreno son sustanciales los progresos que ha realizado desde el 25 de Mayo, aún cuando debió —y debe todavía— enfrentar dos obstáculos fundamentales: a) la oposición de sectores que dentro del peronismo y desde el gobierno alimentan un proyecto popular, y b) la compe-

tencia de la burocracia sindical.

El Estado al servicio de las grandes empresas no es un fenómeno totalmente nuevo en la Argentina. Antes de que la burguesía nativa más concentrada —en especial el sector industrial— lanzara su ofensiva, ya abundaban los ejemplares, nacidos a lamparos de la reacción imperialista posterior al 55. Uno de ellos es el de Petroquímica General Mosconi, donde el Estado posee el 51% de las acciones y sin embargo existe mayoría privada en el Directorio, con lo cual las empresas privadas controlan la política de inversiones en un rubro

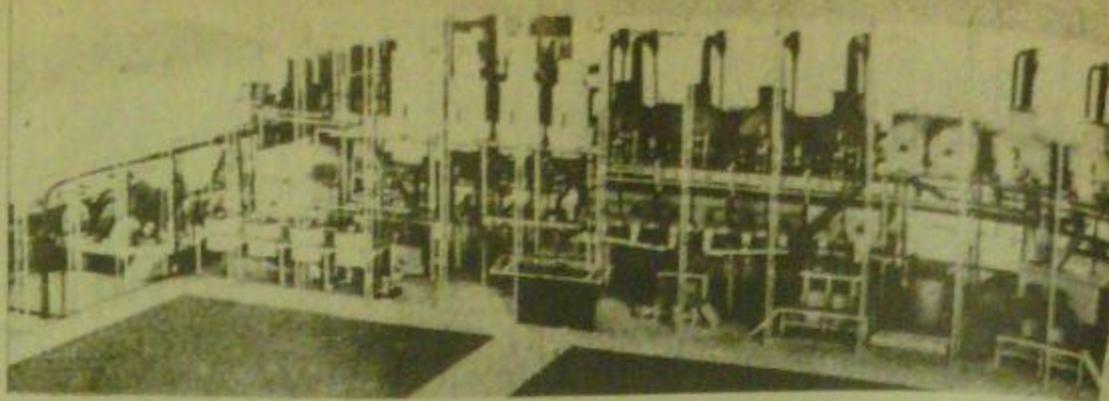
estratégico. Otro es el de las dos acerías proyectadas dentro del Plan Siderúrgico, en las que participarán capitales estatales y privados. Sin embargo, no es necesario recurrir a las empresas mixtas para atestiguar sobre dicha subordinación. En este momento, por ejemplo, el punto culminante del proyecto la constituye la Corporación de Empresas Nacionales, un ente descentralizado que tiene por objeto ejercer la dirección superior de todas las empresas del Estado. Semejante poder será manejado con total autonomía y de acuerdo a criterios de rentabilidad, y por lo tanto ignorando la función social que debería tener el sector público —e incluso prescindiendo del control financiero del Tribunal de Cuentas—. Para esto último contará con su propia Sindicatura General, de modo de evitar la invasión de cualquier otra área del Estado sobre su dominio.

Se ha criticado a menudo el ca-

rácter tecnocrático y eficientista que se quiere imprimir a la gestión del organismo, alegándose que eso es absolutamente contrapuesto a la política llevada a cabo en los dos primeros gobiernos peronistas. Sin embargo es mucho más importante el hecho de que se haya concedido a la cúpula de la CGE, es decir, a la burguesía nacional monopolística, el control casi total de la Corporación. A partir de aquí el ente —y en consecuencia su formidable poder de compra— será puesto al servicio del grupo que conduce la política económica sin que nadie pueda cuestionar sus decisiones. El bloque hegemónico, comandado por su fracción industrial, concentra así una importante dosis de poder.

La conquista de ese enorme poder económico por parte de la gran burguesía industrial se oficializó a principios de enero, al concurrir más de 100 empresarios, encabezados por Julio Broner, a Olivos para ofrecer su trabajo "gratuito" en la Corporación. Además de Manuel Madanes, socio de Gelbard en Aluar y titular del ente, estuvieron allí los representantes de Bunge y Born, Fiat, Alpargatas, Duperial, Ducilo, Pérez Compagn, Celulosa, Wobron, SADE, Ledesma, lo que muestra que los grandes burgueses nacionales han optado por estrechar sus vínculos con los monopolios extranjeros antes que fortalecer una alianza antimperialista. En síntesis, por lo menos 25 de las 100 empresas que más venden, acompañadas de los campesinos enriquecidos de la Federación Agraria y los grandes financistas nacionales nucleados en la Asociación de Bancos Argentinos.

Semejante coincidencia no descarta una lucha que a veces se canaliza en la mesa de negociaciones y otras en los hechos. Las transferencias de ingresos de los monopolistas extranjeros a los nacionales han dado pie a respuestas a veces drásticas, como lo demuestra el desabastecimiento de aceite, carne, pollos, envases de plástico, cigarrillos, etc. Todo esto conforma un cuadro que oscila permanentemente entre la tendencia a la estabilidad y la tendencia a la ruptura. Al fin de cuentas el capital monopolista extranjero es el sector que más ha perdido: perdió la hegemonía, y no se resigna sin lucha.



La redistribución de ingresos en la industria

Tras recortar su tasa de ganancia mediante políticas fiscales y congelamiento de precios, el bloque hegemónico ha ofrecido a las empresas extranjeras una compensación a través de los mercados exteriores. Tasas de cambio sumamente favorables, reintegros del 30 % más otro 5 % por la incorporación de nuevos mercados y hasta el financiamiento argentino de las compras de otros países —como es el caso de Cuba— ponen de manifiesto la voluntad negociadora de la burguesía nacional monopolista. Esto resulta más notable si se considera que hasta ahora las exportaciones industriales por parte de empresas extranjeras —las cuales absorben el 70 % de esas ventas— no ha rendido frutos muy brillantes: entre 1965 y 1970, mientras las exportaciones de un conjunto de firmas multinacionales instaladas en el país crecieron un 42 %, sus importaciones lo hicieron en un 121 %. Por otra parte, entre 1966 y 1971 las recaudaciones de la Administración General de Aduanas crecieron un 200 %, y los certificados de reembolso y reintegro por exportaciones no tradicionales en un 368 %.

La otra propuesta —la Ley de Inversiones Extranjeras— confirma que los monopolios nacionales buscan más bien celebrar un pacto que agudizar un proceso redistributivo. La ley, que por cierto limita severamente la anterior omnipotencia de las firmas multinacionales, procura ser el instrumento de empresas mixtas entre capitales privados nacionales e inversores extranjeros. En el texto se

pone un énfasis especial en las "joint-ventures" —denominación internacional de este tipo de empresas mixtas—, que por otra parte han constituido en los últimos 10 años la forma predominante de participación de capitales externos en los planes de inversión no solo de países dependientes —México, la India, por ejemplo— sino incluso en el Mercado Común Europeo.

La ley contempla tres formas distintas de "joint-ventures": 1) cuando la participación externa supera el 50 % son empresas extranjeras; 2) denomina mixtas a las que cuentan con una participación foránea de entre el 50 y el 20 %, y 3) nacionales cuando el inversor extranjero controla menos del 20 % de las acciones. Los monopolistas nacionales deben controlar férreamen-



Exportaciones a Cuba. Los monopolios también se benefician con la ruptura del bloque.

El Topo Blindado para la dependencia o alianza para la liberación?



te el Estado si es que verdaderamente quieren fijar ellos las reglas del juego; pues el sistema de "joint-venture" ofrece grandes ventajas a las inversiones internacionales en la actual fase de desarrollo del mercado mundial capitalista. Por un lado, neutraliza la ofensiva de los sentimientos nacionales, utilizando a la burguesía nativa como escudo. Pero además, con no más del 20 % del paquete accionario pueden dirigir la adquisición de procesos tecnológicos, patentes, marcas y asistencia, además de las materias primas que deban importarse a las casas de origen del capital internacional o a alguna de sus subsidiarias.

Debe señalarse que esa frontera del 20 % que separa a las empresas mixtas de las nacionales suele resultar ficticia, pues con mucho menos es posible apropiarse de los mecanismos de dirección de la política empresarial. En EE.UU. la Banca Morgan controla dos empresas tan fuertes como la General Electric y la United States Steel Corp. con menos del 15 %. Y en los países dependientes esto se facilita por el uso de testaferros nativos y la gran dispersión del resto de los inversores. La Ley facilita la preparación de "hombres de paja" al dar un plazo de 10 años para que las nuevas empresas extranjeras se transformen en mixtas, y uno de 3 para el adecuamiento al texto legal de las antiguas inversiones. Podría argüirse que un estado fuerte al servicio de los burgueses nacionales estaría en condiciones de combatir estos subterfugios. El problema es que tácitamente las trampas mencionadas forman parte de los acuerdos de inversión. Una vez que se ha decidido aceptar la lógica de la acumulación a escala mundial negociando en el interior de ella, la tragedia comienza: o se siguen haciendo concesiones al más fuerte, o los capitales no vienen.

Capitalistas en el campo

Uno de los objetivos estratégicos del gobierno es incrementar sustancialmente la producción agropecuaria, de modo de satisfacer dos requerimientos simultáneamente: el consumo de las masas y la exportación creciente. Para conseguirlo, sin embargo, debe enfrentarse al comportamiento tradicional de la oligarquía terrateniente, esperanzada mucho más en el alza del precio de la tierra que en los beneficios que podría obtener de una inversión. Por ello en esta área la redistribución pretende tomar la forma de una transferencia de la propiedad a favor de los capitalistas agrarios, para lo cual se ha establecido el impuesto a la renta potencial de la tierra. Este gravamen intenta castigar con tasas muy altas a los sectores ineficientes, de modo de obligarlos a vender sus campos, que serían adquiridos así por quienes estén en condiciones de elevar la productividad. Se buscaría así desalentar a quienes mantienen la propiedad sólo como una reserva de valor, pero también arruinar a los minifundistas, que por la pequeña dimensión de sus tierras no alcanzarían las pautas fijadas.

En términos de instituciones, el capitalismo agrario se expresa en los campesinos ricos que forman la cúpula de la Federación Agraria Argentina, en los fuertes cooperativistas de CONINAGRO, y hasta en los grupos de oposición interna en la propia Sociedad Rural. Precisamente un hombre de esta extracción —Jorge Pereda— es el actual director de la Junta Nacional de Carnes. En cuanto a la oligarquía terrateniente tradicional, mantiene sus dos reductos clásicos: Sociedad Rural y CARBAP, que agrupa a productores de Buenos Aires y La Pampa y es la única que no firmó el Acta de Compromiso Agropecuario. En este frente, sin embargo, la puja también es dura. Los representantes del capitalismo agrario impusieron la ley, pero ésta recién comenzará a aplicarse en 1975, dado que es indispensable confeccionar un catastro, lo que puede a su vez demorarse.

Otra ley, la de uso racional de la tierra y arrendamiento forzoso, determina que el Consejo Agrario Nacional puede adjudicar en arrendamiento y por cuenta del propietario las tierras no explotadas en un 50 % de su superficie, o bien en un 20 % cuando excedan las 2.000 has. Esta es también un arma a favor de los capitalistas del campo, más aún considerando la preferencia que se dará a los técnicos agropecuarios o productores dotados de equipos y financiación mínima. Sin embargo, en los hechos el control sobre las tierras mal explotadas presenta serias dificultades y requiere una intensa movillización de recursos.

Sector financiero

Después de la nacionalización de los depósitos bancarios, todas las instituciones de crédito pasaron a actuar como agencias del Banco Central, el cual fijó comisiones diferenciales por las tareas que realizaba. Las más altas correspondieron a los bancos del Estado, discriminándose entre los privados, a favor de los nacionales y en contra de los extranjeros. Eso se combinó con otra medida del Banco Central que incrementó los capitales mínimos requeridos a las instituciones bancarias del país, dándose un plazo de adecuamiento a las que estuvieran por debajo. El efecto de esto será una concentración más o menos acelerada, de la que saldrán beneficiados los bancos nacionales fuertes: Galicia, Italia, Español, Ganadero Argentino y Nuevo Banco Italiano. Muchos de los pequeños tendrán que desaparecer: en la provincia de Buenos Aires, solo cuatro de los veintitrés bancos llenan esas condiciones.

Las diferentes traiciones: La burocracia sindical

La presencia de la cúpula sindical en el bloque hegemónico no responde a las mismas motivaciones que los sectores económicos, sino a un proyecto de acumulación de poder fundado en dos rasgos básicos: el ejercicio formal de la representación de los obreros y su eficacia relativa para desmovilizarlos. A partir de allí, y apoyados en su condición de peronistas, los burócratas le han disputado, y aún intentan hacerlo, la conducción del programa de gobierno a José Gelbard. Pero los intentos de cambiar a éste por un amigo no implican necesariamente la posterior implementación de una política distinta, más proimperialista o más popular. Ambos sectores se asientan en el Pacto Social tratando de acaudillar un proceso enmarcado —para ellos— en los límites de la negociación con el imperialismo y la oligarquía terrateniente. Su aspiración común es construir un modelo de desarrollo estable, cosa que no pueden lograr fuera del encuadre político del Movimiento Peronista, en donde está garantizado el rol protagónico de sus propias organizaciones. Se dividen, pues, en la lucha por la hegemonía: la burocracia intenta robarle el puesto de comando a Gelbard.

Tanto la burocracia como la gran burguesía nacional comparten un acentuado antisocialismo, una fuerte vocación por la desmovilización de los trabajadores, y una muy buena voluntad para negociar entre ellos cuando las bases presionan. Pero esto no debe llevarnos a igualar mecánicamente a la burocracia con el imperialismo, así como Gelbard no

es un testaferro del capital monopolista extranjero. Los actuales dirigentes sindicales son, antes que nada, traidores de clase, y como tales deben ser combatidos. Su subsistencia depende de la negociación permanente con el capital y la satisfacción de algunas aspiraciones reformistas de los trabajadores. En esa estrecha franja deben desarrollar su política. De manera que la burocracia sindical —como capa— intenta conducir el proyecto de dependencia negociada. El acuerdo que firmaron las cúpulas de la CGT y la CGE —ya que sus bases poco tienen que ganar con el Pacto— era más que nada un reconocimiento de fronteras de poder en el marco de una propuesta común.

Pero como ocurre siempre en estos casos, las fronteras son frágiles y los acuerdos poco duraderos. Hoy existe un equilibrio inestable, sometido a tensiones muy fuertes, como los conflictos entre los Ministerios de Economía y Bienestar Social, o las acometidas en favor de aumentos salariales, que pueden llegar a repetirse y son explicadas, en parte, por la voluntad de acumular poder por parte de las direcciones sindicales.

Decimos en parte porque, si bien ambos sectores comparten el proyecto neodependiente, hay que establecer algunos matices importantes. En primer lugar, el grupo Gelbard-Madanes-Broner negocia con el imperialismo desde sus intereses directos en la esfera de la producción: constituye una burocracia empresaria y en ese sentido distorsiona y traiciona permanentemente las aspiraciones de la pequeña y mediana burguesía industrial, comercial y agraria. Pero conserva su carácter capitalista, la propiedad de un conjunto de fábricas cuyos procesos productivos están cada vez más conectados con el mercado mundial y dependiendo de la tecnología imperialista. En cambio, los actuales dirigentes sindicales son una burocracia de distinto signo, interesada ante todo en mantener su posición y su rol en la sociedad. En segundo lugar, si bien ambas son antisocialistas y represivas, la segunda podría llegar a darse una política con rasgos más redistributivos. Al fin y al cabo sus corruptos ingresos no dependen tanto de la explotación creciente de los trabajadores como de su capacidad para hacer negociados y capitalizar la masa de dinero que entra en los sindicatos en concepto de cuotas gremiales.



¿Pacto para la dependencia o alianza para la liberación?



El pacto y la verdad de una catástrofe

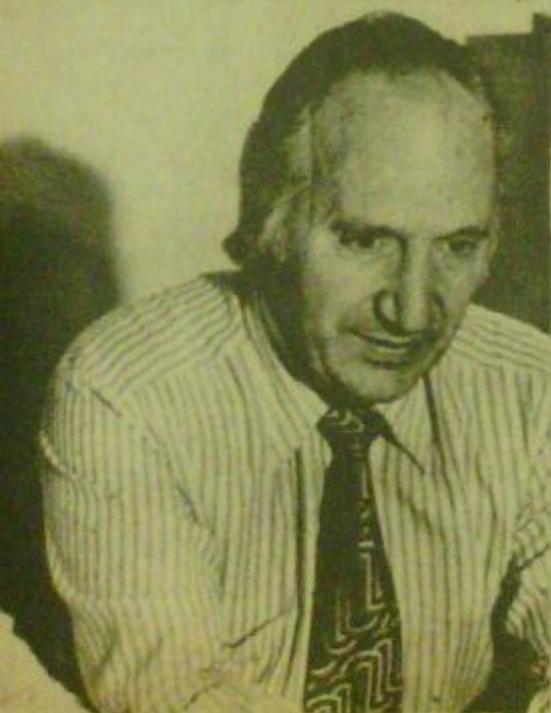
Hemos descripto la composición del bloque hegemónico, su estrategia negociadora con el imperialismo y la oligarquía, su concepción del papel del Estado y la redistribución de ingresos, el contenido que atribuye a la propuesta de Reconstrucción Nacional, los beneficios que cada fracción integrante puede obtener de su participación en él, sus vinculaciones con la historia del peronismo, y, fundamentalmente, **hemos pronosticado que, por lo menos durante 1974, ni los salarios reales, ni la participación de los trabajadores en el ingreso, mejorarán.** A partir del análisis de ese proyecto podemos desarrollar algunas pautas que nos ayuden a profundizar el problema del programa de transición.

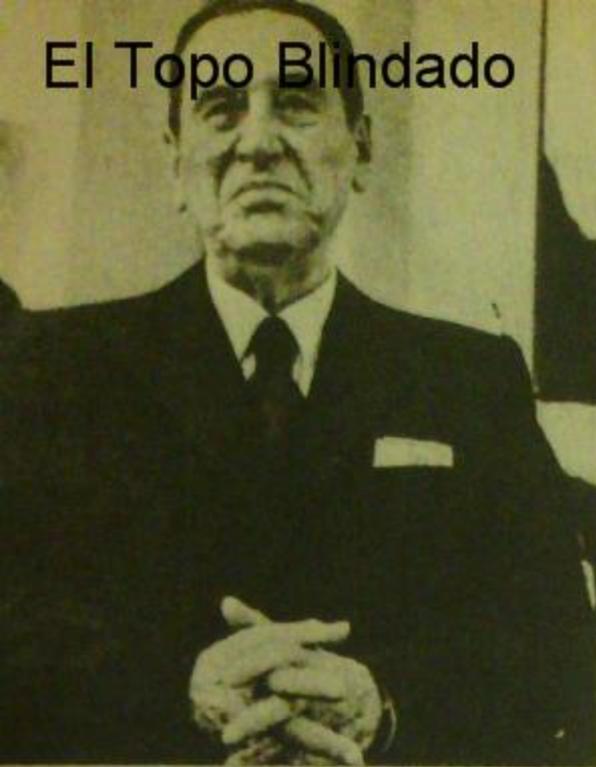
El Pacto Social firmado por la CGT y la CGE es presentado como un requisito imprescindible para superar, sin luchas estériles, la herencia nefasta de un pasado de 18 años de malos gobiernos que devastaron la economía. Sería a la vez la garantía menos costosa y más segura para poner luego en marcha un proceso de Liberación Nacional. Quienes se oponen a él serían tontos e impacientes: irresponsables que no tienen en cuenta la necesidad de ir cubriendo etapas hasta llegar a la meta final. Etapas a las que en última instancia estarían sacrificando en sus posibilidades reales por su obstinación en apresurarse. ¿Es correcta esta crítica? Creemos que ella desfigura la realidad: la oposición al Pacto Social no se basa en los tiempos o ritmos de su realización, sino en sus supuestos y sus metas finales. El proyecto en marcha difiere radicalmente de las necesidades objetivas de la clase trabajadora. Va contramano de sus luchas de todos los días, y tampoco satisface la voluntad de Liberación Nacional de los demás sectores realmente perjudicados por la dependencia del imperialismo. Las

diferencias con el Plan Gelbard no están en un apresuramiento por querer "llegar más rápido", sino en una definición totalmente distinta de adónde se quiere llegar.

Es así como —tras la apariencia de ciertas consignas— se esconden significados equívocos. Profundicemos en la de la Reconstrucción Nacional. Se comparan los resultados de los 18 años desde el 55 con los de una guerra, una peste o una calamidad natural. En todo caso, esa catástrofe afectó al "pueblo argentino", pero como concepto social, no geográfico; a los obreros, los pequeños productores agrarios, los industriales y comerciantes con escaso o mediano capital. El resto, es decir, el capital extranjero, los terratenientes, los exportadores e importadores, los banqueros y financistas no solo no han sido destruidos sino que han acumulado cada vez más riqueza y poder. Y son ellos quienes más hablan ahora de la necesidad de un sacrificio para conseguir la "Reconstrucción Nacional".

No se ha producido una destrucción de las fuerzas productivas ni de las riquezas, como ocurre después de una guerra. En términos globales, nuestra economía ha crecido, aunque tal crecimiento sea pobre frente a las tasas "espectaculares" de Brasil. En la última década, si nembargo, ha sido constante: la tasa de crecimiento del producto bruto por habitante alcanzó un promedio anual del 2,6 %, la más alta de Sudamérica, y no muy lejana a la de los países desarrollados. Lo que ha habido, como hemos visto, es una redistribución regresiva de la mayor riqueza generada a favor de los sectores más concentrados de la industria, el comercio, las finanzas y el agro. Hubo un cambio en el perfil de la economía y en las relaciones entre las clases, redefiniendo las formas que asume la tradicional contradicción entre el imperialismo y sus aliados





Perón contra los "apresurados".
Primero la reconstrucción, después
la liberación.

internos y el pueblo. Hubo una guerra, sí, pero una suerte de guerra civil contra la clase obrera y los pequeños y medianos productores, un sistemático genocidio practicado contra los sectores más pobres de la población, que se manifiesta en el crecimiento de la mortalidad infantil. Una postergación de las aspiraciones de quienes sobrevivían, expresada en el crecimiento de la deserción escolar, el déficit de viviendas, en el envenenamiento de la vida cotidiana en las barriadas obreras.

En pocas palabras: lo que se destruyó fue el poder político, social y económico de que gozaba el pueblo con el fin de reconstruir otro poder, bajo el predominio del capital monopolista extranjero radicado en la industria y en las finanzas y conformado también por la oligarquía terrateniente y la burguesía nacional monopolista. Desde el punto de vista de las clases dominantes que conforman el bloque enemigo del pueblo, los rasgos del período anterior, acentuados desde el gobierno de Frondizi, fueron: 1) predominio del capital monopolista extranjero, no sólo yanqui sino europeo; 2) desplazamiento de la oligarquía terrateniente, que conserva pese a ello buena parte del poder por la influencia que tiene sobre el comercio exterior; 3) consolidación de la burguesía nacional monopolista, asociada a través de distintas vías con el capital extranjero. Esa fracción de clase controla hoy la CGE y es la que mayores ventajas relativas obtiene con el Pacto Social.



El pacto del pueblo

Esa alianza entre el capital extranjero, la oligarquía terrateniente y la burguesía nacional monopolista —a pesar de que existen contradicciones secundarias y parciales entre ellos— comparte, en líneas generales, un proyecto; por lo que constituye un bloque de fuerzas, sobre el que se sustenta el capitalismo dependiente. Con diferentes cuotas de poder relativo entre ellos según las épocas, los integrantes de este bloque han sido los beneficiarios del proceso posterior al 55. Es su proyecto de desarrollo, enfrentado antagónicamente con el pueblo, el que los lleva a confundir deliberadamente la situación actual de la economía con una catástrofe que perjudicó a todos por igual, y plantean entonces una "Reconstrucción Nacional" en la que sea el pueblo quien siga costeadando el mantenimiento de sus privilegios.

Pero el pueblo —sometido durante 18 años y artífice de las victorias del 11 de marzo y el 23 de setiembre— entiende de otra manera la "Reconstrucción Nacional". "El pueblo" no está formado por todos quienes habitan una nación; ése es un concepto demográfico o geográfico. Social y políticamente considerado, el concepto de pueblo varía según las etapas del desarrollo de cada sociedad: en 1974 no lo forman los mismos sectores que en 1946. El pueblo es una alianza de clases que se enfrenta a otra alianza de clases. Hoy lo constiuyen los obreros y empleados, los trabajadores agrícolas, los desocupados y los marginales, los técnicos e intelectuales y los pequeños y medianos productores y comerciantes.

Los 18 años de contrarrevolución se tradujeron —entre otros— en los siguientes efectos para el pueblo: estancamiento del salario real; incremento de la desocupación y deterioro brutal del nivel de vida; descenso de la participación de los asalariados en el ingreso; descenso de los consumos sociales (vivienda, educación, salud, transporte, recreación); marginalización creciente de regiones y provincias "atrasadas"; aumento de la explotación de los trabajadores, pérdida de conquistas sociales, intensificación del despotismo patronal; ahogo y quiebra de pequeños y medianos productores urbanos y rurales.

Pero el pueblo no quedó pasivo frente a esa ofensiva. Peleó y resistió; fue creando sus propias organizaciones políticas y militares, pagó una alta cuota de sacrificios y de vidas. Amasó así la vuelta de Perón al poder, como expresión de la voluntad de revertir ese proceso, como manifestación de su manera de entender —al revés de los patrones y traidores— lo que debía ser la Reconstrucción Nacional. Sobre esas luchas y esas esperanzas se ha montado ahora un sector que sólo mantenía contradicciones secundarias, parciales, con el capital extranjero: la burguesía nacional monopolista. Este sector es el que ahora impone, defraudando tantos años de lucha, el Pacto Social y la política económica del gobierno popular.

¿Por qué fue posible que todos esos combates del pueblo fueran

¿Pacto para la dependencia o alianza para la liberación?



usurpados por la corte de Gelbard y sus amigos, si mientras estallaban los cordobazos y rebeliones en el interior, mientras morían los mártires de Trelew y los guerrilleros jugaban su vida a cara o cruz, ellos montaban los negociados de Aluar con el aval de Lanusse? Porque las luchas que el pueblo libró y libra en las fábricas, en los barrios, en las universidades, en las villas y ciudades del interior, fueron (y son todavía) parciales. Falta generalizarlas, unificarlas, integrarlas en un programa común, en un programa de opción popular frente al Pacto Social. Ese es el sentido que debe tener un programa de transición que, a partir de las luchas reales del pueblo, pueda estructurar un verdadero bloque de fuerzas antimonopolistas, instrumento que debe sintetizar la actual lucha del pueblo contra sus enemigos.

Las metas de ese bloque antimonopolista —cuya dirección, por ra-

zón de su fortaleza, compete a la clase trabajadora y no a la pequeña ni mediana burguesía—, consecuentes con los intereses de las clases y fracciones de clases que lo componen, deben ser, en líneas generales, las siguientes:

1) Romper la dependencia con el capital extranjero y quebrar el monopolio que sobre la producción de granos y carnes tiene la oligarquía terrateniente.

2) Establecer un nuevo régimen de propiedad en el que ocupe un lugar decisivo el área pública o social en la que se agrupen los principales medios de producción y comercialización. Esta área, a partir de la cual se podrá instrumentar un nuevo modelo de desarrollo que modifique profundamente las pautas de inversión y consumo, deberá coexistir con otra en la que entren empresas mixtas de capital estatal y privado nacional y con una tercera en la que se agru-

pen los establecimientos urbanos y rurales, de propiedad privada de pequeños y medianos productores.

3) Estimular, como condición política insustituible para llevar a cabo la anterior, la creación de nuevas estructuras de poder político, económico y social, desde la base, en las que las grandes masas, orgánicamente, controlen y participen de la gestión social.

Estas metas, que son las del pueblo, difieren profundamente del modelo del Pacto Social, y su diferencia es estratégica, no de ritmos o de velocidad. Solo dentro de esa propuesta —que supone las bases generales para un programa de transición a la construcción nacional del socialismo— tiene sentido discutir la velocidad que se imprime al proceso, esto es, definir las etapas y los tiempos, en función de las relaciones de fuerza, del poder que acumula el pueblo contra sus enemigos internos y externos.

El programa de transición

Un programa de transición no puede ser elaborado por un grupo de especialistas, ni es tampoco un simple producto de las direcciones políticas. Está implícito en las luchas de todos los sectores sociales que chocan con los intereses de los monopolios. Su punto de partida es la actividad de las masas, sus experiencias propias de organización en las fábricas, en los barrios, en las villas y ciudades, en las regiones marginalizadas y empobrecidas por la expansión del capitalismo dependiente. El objetivo del programa de transición revolucionaria es condensar las luchas sectoriales del pueblo, perfeccionando propuestas específicas para la acción antimonopolista; acumulando fuerzas en el camino hacia la construcción nacional del socialismo. Se trata de definir una propuesta global frente a la política económica de las clases dominantes, que tienda a establecer nuevos mecanismos para el crecimiento económico, basados en una transformación profunda de las relaciones de propiedad y en una articulación democrática y popular de las decisiones.

El modelo de acumulación en la etapa de tran-

sición revolucionaria supone imponer una orientación distinta a las inversiones públicas y privadas, de acuerdo con prioridades sectoriales y geográficas que permitan el incremento de los consumos sociales, y desalienten los requerimientos de altos consumos de una minoría de la sociedad. Esto significa, por ejemplo, que en lugar de favorecer la fabricación de automóviles individuales se aseguren las inversiones necesarias para la existencia de un buen transporte colectivo. Por otra parte, una propuesta de este tipo no es ajena a la historia del peronismo, que ya en 1946 había intentado llevar adelante un modelo de desarrollo independiente de las pautas del capital monopolista.

El peronismo revolucionario no ha explotado suficientemente aún la riqueza de la consigna "un modelo de sociedad sin generaciones sacrificadas", como propuesta de transición que intente eludir las secuelas de marginalidad y desocupación que genera con su avance el capital monopolista. Que enfrente la fractura de la clase obrera en un sector aristocrático favorecido por altos ingresos y

El Topo Blindado

otro empobrecido o amenazado constantemente por la pérdida de su fuente de trabajo, y trate de frenar el empobrecimiento de los sectores medios y las prácticas monopólicas.

Esas metas, cuya realización supone el control del Estado por parte del bloque de clases antimonopolistas, se van preparando y procesando en la lucha y la organización de todos los días. Las reivindicaciones de control sobre las condiciones de trabajo que levantan los obreros en las fábricas; la lucha de los villeros por resolver el problema de la vivienda con su participación y control; o la de las Ligas Agrarias por la tenencia de la tierra y contra la monopolización del comercio agropecuario, son todas ellas anticipos organizativos y prefiguraciones del nuevo modelo de sociedad. Porque el programa de transición, como generalización política e ideológica de las movilizaciones de las masas, es, en este momento, mucho menos un proyecto estratégico para un gobierno popular que una herramienta para hacerlo posible, acumulando fuerzas desde el llano, consolidando y unificando las luchas del pueblo.

El programa de transición y las tareas que hacia él van confluyendo, cuyo significado es el de una verdadera opción popular frente al Pacto Social, no equivale, sin embargo, a la postulación ultraizquierdista y vociferante del "socialismo ahora". No es un programa sectario de "clase contra clase", que aísla a los trabajadores de sus aliados naturales. Los procesos revolucionarios auténticos jamás son uniclasistas; son siempre populares. Sus protagonistas no responden a una clase sino al pueblo, a la alianza de las clases oprimidas. El éxito de todo proceso transformador arranca de una distinción correcta entre amigos y enemigos, entre el pueblo y sus explotadores internos y externos. Distanciado por igual del ultraizquierdismo verbalista y del reformismo liberal y movimientista, el sentido del programa de transición es fijar los supuestos sobre los que debe sostenerse la hegemonía obrera en un bloque de fuerzas antimonopolistas. Debe servir además como trama ideológica para unificar los instrumentos organizativos que las masas van creando a partir de sus

luchas reivindicativas, hasta transformarlas en verdaderos contrapoderes sociales con dirección unificada.

El programa de transición sostenido por el bloque de fuerzas antimonopolistas opera como puente entre la lucha popular por las reformas y la lucha de las vanguardias por la revolución, impidiendo que la primera derive en un reformismo que puede ser absorbido y la segunda en un ideologismo abstracto, ajeno a las experiencias cotidianas de las masas y a las formas propias en que ellas se expresan política y socialmente.

Lo que diferencia a una propuesta estratégica socialista del plan Gelbard no es, por lo tanto, la negación ingenua de la necesidad de cubrir etapas en el camino de la liberación. No es siquiera una permanente confrontación crítica de medidas aisladas, puesto que incluso muchas de las leyes contenidas en el paquete enviado al Congreso por el Ministerio de Economía pueden ser recuperadas en un proceso de Liberación Nacional y Social. La diferencia estriba en quién y cómo controla el poder, y en cuál es el objetivo final que se propone. Ese objetivo final condicionará que la Reconstrucción Nacional, la distribución de ingresos y el fortalecimiento del Estado sean entendidos y puestos en práctica por unos u otros de maneras radicalmente diferentes a través de caminos que no se cruzan entre sí, aunque usen un lenguaje parecido.

Ya hemos visto cómo el Pacto Social es un instrumento de la burguesía nacional monopólica en alianza con otras capas propietarias, cuya condición es la desmovilización de los trabajadores y que busca negociar en las mejores condiciones con el capital extranjero y la oligarquía terrateniente una redistribución de recursos y de poder —que es su manera de entender la Reconstrucción Nacional— para lo cual se apropia del Estado y lo coloca a su servicio. El peronismo revolucionario, por el contrario, no cuenta más que con una minúscula fracción del Estado. Consecuentemente, pierde sentido elaborar un paquete coherente de medidas para oponerse al de la alianza hegemónica en el Pacto Social; puesto que una ilusión de

Las reivindicaciones de todos los sectores populares se recogen en el programa de transición.



¿Punto para la dependencia o alianza para la liberación?

ese tipo equivaldría a obviar el problema de quién tiene el poder económico y militar. No se trata de contraponer a cada medida "reformista" de la política económica de Gelbard una posible medida "revolucionaria", sino de enjuiciar a cada una de ellas en el contexto de la estrategia que le da sentido. Tanto es así que incluso algunas leyes propuestas por el equipo económico en la perspectiva de sus intereses propios pueden ser recuperadas por el pueblo si se las inscribe en una política de acumulación de poder. Ese sería el caso de una ley de abastecimiento que pueda acompañarse por el control obrero de la cantidad del producto que sale de la fábrica y de los recibos por su venta, y por el control de juntas de consumidores y pequeños comerciantes sobre las condiciones y precios en que los intermediarios lo entregan al minorista.

Asimismo es posible proponer —a través de las posiciones que se tienen en el aparato estatal (sobre todo el Parlamento)— leyes que, aun sin salir del marco de las reformas, ayuden al objetivo fundamental del programa de transición, que es acumular poder popular. Un ejemplo sería una ley de control de los monopolios, que daría armas a las Ligas Agrarias del Nordeste en su lucha con los grandes pulpos como Cargill y Bunge y Born. De lo que se trata es de que —más allá de pensar ingenuamente que por una ley se pueda eliminar el sistema monopolista— la acción combinada de los parlamentarios con las organizaciones de masas pueda traducirse en una mayor acumulación de poder por parte de estas últimas. Lo mismo podría decirse acerca de proyectos de cogestión que seguramente serán presentados —para desnaturalizar el control obrero— por los parlamentarios que responden a la burocracia.

Tampoco es factible creer que una ley pueda eliminar la explotación del capital sobre el trabajo o aumentar significativamente el poder obrero en las empresas privadas; pero un proyecto de ese tipo puede ayudar a la extensión de la discusión sobre la idea de control en las fábricas y a la movilización de los trabajadores.

El programa de transición, aun partiendo de luchas por reformas que en muchos casos parecen similares a las medidas propugnadas por los grandes empresarios nacionales, debe ser capaz de definir un eje popular de convergencia antimperialista sostenido sobre la movilización creciente de las masas y sobre el desarrollo de su capacidad de control y participación. No toda lucha por reformas es necesariamente reformista. Lo es una reforma que se subordina a los criterios de posibilidad marcados por un sistema; no así cuando es reivindicada no en función de lo que es posible sino de las necesidades y exigencias populares. Un movimiento revolucionario de lucha por reformas es aquel que reivindica, además de la realización de determinada medida, que ella sea controlada y aplicada por quienes la reclaman. Esto se ve claro en relación con los diferentes planteos que sobre la construcción de viviendas realizan el Ministerio de Bienestar Social por un lado y el MVP por el otro: en un caso se trata de fabricar más casas; en el otro de que los habitantes de las villas obtengan en esa lucha, además de viviendas, poder para decidir cómo serán, dónde serán emplazadas, a quiénes se les adjudicarán y quiénes las construirán.

La principal tarea en el camino de la acumulación de fuerzas antimonopolistas es ir encontrando los puentes que puedan unificar todas y cada una

La hegemonía de los trabajadores garantiza el proceso de liberación.



de las reivindicaciones del pueblo con una alternativa global socialista. La construcción Nacional, Liberación Nacional y construcción nacional del socialismo son procesos confluentes si la clase obrera logra liderar el bloque de fuerzas objetivamente antimonopolistas. Aparentemente, reforzar la autonomía obrera en ese frente puede resultar contradictorio con una política de alianzas. No es así, sin embargo; las alianzas —al igual que los enfrentamientos— suponen luchas, y su constitución depende de la correlación de fuerzas entre sus integrantes. No es la carencia de conflictos lo que diferencia a una alianza de un enfrentamiento, sino el que las luchas que tienen lugar dentro de una alianza no son antagónicas, es decir que pueden ser resueltas sin la supresión de una de las partes. Se trata de contradicciones secundarias en el seno del pueblo. Pero de todos modos la constitución de una alianza (en este caso el bloque de fuerzas antimonopolistas) es siempre una relación entre partes, en la que una de ellas dirige a las otras.

Alianza y hegemonía de la alianza se interpenetran: una alianza no puede concebirse al margen del grupo que la dirige; y al modificarse la hegemonía se modifica el contenido de la alianza aunque sigan componiéndola los mismos grupos. Un bloque se constituye siempre a partir de la hegemonía, de la dirección política e ideológica de una fuerza que convoca, a partir de la organicidad que le ha dado su fuerza, y agrupa a las demás. El bloque antimonopolista solo podrá constituirse si la clase obrera —su principal integrante cuantitativo y cualitativo— logra organizar fuerza propia con peso suficiente como para arrastrar detrás de sí —en las líneas de un programa de transición revolucionario— al resto de las clases, fracciones y capas que forman el pueblo.

El primer paso para ello es recuperar el control sobre sus instituciones, desde las que se generan o pueden generarse en las fábricas, hasta los sindicatos. Estos son los organismos sociales que, en diversos niveles, pueden agrupar al conjunto de los asalariados, diferenciarlos del resto de la sociedad, y a partir de esa diferenciación volcar luego su poder hacia la constitución de alianzas con las otras organizaciones del pueblo. Decir que el centro de gravedad del conflicto social está en los obreros de las fábricas no es contradictorio con la postulación de un amplio arco de alianzas antimonopolistas; sino todo lo contrario, en tanto ese bloque no se habrá de constituir si no es la clase obrera quien lo hegemonice. De otra forma cada sector se desgajará en combates parciales sin perspectiva, combates que pueden ser absorbidos o reprimidos.

Por lo demás, una política de alianzas antimonopolistas no puede ser concebida a la manera clásica de los "frentes de partidos" propuestos por una concepción elitista y liberal. Por sobre los partidos, que solo representan (y eso a veces) electoralmente a las clases, deben ser privilegiadas las estructuras sociales que los campesinos, los villeros, los estudiantes, los técnicos, los pequeños empresarios, van creando en la lucha reivindicativa. Es sobre esa trama de organismos, a los que se podrán agregar los partidos, que se edificará la solidez del bloque antimonopolista. La tarea de los trabajadores es, en primer lugar,

y en convergencia con ese proyecto de unificación, recuperar, consolidar y extender sus propias organizaciones. Para que ese proceso sea sólido debe darse, básicamente, allí donde los obreros están naturalmente reunidos y donde, en conjunto, reciben el impacto directo de la explotación: en la fábrica. Luchar por el control obrero en la empresa, ponerse a la cabeza de movilizaciones que reivindiquen el poder de los trabajadores en la determinación de las condiciones de trabajo, es, a la vez, la única garantía profunda de recuperación de las instituciones de clase, la mejor manera de trabajar políticamente para la constitución de un bloque con el resto de los sectores antimonopolistas.

Poner la base de la pirámide de construcción política en la fábrica no significa proclamar un exclusivismo obrero de corte ultraizquierdista. Arrancar de la fábrica significa, además, retornar al mundo cotidiano de los obreros, que es el que mejor sintetiza, en todos los niveles, la crueldad del dominio monopolista sobre toda la sociedad. Desde y hacia la fábrica, donde el obrero se constituye como clase, convergen los problemas de la vivienda y los servicios en los barrios populares, los del transporte, los de la comercialización de los productos de consumo, los de la producción de esos bienes en las zonas agrarias. Los problemas de la salud, de la educación, de la recreación, de la contaminación, de la emigración de mano de obra del campo a la ciudad. Todas aquellas cuestiones que configuran las carencias de las mayorías populares y la abundancia de las minorías privilegiadas.

Es en todos esos aspectos que configuran las condiciones de vida de los trabajadores, generados en los desajustes que en el conjunto de las áreas sociales provoca el capitalismo dependiente, donde pueden encontrarse las razones de clase para la construcción de vías más amplias de relaciones con los otros grupos explotados. Y a partir de allí elaborar formas no ideologistas ni exclusivamente partidistas de alianza.

Claro está que en ese camino las tensiones que genera la existencia de contradicciones reales, aunque secundarias, en los sectores que conforman objetivamente el bloque antimonopolista, pueden ser aprovechadas por el enemigo para dividir las fuerzas del pueblo. Por ejemplo, las contradicciones entre los reclamos de los trabajadores de empresas pequeñas y sus empresarios o la que existe entre consumidores y pequeños comerciantes, o entre pequeños y medianos productores campesinos y trabajadores rurales.

Esta dificultad, inocultable, acentúa la importancia que tiene lograr el mayor poder relativo posible para la clase obrera. Solo sobre esa fuerza puede realmente montarse la posibilidad cierta de perfeccionar un programa de transición que incorpore y compatibilice el conjunto de las reivindicaciones populares en función de golpear sobre el enemigo común. Que al estar en condiciones de prefigurar la reestructuración general del Estado y de la economía para ponerlas al servicio del pueblo absorba las tensiones sectoriales que habitan en su interior. Y además neutralice las presiones de las clases dominantes para hacer jugar a su favor el enorme peso social de los sectores no asalariados de la población. ♦

Quieren proscribir a Montoneros

ESTA ERA LA DENUNCIA QUE PUBLICABA EN LA EDICION QUE FUE SEQUESTRADA EL SEMANARIO "EL PERONISTA", TRANSCRIBIENDO LA DENUNCIA DE LA AGRUPACION EVITA JP, JTP, JUP Y MOVIMIENTO VILLERO PERONISTA. LA NOTA, QUE REPRODUCIMOS, INCLUIA DOS COMUNICADOS ATRIBUIDOS A UNA SUPUESTA "COLUMNA 1º DE MAYO" DE MONTONEROS, QUE SON UNA PRUEBA MAS DE LA CAMPAÑA DIRIGIDA POR LOS SERVICIOS DE INFORMACIONES CONTRA LAS ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS DEL PERONISMO.

En los últimos días hemos podido observar una campaña de difusión engañosa y mal intencionada relacionada a la organización Montoneros.

Varios diarios han publicado recientemente diversos cables de la agencia estatal Télam en los que se dan a conocer supuestos documentos internos de la organización Montoneros según los cuales esta organización incurriría en actividades al margen de la ley; la misma agencia Télam, en relación al asesinato del compañero Mugica, lanzó varios cables en los que no daba informaciones objetivas, sino que se dedicaba a hacer comentarios políticos y a falsear los hechos de la realidad dando a entender malintencionadamente que los compañeros Montoneros eran los autores del crimen. En relación a este mismo hecho, dos matutinos han publicado un comunicado de una falsa e inexistente fracción de los Montoneros, la autotitulada "Columna 1º de Mayo", en la que se repudia al compañero Firmenich por descalificar totalmente a los autores del crimen y haber explicitado que los mismos eran el brazo armado de la reacción. No son otra cosa que comunicados anónimos que provienen de algunos personajes de los servicios de informaciones.

La constatación de estos hechos periodísticos, entre otros, nos obligan a reflexionar sobre los verdaderos objetivos de esta campaña publicitaria. Podemos afirmar que existen dos objetivos: en lo inmediato, se trata de crear el clima y las condiciones para declarar fuera de la ley a la Organización Montoneros, de proscribir y perseguirla políticamente para su destrucción.

A más largo plazo todo esto forma parte de una estrategia del imperialismo que necesita recuperar las posiciones perdidas en nuestro país. Estas posiciones las perdió porque el peronismo luchó con todas sus fuerzas, con todos los métodos y junto a todas las fuerzas y sectores populares que anhelaban la liberación, su estrategia consiste entonces en lograr exactamente lo contrario: que el peronismo quede dividido y paralizado y que además sea totalmente destruido. De este modo ellos lograrán recuperar todas sus posiciones y mantener sus privilegios y nuestra dependencia y explotación. El poner fuera de la ley a nuestros compañeros de la Organización Montoneros es un paso más dentro de esa estrategia, como así lo fue también el asesinato del compañero Mugica y el atroz fusilamiento de tres compañeros trabajadores realizado en el

día de ayer. Montoneros es una organización del pueblo, es una organización de nuestro Movimiento Peronista, surgida en los peores momentos que hemos conocido en los últimos años bajo la prepotencia de los vendepatrias de la dictadura militar. Su lucha fue uno de los elementos determinantes de la derrota de dicha dictadura, que sin embargo mantiene sus fuerzas agazapadas a la espera de su contragolpe. Sin la lucha de los Montoneros y el pueblo peronista no hubiera sido posible el triunfo de esta estrategia del General Perón, porque hubiera carecido del elemento de mayor capacidad para golpear a un ejército que conducido por una camarilla a sueldo del imperialismo funcionaba como ejército de ocupación en su propio país. La sola mención de esta historia de lucha reciente y por lo tanto presente en la memoria de todos los argentinos debería bastar para demostrar que Montoneros es una organización surgida del pueblo Peronista, construida desde el pueblo e inseparable de él. Pero no concluye el accionar popular y revolucionario con la derrota de la dictadura, en la actualidad, y desde el 25 de Mayo, Montoneros viene defendiendo los intereses de los trabajadores, del pueblo y de la Nación entera con su permanente accionar político, consolidando y profundizando la organización masiva del pueblo, única manera de ga-

rantizar un éxito definitivo en este proceso de liberación. Decir Montoneros es decir liberación, es decir derrota del imperialismo y la oligarquía, es la propuesta de unidad nacional bajo la hegemonía de los trabajadores para la defensa y el reencauzamiento del proceso y el triunfo de la Nación.

Hoy, frente a esta campaña insidiosa y al servicio del imperialismo de los monopolios, nuestras agrupaciones JTP, JP, AE, JUP, MVP, MIP, quieren denunciar que lo que quieren poner fuera de la ley no es solamente a la Organización Montoneros, sino al proyecto de liberación que ellos representan, y que esta campaña está dirigida por la agencia estatal Télam, que en la actualidad está bajo el control político del señor López Rega.

Nuestra actitud, coherente con nuestra lucha peronista por la liberación, no puede ser otra que manifestar nuestra absoluta identificación con el proyecto político de liberación que expresan nuestros compañeros de la Organización Montoneros, y que en caso de que esta maniobra de declararlos fuera de la ley se consume, deberán hacer lo mismo con todas nuestras agrupaciones, que es lo mismo que tener que proscribir al pueblo; y finalmente declaramos que de cualquier manera este proyecto de liberación y contra la dependencia que votó el pueblo argentino el 11 de marzo lo



Los grupos que se enfrentan a la universidad no son sino formas nuevas que adopta la escalada vandorista contra la política de reconstrucción universitaria.

De la avanzada que describimos en el número anterior de CONFLUENCIA, la derrota de Weidenbach fue el punto culminante, mostrando lo correcta de la política movilizadora de FULNBA en defensa del acta de compromiso. Fracasado este intento, el vandorismo iba a mostrar su perseverancia por otras vías.

EL CONFLICTO DE LOS TRABAJADORES NO DOCENTES

Al ministro Otero no se le ocurrió nada mejor para infiltrarse en la universidad que utilizar algún sindicato cuya burocracia le fuera adicta para inventarle problemas a la intervención, jaqueando a los decanos respaldados por la Juventud Universitaria Peronista.

No encontrando campo de apoyo en ningún sector representativo de docentes o estudiantes, apeló a los no docentes.

La provocación era burda, pero se intentó. Como el 90% de los trabajadores no docentes está afiliado a APUBA, sólo queda un limitado margen para ser cubierto por ATE, sobre la base de algunas unidades hospitalarias. Pero esta diferencia de representatividad estaba, a los ojitos de Otero, compensada por el hecho de que la dirección de ATE está controlada por Cantizano y su ballet de burocratas del trasvasamiento. Por el otro lado, la dirección de APUBA, con Martínez al frente, pasa por ser un sindicalismo pretendidamente apolítico, pero que en la actualidad cuenta con la oposición del vandorismo para integrarse a la C.G.T. Quizás por esta situación, la dirección de APUBA deba apoyarse realmente en el conjunto de las bases del gremio, llevando adelante consultas con las mismas a través de asambleas francamente representativas.

Otero dictó entonces la resolución 185, por la cual se otorgaba personería a ATE dentro de la universidad. Era el primer paso para que luego este sindicato quedara como el único reconocido dentro de la misma. Además, esto se da simultáneamente con la implementación del Plan Nacional

Universidad

No docentes y estudiantes contra la ofensiva vandorista



Los estudiantes repudiaron la visita de Pinochet.

de Salud, dentro del cual se distribuyen dentro de los centros asistenciales de la universidad que se pretenden derivar hacia Bienestar Social, tales como el Hospital Escuela San Martín, la maternidad Pardo, los institutos Boero y Raffo. De este modo, se minaría una base con que hoy cuenta la universidad, y conjuntamente un total de 4.000 afiliados pasarían —vía M.B.S.— a ATE.

La respuesta de los no docentes ni se hizo esperar. Se fijó claramente que APUBA era el único gremio reconocido en la UBA. A partir de entonces comienzan las tratativas con el ministro de Trabajo, al par que se adoptan medidas de lucha destinadas a revertir su intento.

Primero Otero pidió un plazo de una semana para contabilizar el número que reuniría cada ente gremial. Durante esa semana convocó a una reunión de los gremios estatales del área educacional con ATE. En el interín, FATUN resuelve levantar las medidas de fuerza sin haber obtenido aún respuesta del ministerio. Esta actitud fue repudiada en la asamblea del personal reunida el 29 de mayo en Medicina. Al día siguiente, Otero anunciaba el reconocimiento de APUBA como la entidad representativa de los trabajadores no docentes de la universidad. Saber hasta qué punto esta disposición no viene acompañada por negociaciones y concesiones de APUBA está fuera de nuestro alcance. Lo incuestionable fue la firme decisión combativa del personal no docente por defender sus conquistas y enfrentar la ofensiva del vandorismo en la universidad.

Pero las medidas combativas no se agotaron, dentro de la universidad, en el ámbito no docente. Porque a través de sus entidades gremiales adheridas a CTERA, los docentes universitarios decidieron adherir al paro nacional de maestros. Se oponían de este modo a la política del pacto social, ya que en su adhesión, si bien primó el aspecto de solidaridad con los docentes primarios y secundarios, se albergan justas reivindicaciones salariales.

COMO SE ORGANIZAN LOS ESTUDIANTES

La FULNBA demostró en sus últimas movilizaciones su capacidad de respuesta para defender una política. Así se vio en el en-

frentamiento contra Weidenbach y en la defensa de los decanos fieles al mandato popular. Incluso en el acto de repudio a la visita del gorila Pinochet.

Este poder de movilización debe pasar ahora, a través de la hegemonía que la JUP ostenta en la FULNBA, a traducirse en una **representatividad protagónica** del estudiantado, tendiendo al mismo tiempo a un proceso de unificación de los distintos organismos estudiantiles que funcionan en el país.

Lo que queremos decir es que si bien es indiscutible la representatividad de los centros que componen la FULNBA, tal como lo demuestran las cifras electorales, sucede empero que esa representatividad no suele ir más allá del consenso pasivo a una política, sin el correlato de una participación protagónica por parte de los estudiantes. Porque esta representatividad medida a través del acto de introducir un voto en la urna una vez al año puede inducir a serios errores, ya que la potencia de una organización de masas reside en que la misma se dote de propuestas para garantizar la participación activa del estudiante al nivel en que a éste le vaya "dando el cuero". Y lo que sucede generalmente, por el contrario, es que los organismos estudiantiles tienen propuesta para el estudiante que asume un compromiso mayor, tal cual son las agrupaciones. Por el contrario, los que no participan de éstas, quedan marginados de la vida de la comunidad universitaria.

Dotar al estudiantado de estos órganos realmente masivos es el desafío que hoy se plantea a la militancia universitaria. Un conjunto de compañeros ávido de asumir tareas y que ve positivamente los lineamientos de reconstrucción universitaria llevados adelante por la JUP comprometen particularmente a esta agrupación, que sin duda debe reflejar en el ámbito universitario la situación nacional tendiente a que los estudiantes universitarios puedan integrarse en las mejores condiciones de conciencia y combatividad al Frente de Liberación. La necesidad de ligar efectivamente al estudiante con el pueblo deja así de ser un recurso retórico de asamblea para convertirse en la condición de posibilidad de una política.

Organizar esto es difícil y sen-

cillo al mismo tiempo. Es sencillo porque lograr un nexo entre el centro de estudiantes y los estudiantes teóricamente es simple: basta con formar mesas de trabajo y cuerpos de delegados. Y es difícil por que estos organismos no se forman por decreto, sino que deben reflejar realmente los intereses de los estudiantes. Recaemos aquí pues en que para desarrollar tareas de vanguardia es preciso cumplir dos requisitos: expresar en la universidad los intereses de los trabajadores y el pueblo, e interpretar justamente las necesidades del estudiantado. El primer aspecto es el que aparece cubierto con claridad por la Juventud Universitaria Peronista. Pero, inseparable de lo primero, la segunda faceta es la que hoy debe ser fortalecida.

Por el contrario, existen agrupaciones que prefieren avanzar precisamente por este segundo aspecto de modo excluyente. Se preocupan por expresar las necesidades de los estudiantes y tomar un referente abstracto que habla de "los" obreros, pero que no participa de un proyecto con vigencia a nivel nacional. Caen, inevitablemente, en una política estudiantilista. Cara de la misma moneda son los "partido estudiantiles", que generan "propuestas" para los trabajadores a través de sus análisis ideológicos de la realidad y no de la real historia y práctica de los obreros y el pueblo.

De ahí la enorme responsabilidad que hoy reposa sobre la JUP, en la medida en que de ella depende la mayor parte del conjunto del proyecto de integración de la universidad al proceso de liberación. Esto proviene del hecho de que los estudiantes constituyen el sector de mayor peso dentro de la comunidad universitaria, sin subestimar el aporte de los otros dos que, como se ha visto, participan activamente del mismo.

LA "FULNBA" Y LA "FUA"

Nadie duda de la importancia de la unificación de los distintos organismos estudiantiles. Lo fundamental es ver qué sector se beneficia y cuál se perjudica con esa unidad.

El aspecto principal de la contradicción hoy pasa por el avance del cerco imperialista y las fuerzas del vandorismo sobre el campo popular. De ahí que sea fundamental acumular fuerzas en el

La Juventud Universitaria Peronista y la unidad del movimiento estudiantil

Partiendo de la base de integrar al estudiantado al Frente de Liberación Nacional en forma organizada para enfrentar eficazmente la ofensiva burocrático-imperialista, la JUP concluye:

"Queremos la unidad del movimiento estudiantil como forma de participación organizada del conjunto de estudiantes en el proceso de liberación... Nos interesa el acuerdo con las fuerzas políticas que, ubicadas en el cam-

po popular, estén decididas a generar las condiciones para una participación activa y organizada de los 500.000 estudiantes de nuestra patria.

"Queremos la participación organizada de los estudiantes como parte de los sectores cuyos intereses se enfrentan al imperialismo, con un claro contenido político: aportar a la lucha del conjunto del pueblo bajo la hegemonía de la clase trabajadora peronista, para la definitiva liberación

nacional y social de nuestra patria.

"Queremos, en definitiva, no una unidad vacía, sino una unidad que salde en organización y se inserte en un proyecto político de liberación hegemonizado por la clase trabajadora y el pueblo peronista, y sea una estructura representativa, estable y movilizadora y que asuma como propios todos los canales de participación del movimiento estudiantil."

campo popular y antiimperialista. En ese sentido es importante que si las FUA del interior están controladas por la Juventud Radical y por el reformismo del PC, no por eso estén segregadas de aquellas que como la FULNBA resulta hegemonizada por la JUP. Todo lo contrario: es necesario que esas fuerzas puedan coordinarse en defensa del proceso de reconstrucción universitaria. Pero el segundo aspecto del problema es cómo la JUP mantiene un rol hegemónico en ese proceso de unificación, como garantía de que allí se traduzca realmente la incorporación del estudiantado y la universidad al proyecto liberador. Y aquí no hay, no puede haber, milagros. Toda la posibilidad de plasmar esta pretensión pasa por estructurar una propuesta para el estudiantado del tipo de la que antes marcábamos. El poderío de un proyecto como el de la JUP radica en ser punta de lanza en toda una propuesta para incorporar al estudiante a sus organizaciones de masas.

No debemos olvidar que las res-

tantes fuerzas estudiantiles, como los radicales y el PC, cuentan con propuestas para los estudiantes que parten de sus necesidades como capa intelectual de la pequeña burguesía, sin preocuparse por traducirlas al campo de los trabajadores y el pueblo peronista. Por su parte, el maoísmo y los grupos troskistas no cuentan con un proyecto nacional para ofrecer al estudiante, pero sí pueden especular con las desviaciones ideológicas que provoca en los intelectuales el acercarse a las contradicciones sociales por vía del puro pensamiento. Así el FAUDI, expresión de estas tendencias en parte, se dedica permanentemente a atacar a la JUP, sin reparar en alianzas con FEN o "Leales", o apoyando las críticas al "desorden organizativo" en la mejor tradición liberal.

Sectores sin real peso, al igual que éstos, son los que se nuclean en posiciones centristas, tales como FEN-OUP o los "leales". En la misma franja se ubica AUN que, orientado por el FIP de Abelar Ramos, se suma con su políti-

ca oportunista al coro anti-Montoneros, llevando agua al campo del vandomismo.

Dentro de estos lineamientos acerca de la unidad, el sábado 19 se realizó en Rosario la reunión preparatoria de un congreso unificador que se hará en Buenos Aires entre noviembre y diciembre. Del mismo participaron la FULNBA y la FUA-Córdoba y representaciones de todas las agrupaciones estudiantiles. El centro del debate fue justamente el criterio de representación para delegados a dicho congreso.

Finalmente, con la presencia de 600 activistas de la JUP, 300 de Franja Morada (mayoría de FUA-Córdoba) y estudiantes del MOR y TUPAC, se resolvió aprobar el criterio presentado por la JUP: elección de delegados en un 60% en base a la representatividad y 40% por centros estudiantiles. Por este criterio adquieren mayor peso aquellas fuerzas políticas que tienen un mayor caudal de estudiantes, y lo pierden las que cuentan con centros de facultades de escasos estudiantes. ♦

El Topo Blindado

Alrededor de las diez y media de la mañana comienzan a concentrarse los trabajadores a las puertas de sus fábricas. En la planta de Santa Isabel, en la de Fiat, en las usinas de EPEC. A la misma hora, columnas estudiantiles van brotando del barrio Clínicas, en tanto los obreros del transporte inician la paralización de la ciudad.

De los cuatro costados, columnas obreras y populares marchan animadas de un propósito con mucho de símbolo: "llegar al centro". Hacia el mediodía, pocas son las cuadras del casco chico donde no se producen enfrentamientos con la policía. Era el comienzo del Cordobazo. Al día siguiente "La Prensa" dirá: "Córdoba ha vivido ayer un día terrible, que pasará a la historia".

En algo no se equivocaba el diario de la oligarquía. Porque efectivamente, a cinco años de distancia, aquel formidable levantamiento popular sigue constituyendo un mojón fundamental para la memoria popular en sus luchas por la liberación.

ONGANIA: LA "PAZ" DE LOS MONOPOLIOS

Política de los monopolios, la dictadura de Onganía obró con una lógica implacable, de la que finalmente resultaría prisionero. El programa "eficientista" de Krieger Vasena traducía en última instancia el embate profundo del capital monopolista más ligado al imperialismo. Obviamente, esta preeminencia de los grandes empresarios, fundamentalmente industriales, no podía hacerse, sino en detrimento de otros sectores sociales. Dentro de éstos no solamente resultarían profundamente perjudicados los trabajadores, que verían aumentar la superexplotación de que eran objeto, sino incluso fracciones desplazadas de las mismas clases poseedoras. Pequeños y medianos empresarios, sectores de burguesía agraria, regiones enteras del interior del país, comprendieron rápidamente que eran convidados de piedra en el festín de los grandes monopolios y el imperialismo.

Como semejante política impopular no puede hacerse sin un férreo control del aparato estatal, donde las instituciones parlamentarias pasan a constituirse en verdaderas trabas, el proyecto monopolístico buscó, y encontró al menos por un tiempo, "su" hombre en la figura faraónica de Onganía. Con el aval entusiasta o al menos el consenso tácito de la burocracia

La memoria del pueblo Aunque algunos lo el cordobazo es de todo el



cia sindical, el régimen arremetió eficazmente contra los primeros conflictos obreros que se enfrentaron a su política de "racionalización", y los derrotó. Luego de marzo del 67, cuando la burocracia se bate en retirada o se decide a "participar" abiertamente, la "paz" del onganato parecía extenderse como un enorme manto protector a cuyo abrigo podrían seguir colmándose los bolsillos de los poderosos.

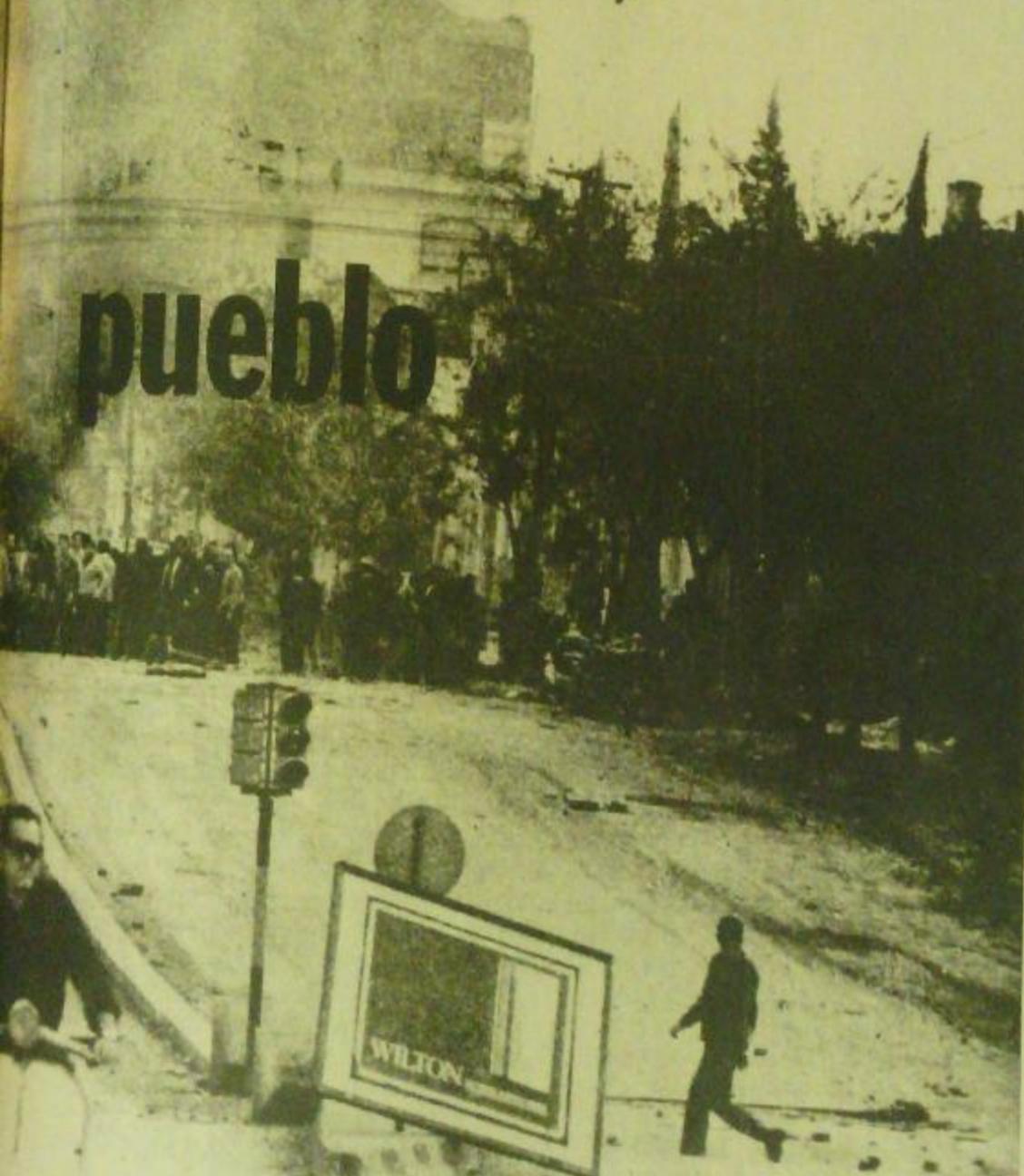
Dentro de ese descenso pronunciado de las luchas populares que entonces se produce, la aparición de la CGT de los Argentinos, un año más tarde, marcó un intento positivo por recuperar la tradición combativa y antiburocrática, fren-

te al clima general de traición, entrega y conciliación en que seguía decayendo la burocracia sindical. Y no era casual que tras la CGTA, pese a su carencia de un referente político y organizativo que le permitiera superar el "sindicalismo de liberación", se nuclearan sectores combativos, ni que su mayor fortaleza proviniera de gremios del interior.

Porque, en efecto, la "revolución argentina" había exasperado una multitud de contradicciones, entre las cuales no era la menor el acentuamiento de las diferencias regionales, como el "operativo Tucumán" lo había mostrado elocuentemente. La provincia de Córdoba no escapaba a esta regla.

soñaron suyo,

pueblo



CORDOBA: LA GUERRA A LA DICTADURA

En una provincia con un interior fundamentalmente agrario, la ciudad de Córdoba aparece en los últimos años como un islote industrializado. Empero, desarrollada centralmente en torno de la industria automotriz, el estancamiento y aun retroceso que esta experimenta hacia 1969 abarcan necesariamente casi al conjunto de la economía de la ciudad.

Esta industria cordobesa es precisamente la que ha creado un proletariado joven y concentrado alrededor de la capital, cuya fuerza iba a demostrarse demoledora durante los sucesos de mayo de 1969.

Asimismo, la "docta" alberga una colonia estudiantil proveniente muchas veces de capas bajas de la pequeña burguesía, incluso de otras provincias, con un grado de concentración apreciable —es lo que da la tónica "al Clínicas"— y con una mayor cercanía respecto de sectores trabajadores que la que se puede apreciar en Buenos Aires, para poner quizás el caso extremo.

En cuanto a los propietarios de las grandes fábricas, son miembros de monopolios extranjeros, generalmente no residen en la misma, y cuyas decisiones siempre están "lejos", en "otros" centros de poder, ya sea en Buenos Aires o aun en el extranjero.

Por fin, la burguesía local mediana y pequeña sufría las generales de la ley del proceso de quiebras y pauperización del conjunto de estos sectores durante la dictadura.

Todos estos factores se iban a conjugar tumultuosamente aquel 29 de mayo.

Durante todo ese mes, una serie de movilizaciones habían recorrido el país. Nacidas en Corrientes, descendieron por Rosario hasta desembocar en Córdoba. A mediados de ese mes, la represión policial se cobraba la vida de Cabral en la provincia mesopotámica. La combatividad del pueblo rosarino también debía pagar a los pocos días su propia cuota de víctimas. Estos hechos obraron como verdadero detonante del conjunto de contradicciones prontas a estallar. Y si fue en Córdoba donde las luchas alcanzaron su cúspide, ello fue posible sobre la base de que esta alza general confluyó allí con una situación de agitación fundamentalmente obrera, que otorgará su tónica particular al cordobazo y hará de esa provincia "el eslabón más débil" de la dictadura onganista.

En la provincia, desde principios de mes, venían sucediéndose, en efecto, diversas huelgas reivindicativas de UTA, SMATA y UOM, donde el problema de las "quitas zonales" y la cuestión del sábado inglés ocupaban un lugar primordial. La respuesta de Krieger Vasena, a nivel nacional, vino el día 9 de ese mismo mes de mayo: aumento general en los precios de los productos de consumo popular.

El 14 de mayo, a la salida de una multitudinaria asamblea convocada por el SMATA, entonces conducido por Elpidio Torres, se producen violentos enfrentamientos con las fuerzas represivas. Se decreta un paro general en Córdoba por 48 horas, cumplido masivamente. La agitación estudiantil crece, culminando con la toma del Clínicas el día 23. Se plantea un paro nacional para el 30. Agustín Tosco, dirigente de Luz y Fuerza, propone que un día antes se realice un paro activo en Córdoba, con abandono de tareas alrededor de las 11 horas y marchas hacia el centro de la ciudad.

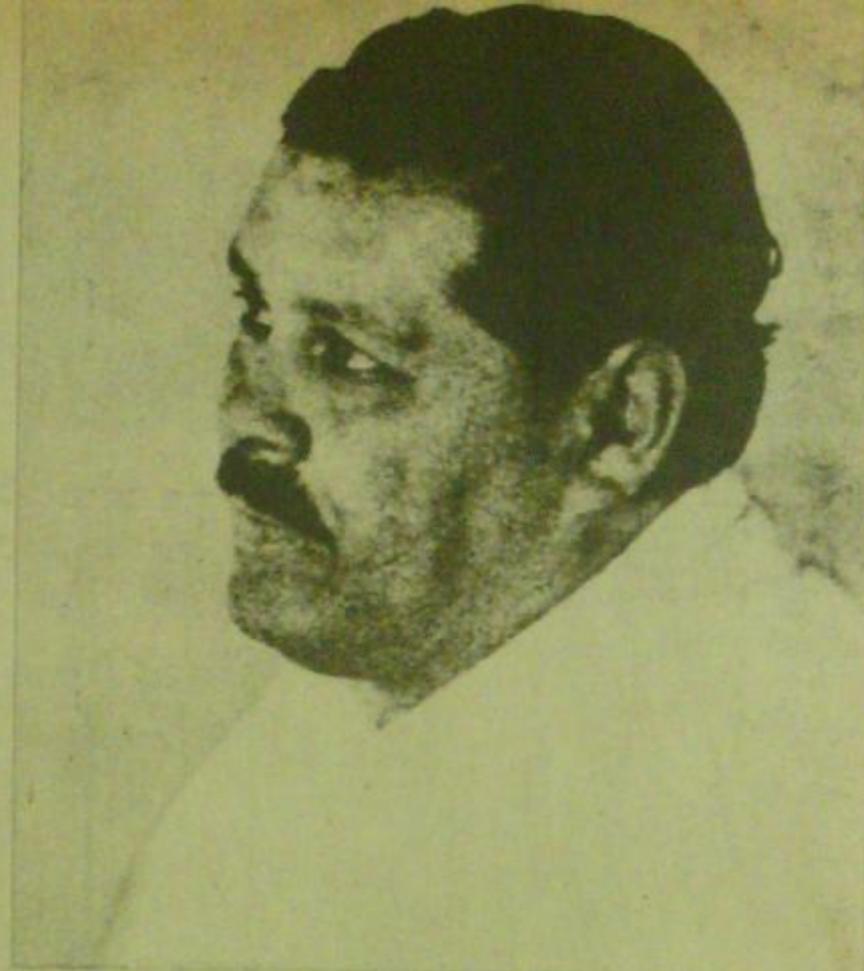
A pocas horas de la indicada, lo que había comenzado como un proceso de luchas reivindicativas desembocaba en uno de los alzamientos populares más importantes de la historia argentina.



Agustín Tosco: 8 años de condena por los Consejos Militares.

El carácter dictatorial asumido por el Estado había contribuido poderosamente a ello. Sin intermediarios entre las demandas económicas de los trabajadores y la permanente respuesta represiva del gobierno, era bastante natural que los conflictos reivindicativos se fueran cargando de contenidos antidictatoriales. Pero, además, el onganismo no era para el pueblo argentino sino la culminación de la situación de represión y de proscripción política contra la que venía luchando desde setiembre del '55.

Justamente, el no haber comprendido este hecho llevó a gran parte de la izquierda a una errónea caracterización del Cordobazo, cuyas consecuencias más visibles se arrastraron hasta las elecciones del 11 de marzo. Porque a partir del 29 de mayo del '69 se creyó estar ante un fenómeno absolutamente novedoso y que abría amplias perspectivas de desarrollo a los sectores de la izquierda argentina. Comenzó entonces a hablarse de un proceso de "desperonización" de las masas, que habría tenido en Córdoba su bautismo al calor de las barricadas. Se desconocieron así algunas particularidades del caso cordobés; pero sobre todo, a partir del reconocimiento por parte de las masas de algunos dirigentes no peronistas —el caso de Tosco es con justicia el más notorio— a quienes aquellas respaldaban por su probada com-



Atilio López: "El Cordobazo marca el fin del ciclo de dominación abierto en 1955"

batividad contra la patronal, la burocracia y la dictadura, la izquierda dedujo erróneamente que la clase obrera y el pueblo cuestionaban su identidad política como peronistas. Presuntamente, además, Córdoba marcaba por adelantado algo así como una etapa de desperonización que pronto habría de transitar necesariamente el resto del país. Que esto estaba lejos de resultar así se verificó palmariamente en el proceso que se abrió en noviembre del '72 y durante el cual, hasta culminar el 11 de marzo, las masas mostraron no sólo su adhesión a su líder, sino también a aquellos sectores del peronismo revolucionario que desde la lucha armada habían combatido con consecuencia a la dictadura.

Claro que el señalamiento de los errores de estos sectores de la izquierda no implica desconocer que en ese momento existían una serie de indicadores que podían alentar al engaño. Porque si es absolutamente cierto que el Cordobazo no había resultado hegemonizado ni conducido por ningún sector de la izquierda, no era menos cierto que tampoco lo había sido por parte del peronismo como fuerza orgánica, y que estas carencias del movimiento mayoritario entreabrían cierto vacío político en esa coyuntura cordobesa. Y es que en un momento en que aparecía claramente consumada la traición del vanguardismo, los sectores del peronismo dispuestos a

tomar con mayor consecuencia las banderas de los entonces 13 años de lucha tenían todavía una existencia inorgánica y potencial. Precisamente, el Cordobazo será el espaldarazo que llevará a la aceleración de su constitución asumiendo la identidad política de la clase trabajadora y planteándose una metodología de guerra popular, que un año después producirá el ajusticiamiento de Aramburu.

Pero en aquel atardecer del 29 de mayo de 1969 no había tiempo para detenerse a reflexionar sobre la historia. Cuando el Ejército entró en la ciudad tomada por el pueblo para sumarse a la represión eran las 17 horas. Los Consejos de Guerra especialmente formados empezarán a funcionar poco después. Tosco será condenado a ocho años y tres meses de prisión. Elpidio Torres, a cuatro años y ocho meses. La cantidad de muertos siempre permanecerá incierta. Una de las primeras víctimas, el obrero mecánico Máximo Mena, permanecerá en la memoria del pueblo como el símbolo de todos los cordobeses inmolados aquel día en su rebelión contra la dictadura. Aún les costará varios días a las fuerzas armadas "restablecer el orden", "su" orden.

Pero será en vano. A partir de ese momento el régimen dictatorial de Onganía se tambalea, herido de muerte. Un año después se derrumbaba, inservible ya para los fines del imperialismo. ♦

El Topo Blindado

El 27 de junio de 1969 se cumplían tres años del golpe cívico que derrocó la dictadura, tiempo más que suficiente como para que la gran mayoría de la población expresara el repudio a su política. El Cordobazo había conmocionado al país, mostrando la debilidad del régimen militar y la falta de representatividad de los burócratas que querían participar del gobierno de Onganía en nombre de los trabajadores. Las movilizaciones que desde principios de año se producen en Villa Ocampo, Villa Quinteros, Corrientes y Rosario y alcanzan su punto más alto en Córdoba, también tendrán repercusión en Buenos Aires. Fortalecida con ese auge de la lucha antidictatorial, la CGT de los Argentinos llama a una movilización en Plaza Once y esa convocatoria será apoyada por todos los sectores políticos, sindicales y estudiantiles que militaban en oposición a la dictadura. En ese acto, en una barricada callejera, será asesinado Emilio Mariano Jáuregui.

Las circunstancias precisas de su muerte aún no han sido aclaradas, pero tal vez esa aclaración que hoy es cada vez más difícil no tenga demasiada importancia. Sea que Emilio haya sido muerto como piensan algunos porque fue reconocido en la calle por algún tira de Coordinación, sea que lo hayan perseguido porque se destacaba en el enfrentamiento con la policía como dicen otros, lo que está claro es que fue asesinado sin que existiera posibilidad de respuesta por su parte, que fue rematado cuando estaba herido en el suelo. La justicia absolverá después a un cabo de policía considerado como autor de la muerte "en legítima defensa". Los testigos no recuerdan al cabo, pero sí a un Rambler que lo persiguió durante más de una cuadra hasta darle alcance y fusilarlo.

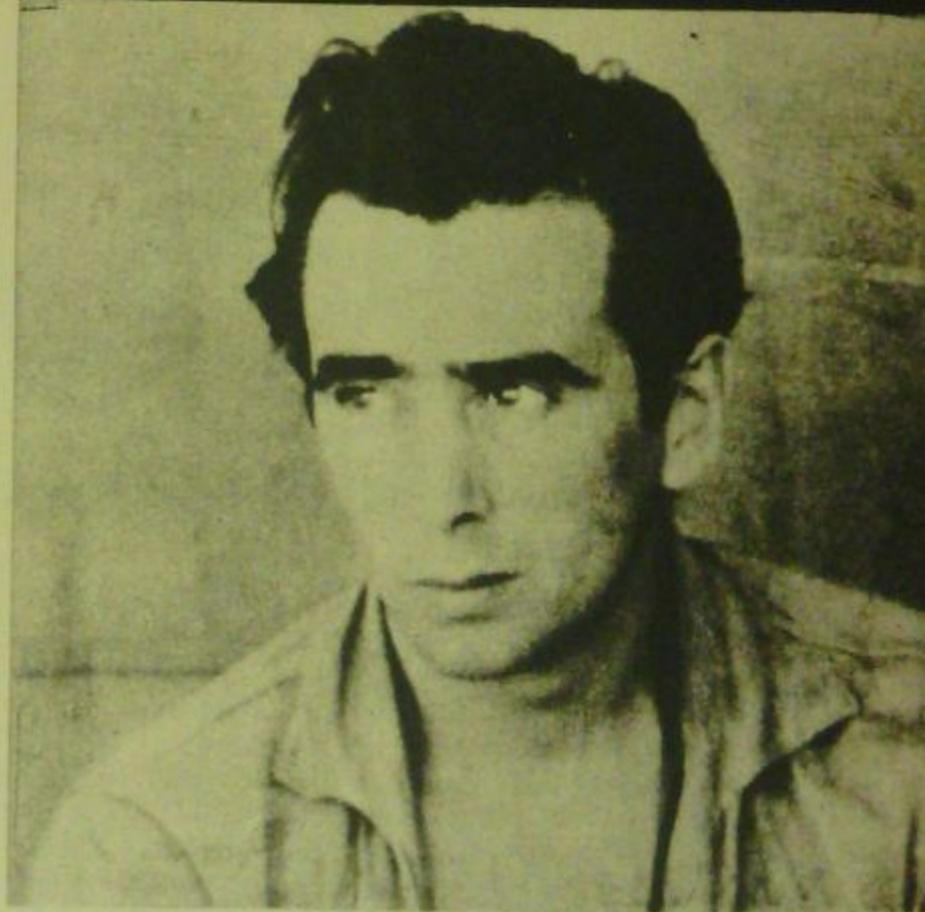
PERIODISTA Y MILITANTE SINDICAL

Desde 1962, Emilio Jáuregui había sido un activo militante en el gremio de prensa. En esos años organizó una elección de Comisión Interna en la redacción del diario "La Nación" y fue inmediatamente despedido, como es lógico, porque para el diario de los Mitre sus periodistas no son trabajadores que puedan sindicalizarse. Desde entonces Emilio se entregó de lleno a la militancia sindical. En abril de 1963, la dictadura de los "colorados" clausura el local sindical y detiene a la mayoría de los militantes y directivos; entre ellos está Jáuregui. Después caería preso muchas otras veces. Cuando la ocupación de "Crítica" en 1964, en un paro general de la CGT en 1965.

En los comienzos de su acción sindical se incorpora al Partido Comunista con el fervor y la entrega que caracterizó toda su vida política. Pero su integración al partido no habría de durar demasiado. Emilio Jáuregui, como muchos de sus compañeros de Prensa, cuestionaba la posibilidad de que los sectores populares accedieran al poder a través de los caminos pacíficos o electorales y adhería abiertamente a las tesis que los dirigentes chinos, vietnamitas y cubanos sostenían en la polémica que entonces se desarrollaba en el movimiento revolucionario internacional. Además, criticaba la posición tradicional del PC frente al movimiento peronista y su negativa a apoyar más

EMILIO JAUREGUI

La búsqueda de un revolucionario



consecuentemente las movilizaciones que planteaban los sectores más combativos de las 62, ante el temor de debilitar al gobierno de Illia, del que se había convertido en aliado.

Esta última polémica se traslada al conjunto del gremio de prensa, y en marzo de 1965 el Sindicato de Prensa de Buenos Aires resolverá su desafiliación del Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical, orientado por el PC. Dos meses más tarde, Emilio será promovido a la secretaría general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, desde donde realizará una infatigable acción sindical. A su gestión está directamente ligada la sanción de las reformas al Esta-



En una reunión mundial de periodistas. Santiago de Chile, 1965.

tuto del Periodista que reimplantaron las mejoras que después de 1955 se habían arrebatado a los trabajadores de prensa.

Miembro del Confederal de la CGT, integra la comisión que en 1964 sanciona el Plan de Lucha y ataca duramente a la burocracia vandonista que, luego de haber realizado una demostración de fuerza con la ocupación de fábricas, se niega a darle continuidad a la movilización. En la CGT, Prensa apoya las propuestas de los sindicatos más combativos de las 62 nucleados por entonces en el MRP; reclama la solidaridad con todos los gremios en conflicto, mociona por un pronunciamiento categórico contra la agresión yanqui a Santo Domingo. La prédica de Jáuregui, anticipatoria en muchos aspectos de las posiciones de la CGTA, le ganará para siempre el odio de la burocracia sindical.

La militancia gremial no lo aleja de la política y a partir de su separación del PC inicia una búsqueda que se prolongará hasta su muerte. En 1965 conoce a John William Cooke y a Gustavo Rearte y la relación con ellos lo llevará a profundizar su comprensión del peronismo, a desprenderse totalmente de las concepciones del Partido Comunista. Discute y mantiene relaciones fraternales con todos los grupos que entonces surgían por fractura de las fuerzas tradicionales de la iz-

quierda y durante un breve período milita en las filas de la Juventud Revolucionaria Peronista.

Entre sus primeras medidas, el golpe de junio del 66 dispone la intervención del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y de la Federación. Los dirigentes vandonistas no consiguieron arrancarle a sus amigos del gobierno ninguna medida que beneficiase a los trabajadores, pero sí lograron barrer a las fuerzas que les hacían oposición en el movimiento sindical. Se inicia entonces, para Emilio, un período de intensa actividad clandestina. Meses antes del golpe, había viajado a China y Vietnam y el viaje dejó una marca imborrable en su pensamiento político. A su regreso desarrolla una agitación incansable en solidaridad con la lucha vietnamita, dicta charlas en facultades y sindicatos, exhibe películas, publica una larga serie de notas en el diario "El Mundo". Después del golpe se transforma en un activo propagandista de la necesidad de la lucha armada. Es el momento en que comienzan a surgir los primeros intentos de retomar el camino de los Uturuncos y del EGP, estimulados por la convocatoria latinoamericana del Che. Emilio participará de todas esas experiencias.

En 1968 se acerca a la CGT de los Argentinos y colabora con distintos grupos políticos mientras discute con todos ellos en busca de definir su militancia. Su profunda adhesión al pensamiento maoísta, su simpatía por la política de los dirigentes chinos, lo impulsa a la colaboración con los grupos que reivindican esa línea en el país. Pero esta relación no le impide seguir colaborando con Juan García Elorrio y un grupo de militantes del peronismo revolucionario en tareas de formación política, ni lo aleja de su actividad junto a Ongaro en la CGT de los Argentinos, que a su muerte habrá de reconocerlo "como uno de sus más queridos y abnegados compañeros". Esa relación tampoco habrá de impedirle en junio de 1969 seguir considerando que la organización para enfrentar con las armas en la mano a la dictadura era la tarea principal.

La muerte cortó esa incesante búsqueda política. Emilio Jáuregui no pudo participar de las luchas que poco después de su muerte mostraron el surgimiento de las organizaciones armadas, no asistió al desarrollo poderoso de las fuerzas revolucionarias del peronismo que hoy constituyen la avanzada del campo popular. Por eso, no tiene sentido utilizar su prestigio para incidir en las discusiones que hoy separan a los revolucionarios. No es para ello que debe recordarse a los compañeros caídos en la lucha, sino para aprender de su ejemplo combatiente. Por eso contar su vida con la mayor objetividad es siempre el mejor de los homenajes.

A cinco años de su muerte, los trabajadores y el pueblo peronista, la corriente mayoritaria de las fuerzas que luchan por la liberación, recuerdan a Emilio Jáuregui como uno de los suyos. No porque desconozcan las divergencias con algunos de sus planteos políticos, sino porque se sienten identificados con todos los compañeros que entregaron su vida en la lucha consecuente que contra la dominación imperialista y la explotación de los trabajadores libró nuestro pueblo a lo largo de 18 años. ♦



La memoria del pueblo

El Aramburazo

Se cumplía un año del Cordobazo. Los ojos de todo el país estaban puestos sobre la ciudad que un año antes había conmovido la "paz" del onganiato. Y por supuesto, la dictadura había centrado sus fuerzas allí, para impedir la repetición de "tan lamentables sucesos". Pero las previsiones fallaron. Hechos como el Cordobazo no se producen con fecha prefijada, y los actos conmemorativos del mismo no estuvieron al nivel de lo esperado.

Ese mismo día en Buenos Aires, dos "oficiales del Ejército" se presentaron a las 9 de la mañana en la casa de Pedro Eugenio Aramburu. Poco después salían acompañados por éste. Había sido secuestrado uno de los jefes de la Revolución Libertadora, el mismo que siendo Presidente de la Nación firmara las sentencias de muerte de los fusilados el 9 de junio de 1956.

La actividad de Aramburu en el último tiempo estaba centrada en la concreción de una maniobra política que lo conduciría nuevamente a la Presidencia: las FFAA destituirían al desprestigiado Onganía, y se abriría un proceso electoral "sin proscripciones", basado en la negociación de la participación del peronismo en los comicios. Apoyándose en sus antecedentes de "hombre de palabra" (había entregado el poder a Frondizi en el '58), y en sectores de la partidocracia política y con las FFAA, Aramburu se postulaba para encabezar ese proceso; papel en el cual en definitiva lo reemplazó Lanusse con el GAN.

Apenas trascendió la noticia del secuestro comenzaron las especulaciones: ¿quién podía

haberlo hecho? Se desató entonces una intensa campaña de rumores. Los sectores liberales a los que estaba ligado Aramburu, desde el primer momento apuntaron sus acusaciones contra el gobierno, denunciando que se había retirado la consigna policial de su casa, y tejendo las más diversas hipótesis para fundamentar sus afirmaciones. Por su parte, el gobierno —por boca del Ministro del Interior Imaz— cometió la torpeza de hablar de la posibilidad de un autosequestro, palabras que retornaron como un boomerang en cuanto se confirmó la veracidad del mismo.

Mientras tanto se habla de una propuesta de canje por presos políticos, aparecen diversos comunicados atribuyéndose la operación. Entre ellos uno —firmado por la organización MONTONEROS— anunciaba que Aramburu sería sometido a juicio revolucionario y que estaba acusado de traición a la Patria y al Pueblo y del asesinato de 27 argentinos. Poco después, otro comunicado de la misma organización aporta pruebas de su autenticidad, describiendo algunas pertenencias de Aramburu; y el 1º de junio anuncian su ejecución. Las especulaciones giran entonces en torno a quiénes son y qué quieren los MONTONEROS.

El gobierno pone en vigencia la Pena de Muerte y el juicio oral con instancia única para los delitos "subversivos", lanzando al mismo tiempo un impresionante dispositivo policial de control de automotores y rastrillajes para capturar a los secuestradores. Sin embargo,

Emilio Maza, caído en La Calera, participó en el Aramburazo.

sus días estaban contados. Las contradicciones en el seno de las FFAA y el desprestigio de Onganía se han agudizado hasta hacerse insostenibles; y estallan con el reemplazo de éste por Levingston.

Poco después la toma de La Calera demostrará que los MONTONEROS son una organización guerrillera. Allí es herido de muerte Emilio Maza, y capturados Vélez y Lozada. Asimismo son identificados Abal Medina, Ramus, Capuano Martínez, Norma Arrostito y Firmenich y poco después caen presos Maguid, Carbone y la hermana de Arrostito y es encontrado el cadáver de Aramburu en una finca de Timote, al N. de la Pcia. de Bs. As.

Los amigos de Aramburu han formado una comisión investigadora —encabezada por el ex comando civil Aldo Molinari— que se encarga de fundamentar la tesis de que estaba implicado el gobierno de Onganía. Se dice que Firmenich había sido visto entrando al Ministerio del Interior y se compara a Imaz



El Topo Blindado

do en el Milagro de la película "Z". La trayectoria de los montoneros conocidos —provenientes del nacionalismo y el cristianismo, y de familias de buena posición— sustenta la tesis de que se trata de una organización de "derecha", o infiltrada por los servicios. Periscopio (Primera Plana) dice refiriéndose a la filiación de los Montoneros: "Izquierda y derecha son palabras demasiado viejas para describir la cambiante realidad contemporánea: tampoco cuadra hablar de revolucionarios; es otra locución equívoca, que podría sustituirse por la de aprendices políticos, enfermos de romanticismo. No es raro hoy, hallar en todos los países del mundo grupos de esta clase, infestados por los servicios de inteligencia y conducidos, entre bambalinas, por otros políticos, realistas —ellos sí— y suficientemente cobardes para dictar sus órdenes criminales desde la sombras".

Que los sectores liberales-gorilas interesados en destituir a Onganía le achaquen a éste la muerte de Aramburu, o que la prensa que los expresa relacione a los montoneros con los servicios no resulta tan extraño como el eco que tales tesis tuvieron aun dentro de sectores de la izquierda. Esta confusión —quizás comprensible en un primer momento— sólo es explicable a partir de la incompreensión que esos sectores padecen del proceso de lucha popular y del dogmatismo con que analizan las coyunturas políticas. Aun hoy, cuatro años más tarde Jorge Enea Spilimbergo —conspicuo dirigente de la "Izquierda Nacional"— se refiere al Aramburazo diciendo "el asesinato de Aramburu (una oscura aberración política)...".

Entre los grupos revolucionarios, sobre todo a nivel universitario, el Cordobazo había pasado a ser un "modelo" al cual debía tender la acción de masas. Habían convertido esa explosión espontánea del pueblo —que revelaba su profundo sentimiento antidictatorial— en un esquema a partir del cual formulaban su estrategia de acceso al poder: el insurreccionalismo. Al mismo tiempo, aislaban el significado del Cordobazo del contexto global de la lucha popular desde el '55, y así se lo

tomaba como punto de partida del surgimiento de una "nueva conciencia", de la "desperonización" de las masas. Esto era coherente con señalar que lo que había faltado en mayo del '69 era "el Partido de la Clase Obrera".

Un doble error. En primer lugar no se comprendía que el Cordobazo había demostrado una tesis exactamente inversa a la que fundamentaba el insurreccionalismo: si bien una insurrección popular es una forma válida de lucha, había quedado plenamente demostrada la



"Aunque vivan cien años sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos bajo el terror constante de ser asesinados. Porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones."

Carta del Gral. Juan José Valle a Pedro E. Aramburu
12-6-56

superioridad del enemigo; y por lo tanto la necesidad de preparar a las fuerzas revolucionarias y el pueblo para librar una guerra de desgaste. Sólo atendiendo a esta carencia fundamental era posible avanzar en la construcción de la organización revolucionaria de vanguardia que condujera al triunfo esa potencialidad revolucionaria que el Cordobazo había demostrado.

En segundo lugar, no se advertía que el Cordobazo no era un hecho aislado, sino que troncaba con la Resistencia, las grandes huelgas, las frustraciones electorales, etc. Que sin comprender ese proceso no se

podía explicar cómo había llegado el pueblo a desarrollar tal nivel de enfrentamiento. Y sin asumir una identificación plena con el mismo, ninguna pretendida "vanguardia" podría convertirse efectivamente en tal.

Así el Cordobazo dejaba un doble mandato. En primer lugar, se trataba de darle continuidad al enfrentamiento acumulando fuerzas para el campo popular, dándole un enmarque estratégico correcto a la lucha antidictatorial del pueblo. Y en segundo lugar el Cordobazo dejaba un mandato político. Si en mayo del '69 la dictadura había tambaleado y se había revertido la situación en la que ésta mantenía la iniciativa en su ofensiva contra el pueblo, se trataba ahora de acorralarla. Fueron varias las organizaciones revolucionarias que emprendieron el camino de la lucha armada para combatir a la dictadura, recogiendo así el contenido del Cordobazo.

Pero en mayo del '70 los Montoneros inauguran un nuevo estilo, en el que recogen el mandato de todo un pueblo de aplicar la justicia revolucionaria, y comienzan a desarrollar la guerra revolucionaria de manera integral. El régimen vuelve a tambalearse, perdiendo una pieza importante, redefiniéndose la coyuntura política. Como ellos mismos dirán, el Aramburazo "es el primer hecho militar realizado por una organización revolucionaria que implica por sí solo definirse políticamente. Ya, asaltar un banco o tomar un destacamento militar no define políticamente a nadie. Y por otra parte, la ejecución provocó una agudización de las contradicciones internas del régimen, de las cuales el resultado es el recambio de Onganía por Levingston, y dejó en evidencia que la verdadera disyuntiva del país es peronismo o antiperonismo".

No se trataba solamente de recuperar dinero o armas para la lucha revolucionaria; con el Aramburazo se recupera la identificación política de un pueblo, manoseado por tantos años de traiciones y claudicaciones; se recupera un proyecto revolucionario latente en las masas peronistas y se da continuidad al Cordobazo increbiéndolo en una historia de luchas que arranca el 17 de octubre de 1945. •

¿Gobierno peronista = dictadura militar?

El último editorial de "Nuevo Hombre" intenta demostrar la caracterización del actual gobierno que la revista anuncia desde la tapa: "Un año de gobierno impopular". Balbín, en reciente declaración a la prensa, ha sido más cauto. Para él el actual proceso comienza el 23 de septiembre o, más bien, el 12 de octubre. Lo anterior pertenecería al terreno indefinible que adopta la historia para el dirigente radical cuando la presencia de las masas en la calle marca el acontecimiento fundamental.

Al hacer el balance de los "50 días" de Cámpora, "Nuevo Hombre" insiste, empero, en que "su gobierno había girado, lenta pero indeteniblemente, hacia la derecha". Por cierto que se reconocen algunos hechos positivos, pero "la democratización de la vida política pronto se empezó a empañar con la intensa campaña macartista; el avance de las libertades públicas tuvo como contrapartida la aparición de nuevas formas de represión a cargo de las bandas fascistas de la burocracia sindical; las ocupaciones democráticas se vieron superadas por las reaccionarias... El gobierno no tocó a la burocracia sindical; por el contrario, se apoyó en ella". En suma, que a esta altura de la lectura un solo interrogante queda sin responder: ¿por qué, a pesar de todas estas garantías que el gobierno de Cámpora brindaba a la burocracia, estas mismas fuerzas fueron la avanzada para derrocarlo?

Para quienes pensamos, por el contrario, que el gobierno del compañero Cámpora constituye un momento realmente importante en el avance de la conciencia popular y en el reconocimiento de la participación de las masas en el proceso de la liberación, no es casual que no compartamos en absoluto las conclusiones del editorialista de "Nuevo Hombre". Esto no significa dejar de reconocer las limitaciones de que el mismo adoleció, ni que fue efectivamente durante su gobierno que se tomaron algunas medidas que luego revelarían marchar en contra de intereses populares.

Pero aquí rescatamos lo esencial de su gestión, cuyo saldo no es precisamente el de haber ido girando "indeteniblemente" a la derecha. Esto resulta fundamental, máxime cuando pensamos que el mandato del 11 de marzo sigue siendo todo un programa que es preciso retomar frente a las traiciones de que ha sido objeto a partir, fundamental y precisamente, del reemplazo de Cámpora del gobierno.

Pero como no es precisamente de incoherencias de lo que se puede criticar a los compañeros de "Nuevo Hombre", creemos que el hilo conductor de esa coherencia está dado por su errónea caracterización no sólo del proceso que se abre el 11 de marzo, sino de las perspectivas revolucionarias en nuestro país. Por-

que esta urgencia por definir un período de gobierno entre las antítesis que sólo nos dan a optar en torno a las opciones polarizadas de "o revolucionario o reaccionario" alberga una determinada caracterización de la etapa revolucionaria en la Argentina.

Se sabe: este tema es clásico en la literatura del activismo bajo el rótulo de "el carácter de la revolución". Que no se trata de un tema académico lo revela el hecho de que la política que se adopta en algunos casos, el campo de aliados que se define, el ritmo mismo de las acciones políticas y el tipo de poder que se proclame están íntimamente vinculados con él.

Así, cuando en el Editorial, por ejemplo, se concluye, del ingreso de la UIA a la CGE, la identidad de intereses y objetivos entre la gran burguesía monopolista ligada al imperialismo (que representa la UIA) y la burguesía monopolista nativa (que hoy controla la dirección de la CGE) se incurre en una clásica verdad a medias que en política concluye por ser un error total. Porque en última instancia lo que se subestima son las contradicciones entre fracciones propietarias en un país capitalista dependiente del imperialismo como el nuestro. Definidas así como contradicciones "secundarias" —en la medida en que en una sociedad capitalista dependiente sólo la clase trabajadora puede ser la columna vertebral del proceso de liberación nacional—, amplios sectores de la izquierda en general han pasado a ignorarlas lisa y llanamente, hasta el punto de que por el hecho de ser "secundarias" entran a parecerse sospechosamente a ser "inexistentes". Esto es lo que en un momento llevó a errar groseramente la caracterización del primer gobierno peronista; a identificar luego el proyecto de Lanusse con el de Perón, y a esforzarse en la actualidad por mostrar la identidad entre las políticas de Krieger Vasena y Gelbard.

Este error es inevitable si se parte de tomar como centro exclusivo y excluyente de la caracterización el hecho de que estas políticas estén decididas o no a mantener el sistema capitalista. Como nadie medianamente sensato duda de que tanto Krieger como Gelbard no están interesados un ápice en alterar el modo de apropiación de los medios de producción, de esto se deduce inmediatamente que ambos representan intereses esencialmente idénticos.

Traducido al terreno político, las diferencias entre Lanusse y Perón también pasan a ser detalles accesorios, lo mismo que las habidas entre la gestión de Cámpora y la actual, en tanto que al carácter dictatorial de la "revolución argentina" se lo equilibra con el fascismo que caracterizaría el actual proceso.

Fue justamente a partir de razonamientos de esta índole como la gran mayoría de la izquierda se vio arrastrada al voto en blanco en las elecciones del 11 de marzo, priorizando definiciones programáticas y caracterizaciones individuales de tal o cual integrante del Frejuli por sobre el significado objetivo que las mismas asumían al ser tomadas por las masas y las organizaciones populares como un medio más de lucha contra la dictadura y de reafirmación de 18 años de resistencia.

En definitiva, este tipo de planteamientos conducen a métodos de análisis economistas y meramente programáticos, donde el ámbito de la política y el real sentimiento de las amplias masas es rápidamente descalificado con el rótulo de "populismo" o "nacionalismo pequeño-burgués".

Porque traducido al ámbito político, justamente, tras estos errores se esconde la concepción permanente de que el peronismo es un fenómeno de "falsa

conciencia de las masas, una desviación de la que es necesario rescatarlas. En suma, que hay que despersonizarlas para, entonces sí, encontrarlas con una conciencia cero kilómetro a partir de la cual la esencia proletaria emerja en toda su pureza. Por eso resulta necesario para esta concepción no reconocer siquiera los momentos de avance más claros que el pueblo o aun las organizaciones revolucionarias han experimentado en y por su conciencia peronista. Como máximo, en lo que se deriva es en afirmaciones ahistóricas, donde la clase obrera se desarrolla, en tanto clase obrera pura y de manera totalmente independiente de la configuración que haya adoptado su conciencia política durante decenas de años.

Del mismo modo, al acercarse permanentemente los términos de comparación entre la "revolución argentina" y el gobierno encabezado por el Gral. Perón, lo que se subestima es que éste tiene un proyecto propio y diferenciado de aquélla. O sea, que del hecho de que el proceso actual no responda a los intereses de los trabajadores —como la imposición del Pacto Social demuestra a las claras— no es deducible mecánicamente que el mismo exprese los del imperialismo.

No ver esto es quedar sin ninguna explicación racional —o razonable, al menos— de la lucha que efectivamente se libró y se libra en la actualidad, aun cuando los representantes de los monopolios extranjeros no lo hagan de una manera estentórea y abierta, replegados todavía luego de la desordenada retirada que debieron emprender el 25 de mayo de 1973.

Y es que de la actual conducción económica a la de Krieger hay una distancia apreciable. Porque lo que la cúpula de la CGE pretende no es liquidar a la industria nacional ni ajustar los lazos con el imperialismo yanqui, sino obtener una posición más favorable para recortar la dependencia y obtener un mayor poder de decisión local. Esto está lejos, como se ve, de configurar un proyecto antiimperialista. De ahí que se diga con justicia que no hay que acelerar este camino sino **cambiar de camino.**

Las limitaciones de este proyecto, además, derivan en gran medida de esta "tragedia" de los grandes empresarios nativos, que se ven condenados a crecer entre dos gigantes: el imperialismo por un lado, y la clase trabajadora y el pueblo por el otro. De ahí que cabalguen continuamente en un campo minado de contradicciones. Así cuando adoptan medidas que tienden a relajar un tanto la dependencia (como es el caso de los convenios económicos con los países socialistas), el imperialismo y la oligarquía los miran con marcada inquietud. Pero como defenderse de la contraofensiva que los sectores reaccionarios pudieran estar armando implicaría recurrir a la movilización popular, reconociendo a los sectores del peronismo revolucionario leales a los intereses del pueblo, entonces la burguesía monopolista retrocede atemorizada, dispuesta a negociar con la oligarquía y el imperialismo, y empantanándose en una política oscilante que no responde a los intereses de la liberación nacional. Peor aún: que la compromete seriamente. Porque las medidas que adopta se parecen cada vez más al caso de quien azuza a la bestia sin aniquilarla.

Y si el gobierno debe mantener la represión y apelar a personeros y métodos execrables para esos fines, es porque esta estrategia de delicado equilibrio de renegociación de la dependencia y de chantaje del imperialismo requiere controlar férreamente al pueblo y a las organizaciones populares.

Empero, de todo esto no puede concluirse —como

NUEVO HOMBRE

Año IV - Nº 63 - 2ª quincena de Mayo de 1974 (págs. 300 - 37)

UN AÑO DE GOBIERNO IMPOPULAR

INFORME ESPECIAL SOBRE EL DEVOTAZO

lo hacen los compañeros de "Nuevo Hombre"— que "el cerco (del imperialismo) no existe". Ya que entonces se cae en la contradicción de afirmar simultáneamente que está en marcha una conspiración militar golpista cuyos planes están "estrechamente ligados al imperialismo". Pero, ¿para qué habría de gestarse semejante "autogolpe" si este gobierno ya expresaría a dichos intereses?

Lo que sucede es que si definimos a la revolución como "socialista desde el vamos", sin un proceso de transición revolucionario nacionalista y popular; si desconocemos las contradicciones entre la burguesía argentina —especialmente aquellas fracciones perjudicadas por los monopolios— y el imperialismo, y entre distintas fracciones de la misma burguesía entre sí; si a consecuencia de ello limitamos el campo de nuestros aliados en los hechos, por más que se reconozca la necesidad del Frente de Liberación pero sin verlo como una necesidad estratégica sino meramente circunstancial; entonces podremos acertar genéricamente en los grandes lineamientos estratégicos, pero nos habremos quedado ciegos para percibir la coyuntura. Y como la política se define por el entrelazamiento que permita arribar a los fines estratégicos a través de mediaciones tácticas correctas y concretas, quienes así no lo entiendan habrán derivado insensiblemente en el estrategismo.

El hecho de que vastos sectores de la izquierda argentina se hayan visto tan a menudo confinados al estrategismo, al principismo, al ideologismo, no constituye una mera desviación pasajera, sino consecuencia en parte de posiciones incorrectas del tipo de las que señalamos.

Paradójicamente, en sus manos el marxismo —"análisis concreto de situaciones concretas"— corre el riesgo de parecerse cada vez más a un conjunto de verdades universales tan "verdaderas" como ineficaces para modificar correctamente la realidad. ♦

Contra todas las fuerzas populares

El pasado 28 de mayo, Benito Llambí, al término de una entrevista que mantuviera con Juan M. Courar y Ramón A. Salem —presidente y director de la empresa Ford— dio algunos detalles sobre la creación del cuerpo de Policía Industrial, novedad que ya había anunciado en su discurso ante las cámaras legislativas el 1º de mayo. Los industriales le habían planteado la conveniencia de retirar a la Gendarmería de la custodia de las fábricas. Pero —no sea cosa que vayan a quedar desprotegidos y a merced de los trabajadores— su lugar será cubierto por este nuevo cuerpo, dependiente de la Policía Federal.

Este es el corolario que el gobierno nacional otorga a las luchas que los obreros libran a favor de la democracia sindical y por la conquista de salarios dignos. Pero para los más exaltados también está la cárcel y la represión. Este es el caso de las fábricas Gatic y Matarazzo, y de la metalúrgica Propulsora Siderúrgica. Seis obreros de Matarazzo y 32 de Gatic fueron detenidos por aplicación de las reformas al Código Penal que reprimen la "incitación a la violencia, la usurpación o privación ilegítima de la libertad" con penas que llegan a los 15 años. Estos trabajadores, en realidad, están presos por peronistas, por defender consecuentemente a sus compañeros despedidos, por pedir mejoras salariales, por decir basta a la explotación de los patrones y actuar en defensa de sus derechos al margen de la burocracia vandorista. Su prisión busca dar un "castigo ejemplificador" para seguir avanzando en la Reconstrucción del bolsillo de los grandes industriales.

En el caso de Propulsora Siderúrgica, los obreros de la planta enclavada en Ensenada recibieron por toda respuesta a sus reclamos la represión. Ocuparon la fábrica para lograr un aumento de cien mil pesos, y para que la UOM local reconociera la nueva comisión interna, ya que la anterior había sido destituida por los obreros por burocrá-

tica. Primero aflojó la empresa, prometiendo los aumentos; pero la UOM se mantuvo en sus cuarenta. Cuando ésta aflojó ante la firmeza de los trabajadores, y éstos quisieron retornar a sus tareas, se encontraron con que muchos de ellos no habían recibido el telegrama de intimación para volver al trabajo, lo que significaba amenazas de despidos. Frente a ello volvieron nuevamente al paro, y luego dieron una tregua hasta el viernes 7 para que la empresa normalice la situación. Hoy se plantean la coordinación del conflicto con compañeros de Villa Constitución.

Nuevamente todos los mecanismos del estado se conjugaron para frustrar la lucha de los trabajadores. La UOM desoyó el pedido de sus bases —al igual que en Villa Constitución, donde aún se espera la prometida normalización de la

seccional—; el Ministro Otero condenó las ocupaciones por "subversivas", el juez dispuso el desalojo, y la policía luego de desocupada la planta apaleó ferozmente a una columna compuesta por obreros, mujeres y niños que se dirigían a la Casa de Gobierno provincial para reclamar una solución.

La nueva legislación penal fue sancionada con la excusa de combatir "la subversión y salvaguardar el orden". Hoy queda claro que esta ley, junto con las reformas a la de Asociaciones y la de Prescindibilidad, constituyen el andamiaje legal destinado a sostener —por las buenas o por las malas— un Pacto Social que no favorece a los trabajadores.

"UNA MASACRE COMO LA DE TRELEW"

Así calificó Raimundo Ongaro al





La movilización popular obtuvo la libertad de los obreros de Matarazzo.

fusilamiento de tres militantes del Partido Socialista de los Trabajadores. El miércoles 29, quince personas armadas con metralletas y que se comunicaban entre sí con aparatos de transmisión portátil, asaltaron el local del PST del pueblo de El Talar causando destrozos, incendiando ropas y colchones, robando máquinas de escribir y mimeógrafos, para retirarse secuestrando a tres hombres y tres mujeres. Estas fueron soltadas pocas cuadras después, luego de golpearlas y amenazarlas, mientras sus compañeros fueron encerrados en los baúles de los autos; y sus cuerpos —acribillados a balazos calibre 9 y 11.25— aparecieron en un paraje desolado cercano a Pilar.

Oscar Mesa, uno de los militantes fusilados, era obrero metalúrgico de los astilleros Astarsa, donde actuaba como delegado de la sección calderería y como miembro del comité de seguridad del trabajador. Había cumplido un rol dirigente en el conflicto entablado el año pasado en el astillero; y había integrado la lista de oposición en la seccional Vicente López de la UOM; donde militaba también Inocencio Fernández, secuestrado, torturado y asesinado el 7 de mayo último. Sus dos compañeros, Antonio Moses y Carlo Zido, trabajadores de la fábrica de embragues Wobron —propiedad de Julio Broner— y de una empresa textil respectivamente, eran reconocidos activistas que no cedían en su lucha antipatronal y antiburocrática.

Tres días más tarde fue asesinado el militante comunista Rubén Poggioni, mientras pegaba —a las 6 de la tarde— carteles alusivos al X Congreso de la Federación Juvenil Comunista. Estos crímenes van marcando una radicalización de la escalada de violencia antipopular desatada el 20 de junio en Ezeiza. Hasta el 1º de mayo, las bandas terroristas y parapoliciales centraron su fuego en las U.B., locales y militantes del peronismo revolucionario; y el objetivo buscado era intimidar y desmovillar al pueblo y aislar a los activistas para neutralizar políticamente su actividad y facilitar su eliminación física.

Esta acción se corresponde con la lucha política que se libraba en el seno del Movimiento Peronista y del aparato del Estado para desplazar a los sectores leales al mandato popular del 11 de marzo; y tiene su complemento en medidas tomadas por el propio gobierno, como la detención de dirigentes montoneros y los allanamientos a locales de JP, JTP, etc. Así, el asesinato de Liliana Ivanov y el cierre del Descamisado fueron dos "jugadas tácticas" previas al 1º, tendientes ambas al mismo objetivo: debilitar la presencia de las columnas de JP en la Plaza. Pero lo ocurrido allí ha obligado a un reacomodamiento de piezas en el tablero, que tiene su expresión en diversos hechos.

Por un lado, en la derrota reconocida por Perón en cuanto a la imposibilidad de organizar a la ra-

ma juvenil bajo su política. Por otro lado, en el refinamiento político con que empiezan a moverse desde entonces las bandas de derecha. Porque no se trata ahora simplemente de eliminar físicamente activistas o de destruir locales de la "tendencia", sino que se busca crear un clima de violencia que genere una inestabilidad política y aumente la confusión en el movimiento de masas. La muerte de Mugica es un ejemplo de esto. Con ella se busca un doble objetivo: eliminar un hombre que no era de ellos (recordar que renunció al puesto en Bienestar Social), y achacarle el asesinato a los Montoneros, para lo que contaron con la amplia colaboración de la prensa "seria".

Así los grupos de "terror blanco" van mostrando que la derecha no sólo apunta el enfrentamiento político en el que está comprometido Perón y el gobierno, sino que empieza a crear las condiciones para un eventual recambio, al constatar que el gobierno peronista es ineficaz para desterrar esa amenaza que constituyen las organizaciones revolucionarias del peronismo para el mantenimiento del sistema. De allí que haya comenzado a atentar contra militantes encuadrados en la "oposición parlamentaria". Claro está que esto no implica aliviar la represión contra los sectores revolucionarios del peronismo, como lo prueban las versiones sobre ilegalización de los Montoneros y la clausura del semanario "El Peronista" ♦

El Topo Blindado



El Topo Blindado

CONFLUENCIA

revolucionaria por la patria socialista



"Nuestra crítica al Pacto Social no es un problema de etapas o de tiempo, sino de rumbo y de sus metas finales. El programa llamado Pacto Social no responde a los intereses de los trabajadores y del pueblo y no nos va a llevar a la liberación.

Tampoco representa los intereses de los trabajadores porque está hecho y conducido en función de los intereses de un sector de los grandes empresarios nacionales que son los que conducen a la CGE y porque su otro firmante, la CGT, a pesar de sus contradicciones, está controlada por el aparato vanderista, que tiene claras relaciones con los intereses imperialistas."

MONTONEROS - BALANCE DEL
1º DE MAYO